



CHILE 2010

SEXTA ENCUESTA NACIONAL UDP | PERCEPCIONES Y ACTITUDES SOCIALES

CHILE 2010

SEXTA ENCUESTA NACIONAL UDP | PERCEPCIONES Y ACTITUDES SOCIALES

CHILE 2010. PERCEPCIONES Y ACTITUDES SOCIALES

INFORME DE LA SEXTA ENCUESTA NACIONAL UDP

Publicación anual
Mayo de 2011

Coordinación
Maite de Cea

Corrección de estilo
Daniela González

Diseño
Otros Pérez

© 2011
I.S.B.N. N° 978-956-314-130-6
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO
Universidad Diego Portales
Grajales 1775, tercer piso, Santiago, Chile
Teléfono 56 2 676 2000
icso@mail.udp.cl

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier formato, sin la expresa autorización de la Universidad Diego Portales. La versión electrónica de este documento, más resultados y acceso a bases de datos, están disponibles en www.encuesta.udp.cl.

5 Introducción

PRIMERA PARTE
POLÍTICA

11 ¿Por qué (no) me quieren? Bachelet y Piñera frente a frente
MAURICIO MORALES / FERNANDO RUBILAR

27 Chile-Perú: determinantes de una desconfianza histórica
CLAUDIO FUENTES / BERTA TEITELBOIM

43 Disolución de la identificación partidaria en Chile
MAURICIO MORALES

59 Precauciones frente al voto voluntario
MAURICIO MORALES

73 Justicia y opinión pública
RODRIGO HERNÁNDEZ

SEGUNDA PARTE
SOCIEDAD

87 La estructuración política del gusto
MODESTO GAYO

97 Cartografía del progresismo en el Chile actual
FRANCISCA GATICA / DAVID JOFRÉ / EMILY JUSTIN-SZOPINSKI

109 Consumo de medios de comunicación e interés en política
ANDRÉS SCHERMAN

119 La mirada de los chilenos a la familia
FLORENCIA HERRERA / BERTA TEITELBOIM

135 Negociando identidad. Las posibilidades del barrio como espacio vinculante con la gran ciudad
FELIPE LINK / MARÍA LUISA MÉNDEZ

147 Ficha técnica

149 Sobre los autores

Introducción

¿Funcionan en Chile las recetas teóricas sobre cómo se comportará la sociedad frente a determinado fenómeno? ¿Es posible identificar el perfil de quienes escuchan cierto tipo de música, votan por tal partido político y profesan ciertos valores? ¿Cómo se miran los chilenos a sí mismos? ¿Lo hacen de la misma manera que un país vecino?

Para conocer éstas y otras percepciones y actitudes sociales se requiere de instrumentos de calidad que puedan proyectarse en el tiempo. Pero también se necesita análisis. La Encuesta Nacional UDP busca hacerse cargo de estos objetivos y contribuir, de este modo, al estudio de las transformaciones sociales en Chile.

Es el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, el que se encarga de esta tarea. Con este propósito, se presenta a continuación un informe analítico de la sexta Encuesta Nacional UDP, correspondiente a 2010.

La Encuesta Nacional UDP cumple con estándares metodológicos exigentes. Desde el inicio de este esfuerzo institucional -en el año 2005-, se decidió hacer públicos los resultados y poner a disposición de la comunidad académica las bases de datos de cada uno de los estudios de opinión que conforman esta colección. Queremos facilitar información que, estamos seguros, aportará a la expansión del conocimiento social. Ésta puede ser obtenida en www.encuesta.udp.cl.

Los trabajos que se presentan en este informe buscan, desde una mirada multidisciplinaria, ahondar en algunos de los temas que emergen de dicha encuesta. En esta oportunidad se abordan principalmente temas asociados a democracia, relaciones internacionales, derechos humanos, preferencias culturales, identificación barrial y la evolución de ciertos temas valóricos como la conformación de las relaciones familiares o derechos reproductivos, observando las dinámicas sociales y políticas presentes en la coyuntura nacional durante 2010.

Asimismo, es la primera vez en nuestra serie que un módulo de la Encuesta Nacional UDP se replica en forma idéntica en Perú. Lo anterior es el resultado de un estudio junto al Instituto de Opinión Pública de la

Pontificia Universidad Católica de Perú, donde se abordaron las percepciones mutuas y la imagen internacional de chilenos y peruanos.

El ICSO tiene por misión coordinar la investigación de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Esta tarea incluye promover espacios de intercambio académico y la realización de extensión, para así vincular el trabajo de la facultad con el medio nacional e internacional. Para lograr estos objetivos, se busca continuamente generar espacios que dinamicen debates sobre los temas centrales que, en el ámbito de lo público, preocupan a la sociedad. Esta versión de la Encuesta Nacional UDP ha permitido seguir aportando al debate social sobre la relación entre política y valores, así como también dar cuenta de las brechas que en distintos ámbitos de nuestra sociedad siguen existiendo.

Las contribuciones de este volumen y su publicación fueron posibles gracias a un proyecto financiado conjuntamente por la Universidad Diego Portales y la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
ICSO-UDP

POLITICA

¿Por qué (no) me quieren?

Bachelet y Piñera frente a frente

MAURICIO MORALES / FERNANDO RUBILAR

Generalmente la aprobación presidencial ha sido asociada al desempeño económico de los gobiernos. Cuando la economía anda bien, se supone que la aprobación presidencial también debiese caminar por la misma senda. Asimismo, los buenos indicadores económicos se ven reflejados en que las personas perciben positivamente tanto la economía personal como la del país. Esa opinión se configura en base a la información que está disponible y que, muchas veces, se resume en favorables cifras de inflación, desempleo y crecimiento. La receta, por tanto, sería muy clara: cuando haya buen desempeño económico, la aprobación presidencial irá al alza.

El caso de Chile, sin embargo, apunta tanto en esta dirección como en la opuesta. El ex presidente Eduardo Frei sufrió la crisis asiática a fines de los 90 y terminó con menos de un tercio de aprobación. Luego, la ex presidenta Michelle Bachelet enfrentó una profunda crisis económica y dejó el poder con altísima popularidad. Y mientras Frei entregó la banda presidencial al candidato de su coalición, Bachelet traspasó el poder a la derecha.

Lo anterior permite, al menos, cuestionar la relación lineal entre desempeño económico y aprobación presidencial. Ambos ejemplos llevan a pensar que los atributos personales de los presidentes también tienen influencia. En este trabajo no evaluamos el efecto de la aprobación presidencial sobre la intención de voto, sino que nos concentramos en los factores más explicativos de dicha aprobación.

Reconocemos que los atributos son endógenos al desempeño. Seguramente, los mandatarios vienen con una determinada carga de atributos desde su elección presidencial que luego puede ir cambiando de acuerdo a la idoneidad que demuestren en su gobierno. Pero también puede ocurrir que el hecho de contar con buenos atributos contribuya a que los ciudadanos valoren, en mayor medida, el desempeño del presidente en determinadas áreas de gestión. Sin embargo, y a pesar de las dudas sobre la relación de causalidad entre estas dos dimensiones (atributos y desempeño), es posible evaluar su efecto sobre los niveles de aprobación presidencial. El objetivo es medir la incidencia que cada una de estas dimensiones tiene sobre la aprobación de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sostenemos, adicionalmente, que las preguntas sobre

desempeño y atributos miden cosas diferentes y, en ese sentido, resulta razonable preguntarse cuál de ellas tiene mayor impacto.

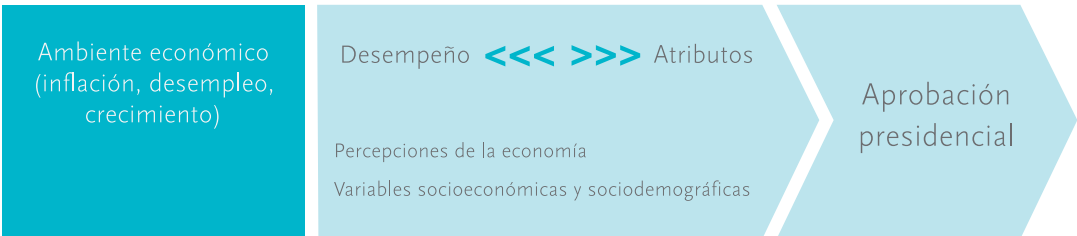
La relación entre desempeño y atributos con la aprobación presidencial es controlada mediante las variables típicas que se incluyen en este tipo de estudios. Por un lado, están las percepciones de la economía. Acá también hay endogeneidad con la evaluación del desempeño del presidente. No sabemos si ese manejo está en función de las percepciones económicas, o si estas últimas son el resultado de una correcta actuación del mandatario. La percepción económica que se levanta sobre la base de los datos más objetivos es la evaluación de la situación económica del país, pero no necesariamente la personal o familiar. El diagrama 1 sintetiza la especificación de estas variables, añadiéndose características socioeconómicas y sociodemográficas de los encuestados.

La Encuesta Nacional UDP aplicó una parrilla de preguntas sobre desempeño y atributos del actual presidente Sebastián Piñera y de la ex presidenta Bachelet. En este trabajo el objetivo fue comparar la constitución de la aprobación presidencial para ambos casos. Intuimos que dicha composición es muy diferente en Piñera y Bachelet. Mientras en Piñera debiesen predominar factores asociados a su desempeño, en Bachelet debiesen imperar los atributos. Esto no implica que Bachelet sea mal evaluada por desempeño. En su caso, tanto los atributos como el desempeño tienen puntuaciones altas y, particularmente en los primeros, las diferencias con Piñera son muy sustantivas.

En Chile, si bien se ha discutido sobre el impacto de factores económicos en la aprobación presidencial (Navia, 2006; Morales y Navia, 2008; Morales y Navia, 2009), poco se ha explorado en el efecto del manejo y de las capacidades personales del presidente sobre sus niveles de aprobación. Teóricamente, ésta se explica más por los atributos que por su desempeño en las distintas áreas de gobierno (Cohen, 1999). En este artículo discutimos tal hipótesis considerando la aprobación actual de Piñera y la evaluación retrospectiva del gobierno de Bachelet (es decir, la valoración que realizan los encuestados una vez concluido su gobierno). No lo comparamos con la aprobación de Bachelet en 2009, pues la idea es analizar la parrilla de preguntas que implementamos en 2010. Además, la aprobación retrospectiva de Bachelet se asimila a la valoración que obtuvo en la medición de 2009 (81,9% y 83,9%, respectivamente) y la composición es más o menos similar. Por último, la ventaja de utilizar la Encuesta Nacional UDP 2010 pasa por preguntar al mismo encuestado por ambos líderes.

Diagrama 1

Variables que inciden en la aprobación presidencial



Fuente: Elaboración propia.

Antecedentes

Si bien existe abundante literatura sobre la nueva democracia chilena en términos de su sistema de partidos, sistema electoral y calidad de la democracia, la aprobación presidencial generalmente ha sido tratada como una variable explicativa de algún resultado político, pero no como una variable a analizar. Ciertamente, hay algunas excepciones recientes que dan algunas luces respecto a cómo se ha comportado la aprobación presidencial en Chile (Navia, 2006; Morales y Navia, 2008; Morales y Navia, 2009; Osorio, 2010).

Contrario al caso chileno, los estudios sobre la aprobación presidencial han sido fecundos en la politología norteamericana (Mueller, 1970; Goodhart y Bhansali, 1970; Kramer, 1983; Norpoth y Yantek, 1983; Eulau y Lewis-Beck, 1985; Mackuen et al., 1992; Pacek, 1994). En éstos, se ha privilegiado el efecto de variables económicas objetivas como el índice de precios, el desempleo y la actividad económica (crecimiento). A fines de los 90 estas variables supuestamente explicativas de la aprobación presidencial fueron complementándose con medidas asociadas a los atributos del presidente (Cohen, 1999; Newman, 2003). Como se ha señalado, en Chile la literatura sobre aprobación presidencial ha privilegiado el desempeño económico como principal predictor. Las particularidades del mandatario, en tanto, muchas veces aparecen como dadas, pero sin un análisis más profundo sobre su efecto en la popularidad del presidente.

De acuerdo a Newman (2003) existe una correlación entre los atributos del presidente y su desempeño. No está clara la direccionalidad causal de la relación, pero al menos, teóricamente, se cree que presidentes con buena gestión también serán valorados de acuerdo a sus características personales. En tal sentido, la dirección causal parece inclinarse hacia el desempeño como factor explicativo de los atributos. Bien pudiera ser que los presidentes fortalezcan estos últimos, en la medida en que tienen buen desempeño gubernamental. Pueden existir presidentes percibidos como honestos o cercanos, pero sin una buena gestión es probable que su aprobación presidencial se mantenga baja.

El caso de Bachelet puede ser ilustrativo. Presuntamente, sus atributos fueron centrales para ganar la elección de 2005 (Morales, 2008), pero insuficientes para lograr altos niveles de aprobación en sus primeros años de mandato. La popularidad explotó en medio de la crisis económica mundial. Es posible que los chilenos hayan valorado el esfuerzo del gobierno y de la presidenta por enfrentar la crisis y, además, promover planes de protección social para los más desvalidos. Entonces, puede ser que este desempeño en medio de la crisis haya fortalecido sus atributos personales. El caso de Piñera es distinto. Asumió en un ambiente de recuperación económica debiendo enfrentar, asimismo, los efectos del terremoto. Hoy su aprobación supera el 50%. Puede ser que esta cifra se explique en mayor medida por su desempeño que por sus atributos: la “honestidad”, por ejemplo, nunca fue una característica preponderante del ahora presidente cuando aún era candidato, como tampoco lo ha sido ya estando en el gobierno.

Frente a esto, es relevante comprender cuál es el peso puntual de los atributos por sobre la popularidad presidencial. Para algunos autores las características personales permiten reducir algunas incertidumbres respecto a la información que se tiene de algún líder o representante, pues aspectos tales como la integridad o la competencia permiten

racionalizar la información con la que los ciudadanos cuentan para evaluar (Popkin, 1991; McCurley y Mondak, 1995). Asimismo, las valoraciones juegan un rol predominante en la evaluación que se hace de los políticos (Kinder, 1986). Al observar los bajos niveles de confianza y honestidad que generan algunos líderes o partidos políticos, se puede suponer que la identificación con éstos será igualmente baja.

Gran parte de los trabajos que han surgido para abordar las características personales de un presidente y su efecto en la aprobación de su desempeño lo han hecho a partir del escándalo Clinton-Lewinsky, que tuvo lugar en 1998 (Cohen, 1999 y 2000; Newman, 2003; Miller, 1999). Si bien algunos estudios ya habían mostrado efectos de las características personales en la aprobación, tales como el de Krosnick y Brannon (1993), donde señalaban que los atributos de Bush ejercieron un efecto significativo en su aprobación después de la Guerra del Golfo, con el escándalo Clinton-Lewinsky se le dio mayor sentido explicativo a las condiciones personales de un presidente. Estos trabajos han constatado que las valoraciones de los atributos por lo general han sido levemente mayores que el desempeño (Cohen, 1999), aunque la relación puede llegar a invertirse (Rico, 2008). Esto fue lo que sucedió en el caso de Bill Clinton: antes de que ocurriera el escándalo con Mónica Lewinsky, sus niveles de aprobación por actuación eran más bajos que los niveles de su valoración personal. Pero a raíz del impacto de dicho escándalo, el nivel de valoraciones positivas comenzó a decaer y, desde ese momento, el porcentaje que valoraba su gestión se mantuvo por encima de sus atributos personales, llegando a muy altos niveles de aprobación (Cohen, 1999; Newman, 2003).

De esto podría concluirse el escaso impacto de los atributos sobre la aprobación. No obstante, y tal como lo plantea Cohen (1999), existe una relación entre la valoración de los atributos personales y la aprobación del manejo presidencial. El problema del caso específico de Clinton es que se vio enfrentado a un escándalo de ribetes mediáticos que generó un impacto sustantivo en la forma en que sus atributos fueron percibidos, lo que podría explicar la caída de su valoración personal. En este mismo sentido, la forma en que los medios o las elites políticas encausan un escándalo tiene un efecto sustantivo en cómo se evalúa posteriormente a un presidente (Shah et al., 2002).

A pesar de esto, Newman (2003) sostiene que la evaluación de los atributos personales sí tuvo un impacto en la aprobación presidencial de Clinton, incluso durante el escándalo Lewinsky. Al parecer los encuestados que tenían una alta valoración de los atributos de Clinton vieron potenciada su aprobación hacia el mandatario cuando éste mejoró su desempeño. Entonces, los atributos personales pasan a multiplicarse con las valoraciones de la actuación, explicando la popularidad histórica del mandatario. Algo similar ocurre con Bachelet. Cuando se alcanzan altos niveles de valoración por atributo y a esto se suma un buen desempeño, los mandatarios estarán expuestos a una superpopularidad (Rico, 2008; Cohen, 2000; Greene, 2001; Newman, 2003).

Análisis de datos

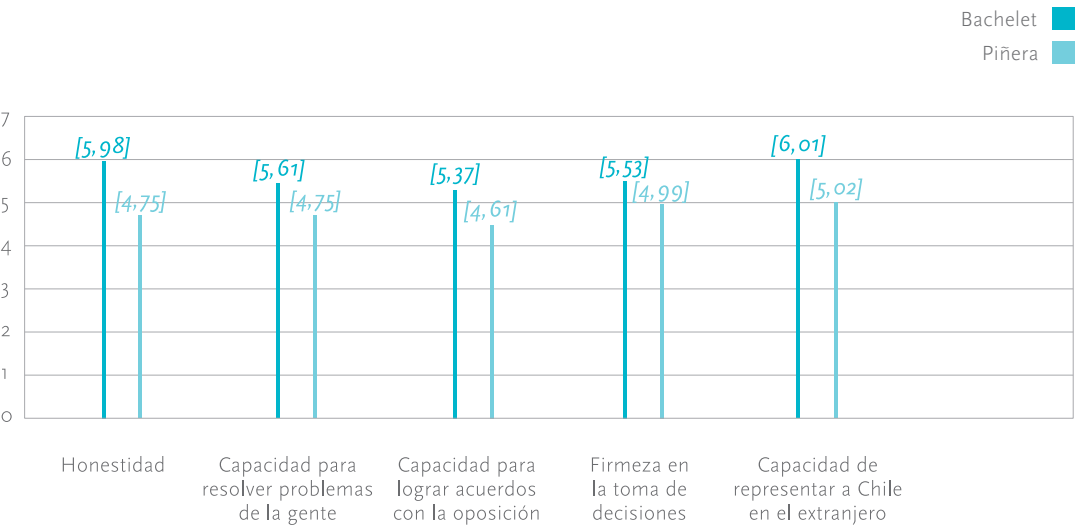
Las diferencias entre la aprobación a Bachelet y Piñera son enormes. Mientras la valoración retrospectiva de la entonces presidenta es de 81,9%, Piñera sólo alcanza el 54,1%. La diferencia puede explicarse, en parte, por los niveles de credibilidad de ambos personajes. Mientras a Bachelet en 2009 el 65,4% le creía siempre o la mayoría de las veces, con Piñera esa cifra es de 38,6%, algo más cercana a lo que obtuvo Bachelet en 2008 (43,3%). Por tanto, y como la aprobación de Bachelet en 2009 y su aprobación retrospectiva en 2010 son excepcionales, parece más adecuado comparar a Piñera con los resultados de Bachelet en sus primeros años de gobierno. Acá la situación se empareja particularmente al evaluar el desempeño.

No contamos con mediciones de atributos para ese período. Lo que sí podemos advertir es que en el caso de Bachelet todas las evaluaciones de desempeño suben desde 2008. Aún resulta difícil probar si es el manejo presidencial lo que fortalece los atributos o viceversa. Pero si pensamos que las características personales estuvieron siempre presentes y que incluso Bachelet las presentó desde su elección como presidenta, entonces difícilmente esos atributos por sí solos explican la aprobación presidencial. Si siempre estuvieron ahí y la aprobación varió sustantivamente, lo que explica dicha variación son otros factores. Acá nos inclinamos por el desempeño, sosteniendo que cuando los presidentes mejoran esta área y cuentan con atributos razonables, estarán en condiciones de crecer a niveles de superpopularidad. Por tanto, el desempeño sería el factor determinante para fortalecer los atributos y -por defecto- la aprobación presidencial.

Los gráficos 1 y 2 comparan los atributos y el desempeño de Bachelet y Piñera de acuerdo a los datos de 2010. Insistimos en que dicha comparación debe ser cautelosa, pues la situación de Bachelet es claramente excepcional. Esto no impide que podamos avanzar en el análisis, pero queremos advertir respecto a lo “injusta” que pudiese llegar a ser esta comparación, dado el desbalance de volumen entre ambos mandatarios.

Gráfico 1

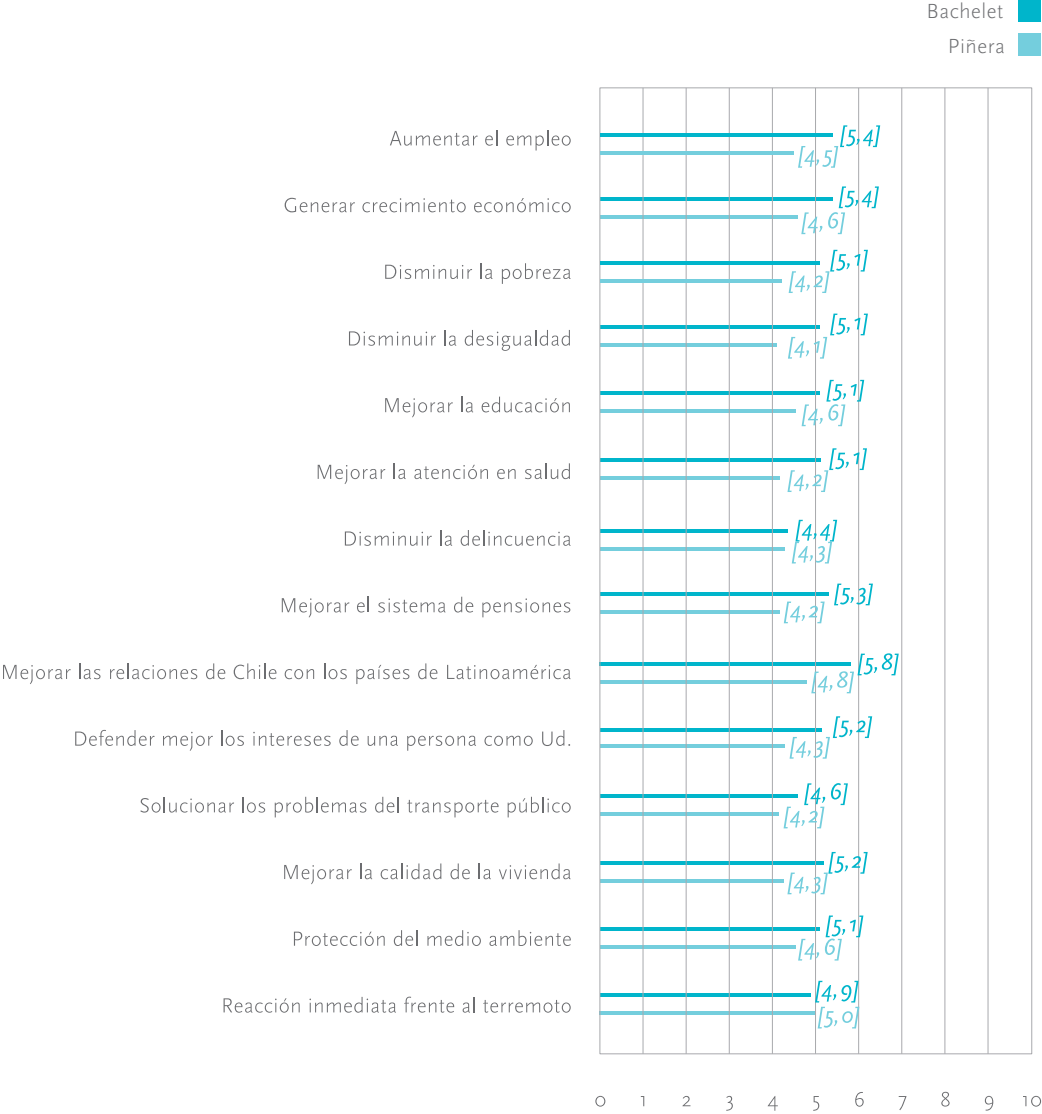
Evaluación de los atributos de Bachelet y Piñera (Escala de 1 a 7)



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráfico 2

Evaluación del desempeño de Bachelet y Piñera (Escala de 1 a 7)



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Las diferencias de volumen de aprobación, atributos y desempeño no impiden un análisis de la composición de dicha valoración. En lo que sigue nos abocamos a esta tarea.

Para hacer más liviana la interpretación de los datos utilizamos algunas técnicas de resumen. Sería muy difícil trabajar con los 14 criterios de evaluación por desempeño que figuran en el gráfico 2. Una opción sería extraer un promedio general de todos ellos, pero ahí podríamos cometer un error: pensar que los encuestados son sumamente consistentes y que califican de manera homogénea al presidente de la República en cada uno de estos criterios. Por ejemplo, pudiera ser que los encuestados evalúen bien al mandatario en asuntos como el aumento del empleo y el crecimiento económico, y mal en salud y educación. En este caso habría al menos dos dimensiones de evaluación que un promedio general no es capaz de capturar correctamente. De ahí que implementemos un análisis factorial que permita resumir y también agrupar los

distintos criterios de evaluación. Este análisis nos arrojará una solución factorial que luego utilizaremos para especificar un modelo estadístico. Este último tendrá como objetivo medir el efecto que tienen tanto los atributos como el desempeño sobre la aprobación presidencial. No podemos incluir los 14 criterios como variables independientes pues, seguramente, habrá un alto nivel de relación entre ellos, generando algunos problemas en la estimación de los coeficientes.

Supongamos que tanto las particularidades personales como el manejo de Bachelet y Piñera están correlacionados. Es decir, que generalmente las personas que valoran los atributos de estos mandatarios también tienen una buena evaluación de su desempeño. Sin embargo, pensamos que probablemente -y particularmente en Bachelet- los atributos tienen una dimensionalidad distinta. Por ejemplo, que por un lado esté la honestidad y por otro la firmeza en la toma de decisiones. Si confiamos en la idea de la “cariñocracia” y que la popularidad de Bachelet se explica básicamente por su cercanía con la gente y no tanto por su gestión, entonces no necesariamente la gente que considere honesta a Bachelet también la evaluará como firme en la toma de decisiones. No obstante, al realizar un análisis factorial de las preguntas sobre atributos, la solución apunta hacia una sola dimensión. Esto se reafirma al correlacionar todos los atributos de Bachelet. Tales resultados no bajan del 0,58, mientras que las correlaciones entre cada variable y el factor no bajan de 0,6.

De todas formas, sería posible dividir el análisis en dos factores, pues hay cierto agrupamiento entre el atributo de honestidad y la capacidad para representar a Chile en el extranjero. Para hacer más fácil la presentación, optamos por una única solución factorial tanto para Bachelet como para Piñera. En este último, la solución factorial es mucho más clara. Las correlaciones entre sus atributos no bajan del 0,79. Esto quiere decir que los encuestados son muy consistentes a la hora de evaluar al presidente en toda la serie de atributos. Los que lo consideren honesto, posiblemente también lo califiquen como firme a la hora de tomar decisiones.

Las evaluaciones por desempeño tienen un comportamiento distinto. Para ambos casos se obtienen soluciones factoriales de dos dimensiones. En el caso de Bachelet hemos denominado como “desempeño” al primer factor, pues agrupa a las áreas de empleo, crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Al segundo factor le hemos denominado “desempeño sectorial”, donde están las evaluaciones de delincuencia, salud y transporte, entre otras. En el caso de Piñera también encontramos dos dimensiones de desempeño. El primer factor agrupa la gestión del presidente en las coyunturas del terremoto y del rescate de los mineros en Copiapó (este criterio no figura en el gráfico, pero fue donde Piñera logró su máxima evaluación: 5,5). Los encuestados son capaces de distinguir claramente entre el manejo presidencial en estas dos áreas y en el resto. Tanto la gestión por los efectos del terremoto como en el rescate de los mineros aparecen distanciadas del resto de las áreas. Al segundo factor le hemos denominado, al igual que en el caso de Bachelet, como “desempeño sectorial”, agrupando salud, delincuencia, crecimiento económico y pobreza, entre otros.

Si pensamos que en el caso de Bachelet las características personales son más importantes que la gestión y que, por tanto, ambas dimensiones avanzan por carriles distintos, entonces lo esperable sería obtener bajas correlaciones entre ellas. Eso apoyaría fuertemente la idea de

“cariñocracia”: que a Bachelet los ciudadanos la valoraban por sus atributos como honestidad, y particularmente cercanía, pero no tanto por su gestión. En el caso de Piñera, en tanto, también podría suceder lo mismo. Frecuentemente se dice que su gestión es más fuerte y más decisiva para la aprobación presidencial que los atributos. Sin embargo, las correlaciones son relativamente razonables. En el caso de Bachelet, y como muestra el gráfico 3, la correlación entre el factor de atributos y el factor de desempeño económico es de 0,6, mientras que la correlación entre el factor de atributos y el factor de desempeño sectorial es de 0,57. Esto viene a demostrar que las preguntas de desempeño y atributos miden cosas distintas y que, adicionalmente, no siempre van estrechamente relacionadas. Más adelante evaluaremos el efecto que tienen sobre la aprobación presidencial para ver si esa aprobación responde casi exclusivamente a los atributos de la ex mandataria.

Como vemos, en los gráficos 3 y 4 los factores están relacionados de acuerdo a los coeficientes que mostramos más arriba. Eso indica cierta consistencia entre las mediciones de atributos y de la gestión. Lo que aún no sabemos es cuál es la dirección de causalidad. Es decir, si la administración es la que fortalece los atributos, o si son los atributos los que permiten que el mandatario sea percibido con mejor desempeño en determinadas áreas. Nuestra hipótesis, y particularmente pensando en que la popularidad de Bachelet explotó en plena crisis económica, es que cuando los presidentes vienen cargados con ciertos atributos (honestidad y capacidades para hacer bien las cosas), les es más fácil alcanzar altos niveles de popularidad si la gente percibe que hay una buena gestión.

Cuando estos factores (atributos y desempeño) puntúan alto y de manera simultánea, entonces lo más probable es que se logren niveles de superpopularidad. Cuando una de estas condiciones falla, en cambio, los niveles de popularidad serán sustantivamente menores. Nos inclinamos a pensar que la dirección causal va desde el desempeño hacia los atributos incluso en circunstancias que un presidente no venga con una “carga” de atributos relativamente razonable. Si los presidentes cumplen sus promesas y resuelven los problemas de la gente, lo más probable es que esto tenga un efecto en los atributos, siendo percibidos como más honestos y como más capaces para enfrentar los problemas del país. Esta propuesta teórica es similar a la que comúnmente se aplica para evaluar los niveles de confianza institucional. Al parecer, la confianza se incrementa cuando las instituciones tienen un correcto funcionamiento y desempeño (Hardin, 1999 y 2001; Segovia, 2006; Morales, 2008).

En el caso de Piñera la correlación entre el factor de atributos y el factor de desempeño en coyunturas puntuales (terremoto y mineros) es la más baja, alcanzando 0.49. Esto quiere decir que si bien los encuestados valoran la acción del gobierno en ambas coyunturas, esto no tiene un correlato con la evaluación de las características personales del mandatario. Perfectamente algunos encuestados pueden catalogar a Piñera como poco honesto, pero muy eficiente al enfrentar estos dos momentos críticos. Es decir, serían capaces de distinguir “lo que es” de “lo que hace” el presidente en estas instancias puntuales. La correlación sube al considerar el desempeño sectorial del gobierno. Hay que recordar que éste incluye medidas de gestión económica en pobreza, desigualdad y empleo, entre otras. Por tanto, no contiene las mismas variables que se utilizan para el caso de Bachelet. Así y todo, parece ser que los encuestados son más consistentes al evaluar los atributos

y la administración del mandatario en las áreas mencionadas: cuando valoran bien a Piñera en gestión, también lo hacen en sus atributos. Esto puede dar pie para fortalecer la propuesta teórica de que el desempeño pueda empujar los atributos y no viceversa. Insistimos en que esto es sólo una propuesta teórica, pues no contamos con una serie extensa de preguntas para medir ambas dimensiones (atributos y desempeño). En el caso de Piñera hay más relación entre atributos y desempeño sectorial que entre atributos y desempeño en coyunturas específicas (ver gráficos 5 y 6). Puede ser, entonces, que mucha gente valore la gestión de Piñera frente al terremoto y al rescate de los mineros, pero que de todas formas lo considere un mandatario poco honesto o sin capacidad para llegar a acuerdos con la oposición.

Gráfico 3

Atributos y desempeño económico de Bachelet. Correlación: 0.6

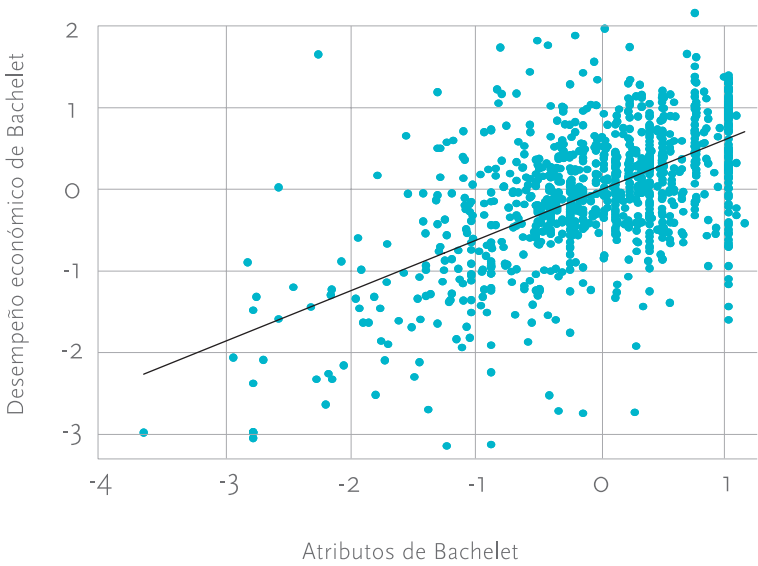
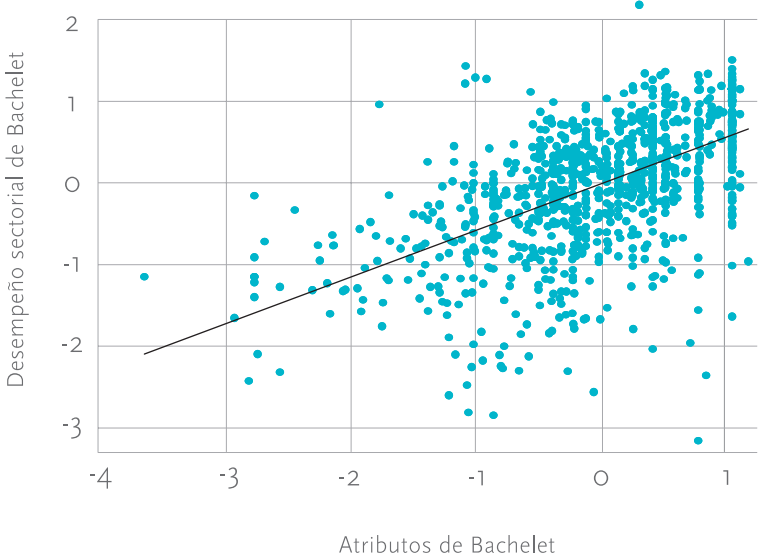


Gráfico 4

Atributos y desempeño sectorial de Bachelet. Correlación: 0.57



Fuente gráficos 3 y 4: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráfico 5

Atributos y desempeño en coyunturas puntuales de Piñera. Correlación: 0.49

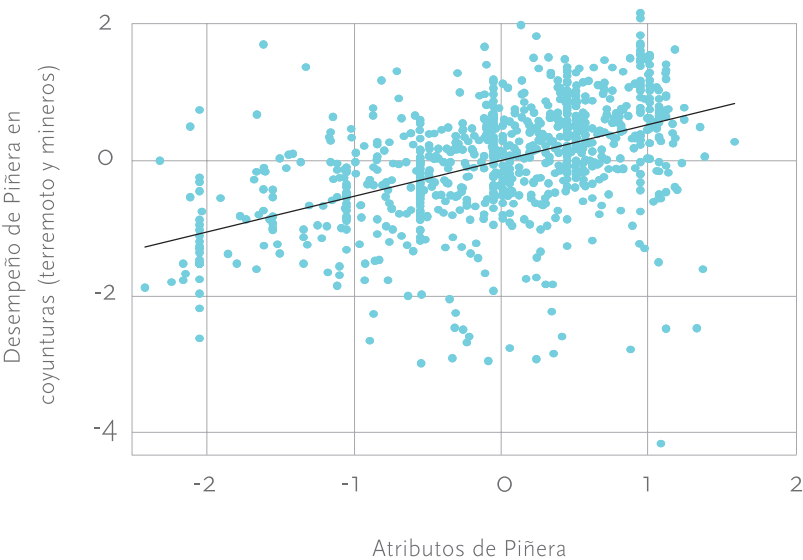
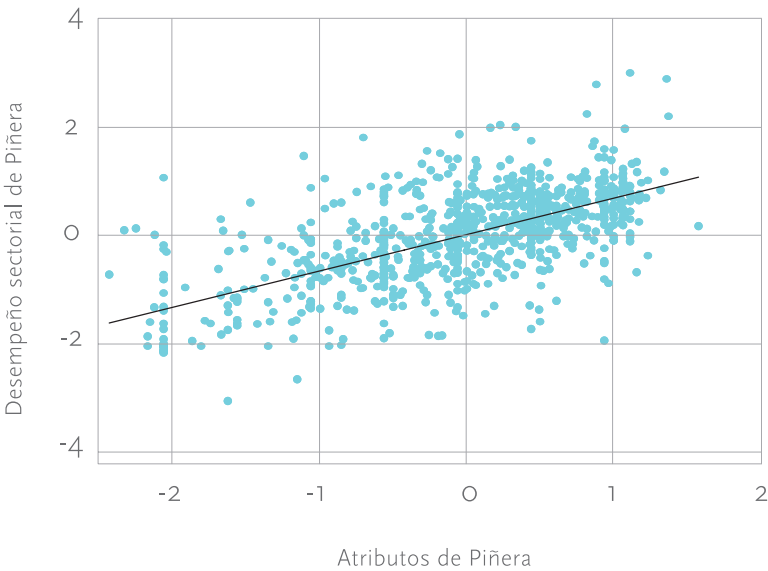


Gráfico 6

Atributos y desempeño sectorial de Piñera. Correlación: 0.64



Fuente gráficos 5 y 6: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

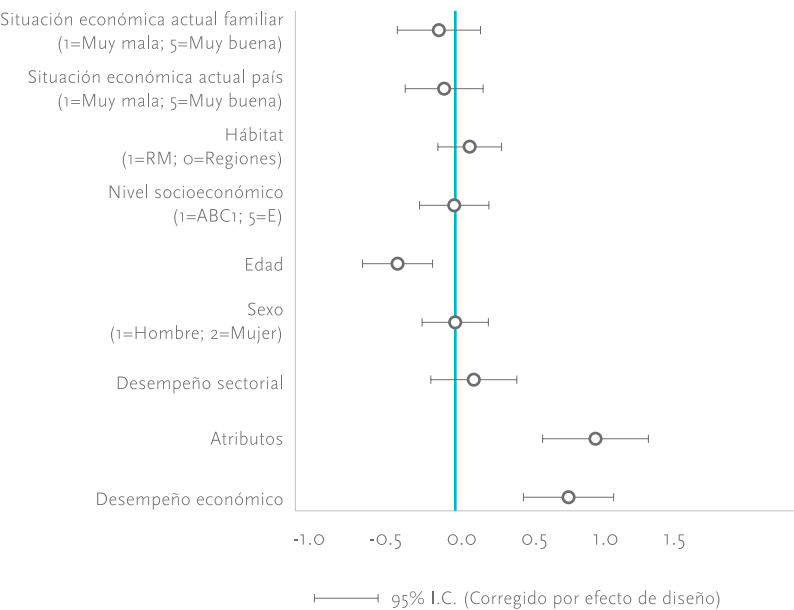
Luego de haber distinguido las dimensiones de atributos y desempeño, nos preguntamos cuál de ellas tiene mayor incidencia sobre la aprobación presidencial. A ésta la entendemos como un resultado de la evaluación de estos atributos y del desempeño. De igual forma, pensamos que las percepciones de la economía también tienen influencia. Seguramente los que mejor evalúan la situación económica actual del país, aprobarán en mayor medida al presidente. La limitación de este análisis es que el contexto económico de los encuestados corresponde a octubre de 2010; es decir, al gobierno de Piñera y, por tanto, las inferencias en torno a la aprobación presidencial retrospectiva de Bachelet tendrán esta limitante.

Para analizar el efecto de estas variables sobre la aprobación presidencial, especificamos dos modelos *logit* (uno para cada presidente) que incluyen sexo, edad y nivel socioeconómico como variables de control. La variable dependiente es dicotómica, siendo el valor “1” la opción aprueba, y “0” el resto de las alternativas (desaprueba, no sabe, no responde). Presentamos los resultados en forma gráfica recurriendo a un “ado.file” del *software* Stata que fue construido por el equipo de Latin American Public Opinion Project (LAPOP) para la ronda de 2008 (gráficos 7 y 8). Se hizo una serie de combinaciones, pero por razones de espacio mostramos los modelos que parecen ser los más robustos. Podría pensarse en el efecto de interacción entre nivel socioeconómico de los encuestados y percepciones de la situación económica actual del país y familiar. Si bien en algunos modelos la interacción es estadísticamente significativa, no cambia el comportamiento general de los coeficientes.

En los gráficos cada variable lleva asociada una barra. En medio de esa barra está el coeficiente beta estandarizado que se representa por un punto. La barra completa, en tanto, corresponde al intervalo de confianza de ese coeficiente. Si la barra toca la línea vertical celeste, esa variable no será estadísticamente significativa a un 5% de error. Si no lo hace, entonces la variable sí será estadísticamente significativa. En caso que se ubique a la derecha de la línea vertical celeste, la variable indicará un incremento en las chances de obtener el valor “1” que corresponde a la aprobación presidencial de cada mandatario. Por ejemplo, si la edad aparece como una variable significativa (es decir, no topa con la línea vertical celeste) y ubicada a la derecha de la línea vertical celeste, diremos que a mayor edad, aumentan las chances de aprobar al presidente. En cambio si la edad está a la izquierda de la línea vertical celeste, indicará que a mayor edad, menor chance de aprobar al presidente, manteniendo constante el resto de las variables.

Gráfico 7

Determinantes de la aprobación presidencial retrospectiva de Bachelet, 2010



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

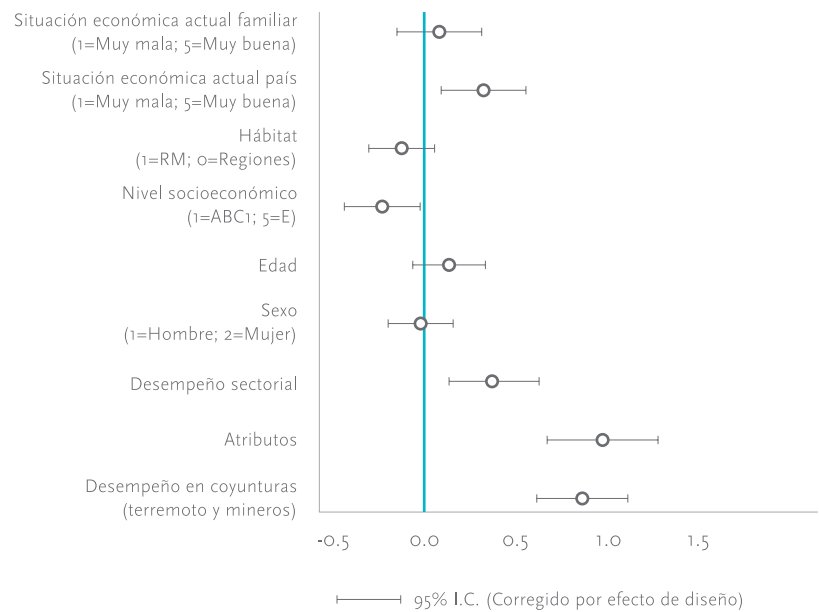
Los pseudo R cuadrados están en torno al 0.3. Por tanto, claramente hay otras variables que contribuyen a explicar la aprobación y que no estamos capturando en estos modelos. Sin embargo -y para efectos de este trabajo- hay algunas tendencias que merecen atención. En primer lugar, para ambos mandatarios los atributos tienen un efecto muy significativo sobre la aprobación. En segundo lugar, hay ciertas áreas de gestión que también funcionan de la manera esperada. En el caso de Bachelet es muy significativa la variable que sintetiza su desempeño económico, sucediendo lo mismo con Piñera donde además se adiciona el efecto de los hechos más coyunturales asociados al terremoto y al rescate de los mineros. En tercer lugar, se confirma una tendencia importante en Piñera: el modelo ratifica lo difícil que le resulta llegar a los sectores más pobres.

Por tanto, para ambos mandatarios el efecto del desempeño y de los atributos tiene un comportamiento más o menos similar. Podría pensarse que en Piñera es aún más evidente, dado que son significativas las dos dimensiones de desempeño, mientras que en Bachelet sólo lo es el área estrictamente económica. En definitiva, entonces, la aprobación de Bachelet no se constituye solamente por atributos y la de Piñera tampoco solamente por desempeño. Hay una combinación de ambas. Es decir, no contamos con evidencia suficiente de pura “cariñocracia” en Bachelet ni de exclusivamente una “nueva forma de gobernar” en Piñera. Al parecer, la aprobación presidencial responde a una interacción de estos factores. Lo que sí resulta más plausible es que en Bachelet primen los atributos por sobre el desempeño dado que su gestión sectorial no resulta significativa en el modelo. No lo es porque, aparentemente, tanto los que la aprueban como los que la desaprueban tienen similares opiniones respecto a esta área. El efecto en el caso del desempeño económico, en tanto, es más visible y permite discriminar a los que aprueban de los que no. Sumado a los atributos, son las dos variables que definen la aprobación.

En Piñera, en tanto, los tres factores son importantes. Es decir, el desempeño sectorial, los atributos y el desempeño en coyunturas críticas. Estos dos últimos parecen ser los más relevantes. El problema está en que el efecto del rescate de los mineros ha caído sustantivamente. Por tanto, las probabilidades de mejorar esta área de la gestión pasan principalmente por la eficiencia en el plan de reconstrucción. Creemos que si este plan es exitoso, seguramente los atributos también mejorarán, aumentando la aprobación presidencial. Todo lo contrario sucederá en caso de que ese plan fracase.

Gráfico 8

Determinantes de la aprobación presidencial retrospectiva de Piñera, 2010



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Conclusiones

La aprobación presidencial está compuesta por dos dimensiones centrales. Por una parte están los atributos del presidente y, por otra, la evaluación de su desempeño. Se podría pensar que ambas dimensiones miden más o menos lo mismo y que se encuentran altamente correlacionadas. En este trabajo hemos mostrado lo contrario. Todo indica que los encuestados son capaces de distinguir la valoración de atributos de los mandatarios y la evaluación de su desempeño.

Tanto en Bachelet como en Piñera los atributos y el desempeño son factores decisivos para explicar sus niveles de aprobación. Aparentemente en Bachelet son más relevantes los atributos, pero eso no quiere decir que la mayor porción de su aprobación sea explicada por las cualidades de la ex mandataria. También son muy importantes las evaluaciones de su desempeño. En Piñera, en tanto, ocurre algo similar, pero parecen ser más importantes las medidas de desempeño. No existe evidencia contundente ni de exclusiva “cariñocracia” en Bachelet ni de “una nueva forma de gobernar (eficiencia)” en Piñera.

Finalmente, hay una tensión metodológica a resolver: la causalidad entre atributos y desempeño. En este trabajo nos inclinamos a pensar que un buen nivel de desempeño contribuye a mejorar los atributos de los presidentes y no viceversa. Para ello ocupamos los ejemplos de Bachelet y Piñera. Si asumimos que las cualidades de Bachelet siempre estuvieron presentes incluso desde su elección como presidente, sería difícil explicar la evolución de su aprobación presidencial sólo en función de esos atributos. Por tanto, resulta razonable pensar que éstos se fortalecen cuando los mandatarios tienen una gestión exitosa. Entonces, cuando los buenos atributos conviven con una gestión percibida como eficiente, los mandatarios tendrán chance de lograr

altísimos niveles de popularidad. El caso de Piñera es más complejo. Desde que fue candidato presidencial jamás destacó en los atributos que sí tuvo Bachelet. Por tanto, su camino a la superpopularidad será mucho más difícil. Al no venir “cargado” de atributos y al incumplir algunas promesas a la ciudadanía (particularmente en lo que a conflicto de interés se refiere), su popularidad tiene un techo mucho más bajo que el de Bachelet. Sin embargo, es posible que los atributos mejoren en la medida en que lo haga la gestión del mandatario. Ya sabemos que un ambiente económico favorable no es suficiente, y que también se requiere un buen desempeño a nivel sectorial.

Referencias

- COHEN**, Jeffrey. 1999. "The Polls: The Dynamics of Presidential Favorability, 1991-1998", *Presidential Studies Quarterly* 29 (4): 896-902.
- COHEN**, Jeffrey. 2000. "The Polls: The Components of Presidential Favorability", *Presidential Studies Quarterly* 30 (1): 169-177.
- EULAU**, Heinz y Michael S. Lewis-Beck. 1985. *Economic Conditions and Electoral Outcome*. New York: Agathon.
- GOODHART**, Charles A. y Rajendra J. Bhansali. 1970. "Political Economy", *Political Studies* 18 (1): 43-106.
- GREENE**, Steven. 2001. "The Role of Character Assessments in Presidential Approval", *American Politics Research* 29 (2): 196-210.
- HARDIN**, Russell. 1999. "Do We Want Trust in Government?", en *Democracy and Trust*, editado por Mark Warren. Cambridge: Cambridge University Press.
- HARDIN**, Russell. 2001. "Conceptions and Explanations of Trust", en *Trust and Society*, editado por K.S. Cook. New York: Russell Sage Foundation.
- KINDER**, Donald. 1986. "Presidential Character Revisited", en *Political Cognition*, editado por R. Lau and D. Sears. Hillsdale: Erlbaum.
- KRAMER**, Gerald. 1983. "The Ecological Fallacy Revisited: Aggregate-Versus Individual-Level Findings on Economics and Elections, and Sociotropic Voting", *American Political Science Review* 77 (1): 92-111.
- KROSINICK**, Jon y Laura Brannon. 1993. "The Impact of the Gulf War on the Ingredients of Presidential Evaluations: Multidimensional Effects of Political Involvement", *American Political Science Review* 87 (4): 963-975.
- MACKUEN** Michael B., Robert S. Erikson y James A. Stimson. 1992. "Peasants or Bankers? The American Electorate and the U.S. Economy", *American Political Science Review* 86: 597-611.
- MCCURLEY**, Carl y Jeffrey Mondak. 1995. "The Influence of Incumbents. Competence and Integrity in U.S. House Elections", *American Journal of Political Science* 39 (4): 864-885.
- MILLER**, Arthur. 1999. "Sex, Politics, and Public Opinion: What Political Scientists Really Learned from the Clinton-Lewinsky Scandal", *Political Science and Politics* 32 (4): 721-729.
- MORALES**, Mauricio. 2008. "Evaluando la confianza institucional. Una mirada desde los resultados LAPOP", *Revista de Ciencia Política XXVIII* (3): 161-186.
- MORALES**, Mauricio y Patricio Navia. 2008. "Aprobación al gobierno y a Michelle Bachelet, ¿dónde está la diferencia?", en informe de Encuesta Nacional UDP 2007: 25-36.
- MORALES**, Mauricio y Patricio Navia. 2009. "Aprobación presidencial en Chile 1990-2005. Más coyuntura que expectativas", manuscrito.
- MUELLER**, John. E. 1970. "Presidential Popularity from Truman to Johnson", *American Political Science Review* 64: 18-23.
- NAVIA**, Patricio. 2006. "La aprobación presidencial en el sexenio de Lagos", en *El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena hacia el socialismo*, editado por R. L. Funk. Santiago: Editorial Universidad Diego Portales.
- NEWMAN**, Brian. 2003. "Integrity and Presidential Approval, 1980-2000", *The Public Opinion Quarterly* 67 (3): 335-367.
- NORPOTH**, Helmut y Thom Yantek. 1983. "Macroeconomic Conditions and Fluctuations of Presidential Popularity: The Question of Lagged Effects", *American Journal of Political Science* 27 (4): 785-807.
- OSORIO**, Rodrigo. 2011. "Aprobación presidencial en América Latina. Determinantes económicos, políticos e institucionales de la popularidad de los presidentes", tesis para optar al grado de licenciado en Ciencia Política, Universidad Diego Portales.
- PACEK**, Alexander. 1994. "Macroeconomic Conditions and Electoral Politics in East Central Europe", *American Journal of Political Science* 38 (3): 723-744.
- POPKIN**, Samuel. 1991. *The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns*. Chicago: University of Chicago Press.
- RICO**, Guillem. 2008. *La construcción política del carisma: Las imágenes de los líderes y su impacto electoral en España*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.
- SEGOVIA**, Carolina. 2006. "Percepciones ciudadanas y calidad de la democracia en Chile", en *Desafíos democráticos*, editado por Claudio Fuentes y Andrés Villar, Santiago: FLACSO Chile / LOM Ediciones, pp. 87-132.
- SHAH**, Dhavan, Mark D. Watts, David Domke y David P. Fan. 2002. "New Framing and Cueing of Issue Regimes: Explaining Clinton's Public Approval in Spite Scandal", *Public Opinion Quarterly* 66 (3): 339-370.

Chile-Perú: determinantes de una desconfianza histórica

CLAUDIO FUENTES / BERTA TEITELBOIM¹

¹ En una versión anterior a este trabajo, colaboró en el análisis descriptivo de las encuestas la socióloga Daniela Muñoz, a quien agradecemos su trabajo. Valoramos en especial los comentarios de Sébastien Dubé y de los participantes del taller ICSO-UDP.

Opinión pública, democracia y política exterior

La importancia del vínculo entre las percepciones ciudadanas y los asuntos exteriores se planteó -desde muy temprano- por el pensamiento filosófico y político de la Ilustración. Esta relación ha sido objeto de importantes reflexiones e, incluso, ha marcado el desarrollo de los estudios internacionales.

Lo anterior no es casualidad. En la medida en que se desarrollaron los primeros análisis sobre lo que sería el Estado democrático moderno, la atención se puso inmediatamente en lo que la ciudadanía percibía. La guerra, por ejemplo, constituía un factor determinante ya que los gobernadores utilizaban principalmente al pueblo en sus emprendimientos internacionales.

Benjamin Bentham observaba a la opinión pública como un verdadero remedio para muchos de los asuntos de gobierno. Según su visión, ella se constituía en un verdadero tribunal: mientras más personas juzgaran un acontecimiento y lo evaluaran en su mérito, menor era el riesgo de cometer un abuso o un error. Bentham, de hecho, promovió ya en su tiempo la idea de eliminar las reservas y operaciones secretas que imponía la diplomacia inglesa, debido a que la no exposición de los asuntos de política exterior al escrutinio público incrementaba la discrecionalidad de los tomadores de decisión.

Pero fue Immanuel Kant el que quizás desarrolló con más fuerza una teoría que vinculaba las percepciones sociales, el sistema político y la paz internacional. Kant sostenía que las repúblicas tendían a ser más pacíficas que las monarquías. En el último caso, la ciudadanía tendería a la moderación y la cautela ya que asumía todos los costos de una guerra. En cambio, en un modelo donde un grupo de actores (y no un monarca y sus asesores) debía tomar la decisión de ir a la guerra, la gente se inclinaría a evaluar con mucho más rigurosidad los costos asociados a tan importantes decisiones.

De esta manera, durante el siglo XX se desarrolló un programa de investigación sobre los conflictos y su vinculación con el sistema político. Se propuso así una de las pocas “leyes” que la ciencia política ha podido confirmar y que sostiene que las democracias no provocan guerras entre sí. La explicación para la teoría de la paz democrática sigue precisa-

mente el razonamiento inaugurado por Kant. Por una parte, en un Estado democrático la ciudadanía presionará a sus autoridades dado que el costo de la guerra es infinitamente más alto para aquellos que deben concurrir al campo bélico (el pueblo), que para aquellos encargados de conducir el conflicto (la elite). Por otra parte, cuando dos democracias interactúan entre sí, llevan a cabo mecanismos formales e informales de resolución de conflictos. Así, se reduce la posibilidad que un problema escale y se traduzca en una disputa armada. Finalmente, para los líderes de países democráticos se plantea un dilema de legitimidad, por cuanto resulta mucho más difícil justificar ante sus compatriotas la decisión de iniciar un conflicto y/o avanzar en una crisis diplomática que en un sistema autoritario.

Sin duda existen escépticos frente a esta posición, considerada muchas veces como idealista. Un grupo de pensadores denominados “realistas” asume que la opinión pública se deja llevar, por lo general, por las pasiones y no por las “razones de Estado”. Para ellos, son otras fuerzas, más estructurales, las que guían el devenir de las relaciones entre los Estados. Sugieren que en el sistema internacional moderno, éstos se confrontan en torno a intereses y percepciones de poder, por lo que ello poco tiene que ver con las impresiones ciudadanas².

Hasta aquí, la pregunta esencial se asocia con el rol que tiene la opinión pública en el devenir de las relaciones internacionales. Para algunos autores resulta esencial tenerla en cuenta porque cumpliría un efecto moderador en el sistema político (asumiendo que es democrático). Para otros, en cambio, apoyarse en este tipo de supuestos es riesgoso, ya sea porque la sociedad se deja llevar por “pasiones”, o bien porque las relaciones internacionales se guían por fuerzas ajenas a lo que sucede con la opinión pública.

En general, los estudios sistemáticos sobre el particular han determinado que -independiente de la deseabilidad de la influencia de la opinión pública en asuntos externos- en contextos democráticos se produce una influencia de los estados de opinión pública en asuntos internacionales: cuando los tomadores de decisión creen que efectivamente la percepción de la gente importa y dependiendo del contexto particular en que las decisiones son tomadas³. En otras palabras, no siempre un estado de opinión pública se traducirá en un tipo de política que se ajustará a lo que la sociedad considere. Un segundo núcleo de interrogantes aborda cómo en una determinada sociedad se desarrolla una percepción de lo “extranjero”, o lo “foráneo”. ¿Cuáles son, entonces, los determinantes que hacen que un país sea más o menos nacionalista; que tenga más o menos confianza en sus países vecinos?

Lo anterior implica asumir que, efectivamente, existen diferencias en las percepciones sociales en relación con los asuntos de política exterior y en las impresiones respecto del otro. ¿Es este el caso? Una mirada general a las percepciones sociales sobre asuntos internacionales (tabla 1) demuestra que éstas varían de un país a otro. Y considerablemente. Por ejemplo, se observan diferencias bastante significativas en temas como la confianza en Naciones Unidas, la opinión sobre si ésta debe ser la institución que decida sobre asuntos como la mantención de la paz internacional y los asuntos vinculados a derechos humanos, y la percepción de orgullo de su propia nacionalidad. Al comparar la confianza que se tiene respecto de personas de otro país, vemos que Brasil, Chile y Perú manifiestan una muy alta desconfianza, mientras que Argentina y Uruguay registran una confianza regular y más cercana a los niveles que se observan en España.

2 Una síntesis de estos argumentos se encuentra en Ole Holsti. 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. Michigan: The University of Michigan Press.

3 Ver, por ejemplo, Douglas Foley. 1999. *Counting the Public in Presidents, Public Opinion and Foreign Policy*. New York: Columbia University Press.

Tabla 1

Percepciones sociales en relación con asuntos internacionales

	Suecia	Canadá	España	Argentina	Brasil	Chile	Perú	Uruguay
Confianza en ONU (mucho/bastante)	78,2	59,5	59,8	22,5	49,4	42,9	31,4	48,3
¿Quién debe decidir sobre mantención de paz internacional? Opción: ONU	72,2	69,9	67,7	66,0	71,2	48,3	s/i	71,1
¿Quién debe decidir sobre derechos humanos? Opción: ONU y organizaciones regionales	82,9	52,3	81,0	51,3	53,1	43,1	s/i	56,7
¿En qué medida está Ud. orgulloso/a de su nacionalidad? Opción: muy orgulloso	42,6	69,9	59,9	63,3	39,3	59,1	s/i	75,7
¿Cuánto confía en personas de otra nacionalidad? Opción: completamente	19,3	3,5	7,5	8,6	2,5	4,2	1,1	12,3
¿Cuánto confía en personas de otra nacionalidad? Opción: poco	71,3	73,6	41,9	50,6	24,5	26,1	16,2	43,8
¿Cuánto confía en personas de otra nacionalidad? Opción: no mucho o nada	9,4	22,8	50,6	40,7	73,0	69,7	82,6	43,9

Fuente: Encuesta Mundial de Valores. Serie 2005-2008. El detalle de las preguntas y cuestiones metodológicas en www.worldvaluessurvey.org.

En el caso de la sociedad chilena destaca, a simple vista, una mayor desconfianza con los instrumentos internacionales para la resolución de conflictos, un relativo alto nivel de nacionalismo, y una importante desconfianza con relación a personas de otra nacionalidad. Lamentablemente se carece de mediciones similares para el caso de Perú, aunque en las dos preguntas donde se cuenta con datos, destacan la baja confianza en Naciones Unidas y la alta desconfianza en personas de otra nacionalidad.

Retornando entonces a nuestra segunda interrogante, de existir diferencias en las percepciones sociales, ¿cuáles serían las determinantes que las definen en relación con lo externo al país? Las respuestas, generalmente, han apuntado a destacar tres tipos de dimensiones: a) la experiencia histórica de inserción internacional y particularmente lo vinculado a la consolidación del Estado-nación; b) factores de desarrollo social que generan mayores niveles de interacción (ciclos migratorios, por ejemplo); y c) el desarrollo económico que, eventualmente, podría transformar las percepciones sociales en relación con un conjunto de materias valóricas en la línea del trabajo planteado por la teoría de la modernización. En la siguiente sección abordaremos estos elementos considerando los casos de Chile y Perú en particular.

Chile y Perú: desconfianza histórica y recientes desarrollos

La forma en que se estableció el Estado-nación en América del Sur, durante el siglo XIX, contribuyó sustantivamente a las percepciones sociales entre los pueblos. La guerra no sólo permitió el establecimiento de límites, sino también permeó a las sociedades, pues el bajo pueblo fue el reclutado en cada uno de los emprendimientos bélicos iniciados por algún país. La Guerra del Pacífico, para el caso de Chile-Perú-Bolivia, marcó el destino de sus relaciones vecinales y de las percepciones sociales en torno al otro. Así, la primera determinante evidente de las percepciones sociales se encuentra 130 años atrás, cuando Chile, Perú y Bolivia se enfrentaron militarmente. Dichas impresiones se reprodujeron generación tras generación a partir de los sistemas educativos formales y la socialización informal predominante en cada país.

Pero la percepción en torno del otro es relativa. Se construye también con relación a la autopercepción del propio país y su posición en el concierto internacional. La forma en que se percibe al otro dice relación también con las opiniones predominantes respecto de uno mismo. Y en términos comparados, entre Chile y Perú existen tres grandes diferencias en los desarrollos socioinstitucionales propios que podrían afectar las valoraciones mutuas: la estabilidad institucional, el desarrollo social y el desarrollo económico.

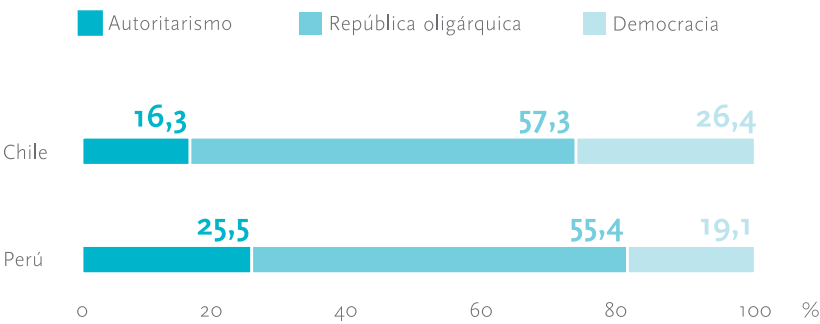
En relación con la primera dimensión, existe una importante diferencia en el desarrollo político de ambos Estados. Si contabilizamos el tipo de régimen bajo el cual estos países se rigieron durante todo el siglo XX y hasta 2010 (110 años), observamos que en los dos casos dominó la República oligárquica. Esto es, regímenes electos pero con serias limitaciones al ejercicio de las libertades políticas y civiles como las concebimos hoy (gráfico 1). Perú ha tenido una mayor experiencia de gobiernos autoritarios y, consecuentemente, una menor práctica de regímenes democráticos⁴.

4 Seguimos la clasificación realizada por Peter Smith. 2005. *Democracy in Latin America. Political Change in Comparative Perspective*. Oxford University Press.

Las dos principales diferencias son las siguientes: por una parte, en Perú se vivió un ciclo político de casi permanente inestabilidad durante gran parte del siglo XX, con pocos casos de continuidad democrática. En Chile, en cambio, los momentos de desequilibrio se focalizan a fines de la década del 20 y a comienzos de la década del 70, cuando irrumpió la dictadura militar. En segundo lugar, la cantidad de golpes militares es significativamente mayor en Perú (16), que en Chile (4). De esta forma, y desde el punto de vista de las percepciones sociales, podríamos esperar que la ciudadanía en Perú manifieste una menor confianza en las instituciones que en el caso de Chile, donde los ciclos políticos han revelado menores niveles de inestabilidad.

Gráfico 1

Porcentaje de tiempo viviendo bajo diferentes tipos de regímenes políticos en Chile y Perú, 1900-2010



Fuente: Del total del período (110 años), se consideraron los años en que cada país vivió bajo gobiernos autoritarios, Repúblicas oligárquicas (electas) y sistema democrático. En términos conceptuales se reconoció para cada tipo de régimen la definición entregada por Peter Smith (2005). Para fines de este análisis se utilizó como medida el año, aproximándose si resultaba más o menos de seis meses.

Desde el punto de vista de las condiciones sociales, aunque en ambos países se produce una reducción de la pobreza, el progreso social en Chile medido en términos de bajos niveles de personas viviendo en pobreza es significativamente mayor que el alcanzado por la sociedad peruana (tabla 2). Lo anterior podría afectar las percepciones sociales, particularmente a la de desarrollo y de progreso en relación con otros países.

Tabla 2

Nivel de pobreza en Chile y Perú

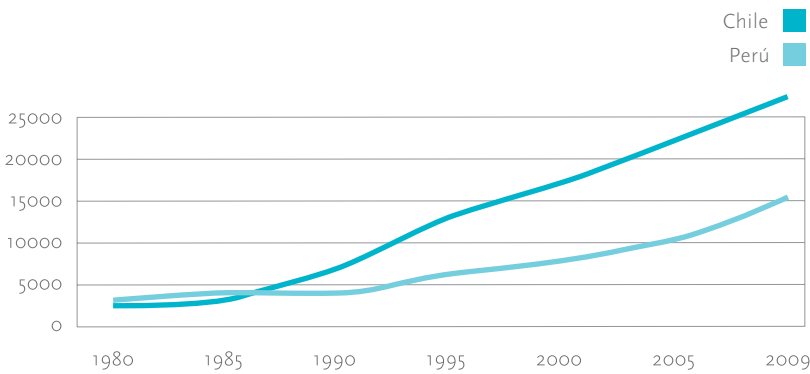
Años	Chile	Perú
1990	38,6	
1994	27,6	
1996	23,2	
1997		47,6
1998	21,7	
1999		48,6
2000	20,2	
2003	18,7	54,7
2006	13,7	44,5
2009	11,5	34,8

Fuente: CEPAL. 2010. *Panorama social de América Latina*. Santiago. Chile. www.eclac.org.

Finalmente, desde la perspectiva del progreso económico, medido en términos del producto nacional bruto per cápita (gráfico 2), se observa que hacia la mitad de la década del 80 se comienza a producir un fuerte distanciamiento entre ambas naciones. Brecha que no ha disminuido en años recientes.

Gráfico 2

Producto nacional bruto de Chile y Perú (GNI per cápita PPP estandarizado a US\$ 2009)



Fuente: Banco Mundial. Serie de estadísticas por país (<http://databank.worldbank.org>).

Así, se trata de dos sociedades que, por una parte, estructuraron sus respectivos Estados-nación en torno a la rivalidad. Aquello sin duda marcó las percepciones sociales de una y otra sociedad, lo que seguramente fue transmitido generación tras generación en los procesos de socialización formal e informal⁵. Por otra parte, se trata de pueblos que experimentaron desarrollos políticos y sociales diferenciados durante el siglo XX. Perú, como un país con alta inestabilidad política, con altas desigualdades sociales y con tasas de desarrollo económico menores al de su vecino. Chile, como un país con mayor estabilidad política y con un progreso social y económico que se hace evidente en los últimos veinte años.

Chile-Perú: percepciones sociales

El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales y el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica de Perú coordinaron un cuestionario y una metodología de trabajo para caracterizar y comparar las actitudes y opiniones. Lo hicieron a partir de encuestas idénticas aplicadas en la población nacional urbana en ambos países⁶.

Nos interesó observar la percepción social sobre la importancia de cada país a nivel internacional, respecto a la influencia de su país en la región, los factores percibidos como relevantes para el desarrollo por parte de la población y sobre la reacción que tendría el vecino en caso de un fallo internacional desfavorable a sus intereses. A continuación, damos cuenta de los principales resultados.

5 No contamos con estudios cuantitativos que permitan observar la evolución de las percepciones mutuas en forma diacrónica. No obstante, los trabajos históricos cualitativos dan cuenta de esto.

6 Para el caso de Perú, se realizó una encuesta cara a cara. Se entrevistó a 1.235 personas, muestra que representa al 69,87% de la población urbana de 18 años y más en Perú. Margen de error de +/- 2,79% con un nivel de confianza de 95%. Muestra de carácter probabilística polietápica de conglomerados estratificada según provincia. Trabajo de campo del IOP-PUCP entre el 10 y 14 de junio de 2010. Para el caso de Chile, se adjunta ficha técnica al final de este informe.

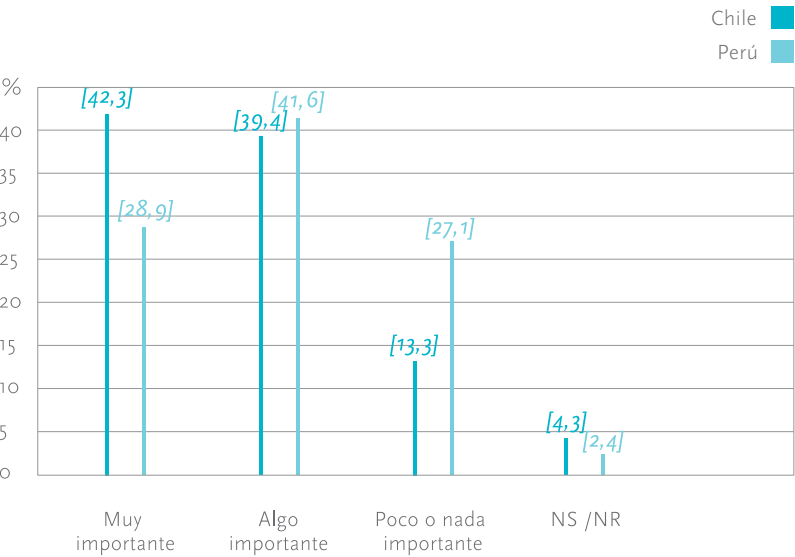
► PERCEPCIÓN DE PAÍS MÁS IMPORTANTE E INFLUYENTE

Se manifiesta una clara diferencia entre la autopercepción de los encuestados en Chile y Perú respecto a la importancia del país a nivel internacional (gráfico 3). Mientras 42,3% de los encuestados chilenos considera que su país es “muy importante” en este ámbito, en el caso de los peruanos sólo el 28,9% reconoce aquella opción. En general, los entrevistados en Perú tienden a favorecer más que los chilenos la opción “poco o nada importante”.

En el caso de los chilenos que consideran a su país como muy importante en el concierto internacional, tienden a predominar los adultos entre 46 y 60 años, que se manifiestan partidarios de la Concertación, hombres, de regiones y de estrato socioeconómico bajo. Entre los peruanos en que prevalece la opción “muy importante” destacan los mayores de 46 años y de regiones. Cabe advertir que para el caso de Perú, una mayor proporción del estrato socioeconómico bajo se inclina por la alternativa “poco o nada importante” (27,1% frente a un 13,3% de los chilenos).

Gráfico 3

Pregunta: ¿Qué tan importante cree Ud. que es su país a nivel internacional?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base total de la muestra.

También existe una diferencia notoria respecto de la percepción de la influencia del propio país en los últimos diez años. Los encuestados chilenos consideran a Chile como el más influyente en Latinoamérica con un 31,4% de menciones. En segundo lugar mencionan a Brasil (24,7%) y en tercer lugar posicionan a Argentina (13,7%) (gráfico 4).

Los encuestados de Perú consideran también como los más influyentes a Brasil (27%) y Chile (20,7%). Sin embargo, en Perú se menciona a Venezuela como el tercer país más influyente con 8,8% de las manifestaciones, y a sí mismos (Perú) en el cuarto lugar de influencia con 7,6% de las preferencias. El resto de los países latinoamericanos se concentran en la alternativa “otros”. En Chile, este último porcentaje no supera el

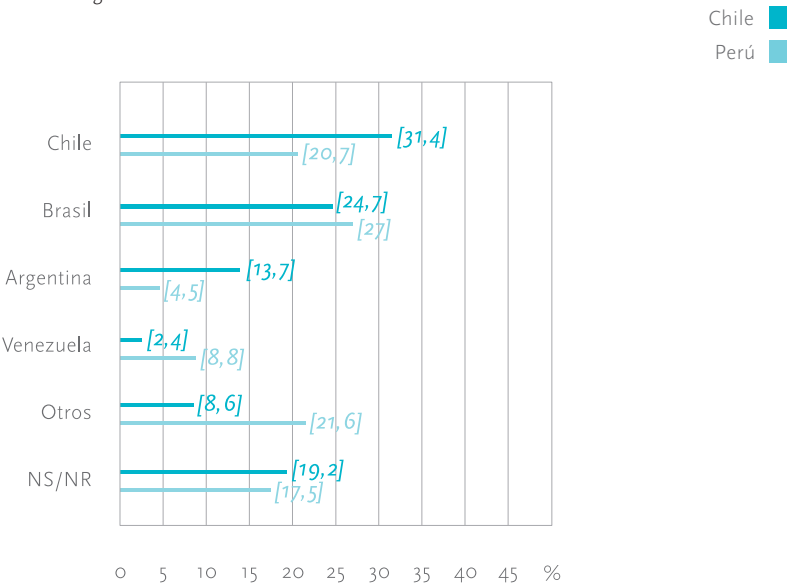
8,6%, mientras que en Perú alcanza un 21,6%. Esto demuestra que en los chilenos prima la focalización de la atención en un número relativamente reducido de países, mientras que en el caso de los peruanos se produce una mayor dispersión en su consideración a otras naciones.

Al indagar por nivel socioeconómico, se concluye que el estrato alto de los encuestados en Chile considera a Brasil como el país más influyente con un 44% de las preferencias; le sigue Chile con un 31,3%. De la misma manera, los hombres chilenos consideran, en un 32,3%, a Brasil como el país más respetado a nivel regional y a Chile lo ubican en segundo lugar con 30,3% de las preferencias. Las mujeres ven en Chile el país más reconocido con un porcentaje de 32% y a Brasil lo relegan a segunda posición con un 17,5%.

En Perú, en cambio, no se presentan diferencias significativas entre género, por nivel socioeconómico. Todos coinciden en que Brasil es el país más influyente de América Latina seguido de Chile, a excepción de los grupos más pobres donde ponen al mismo nivel a ambos países.

Gráfico 4

Pregunta: En los últimos 10 años, ¿qué país de Latinoamérica ha sido el más influyente en la región?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base total de la muestra.

Aproximadamente uno de cada cuatro chilenos considera que Chile es líder de la región, en tanto que en Perú dicha razón alcanza a uno entre diez encuestados (gráfico 5).

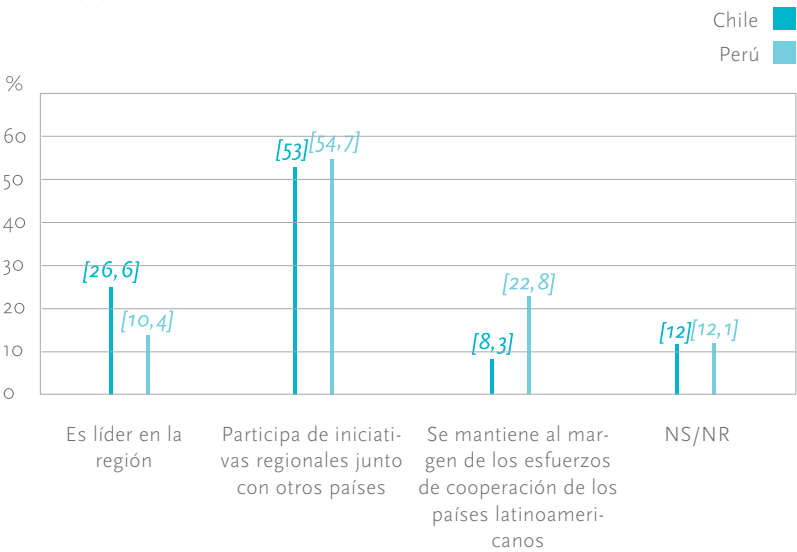
Donde chilenos y peruanos coinciden es en la percepción de sentirse participando de iniciativas junto a otros Estados de la región. En el caso de Perú, un 54,7% de los encuestados considera aquella opción, mientras que en Chile la misma respuesta alcanza un 53%.

Respecto de la afirmación “se mantiene al margen de los esfuerzos de

cooperación de los países latinoamericanos”, la percepción frente a esta frase alcanza a 22,8% en el caso de los peruanos y 8,3% en el caso de la opinión pública chilena.

Gráfico 5

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa sobre el papel de su país en América Latina?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base total de la muestra.

► FACTORES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO

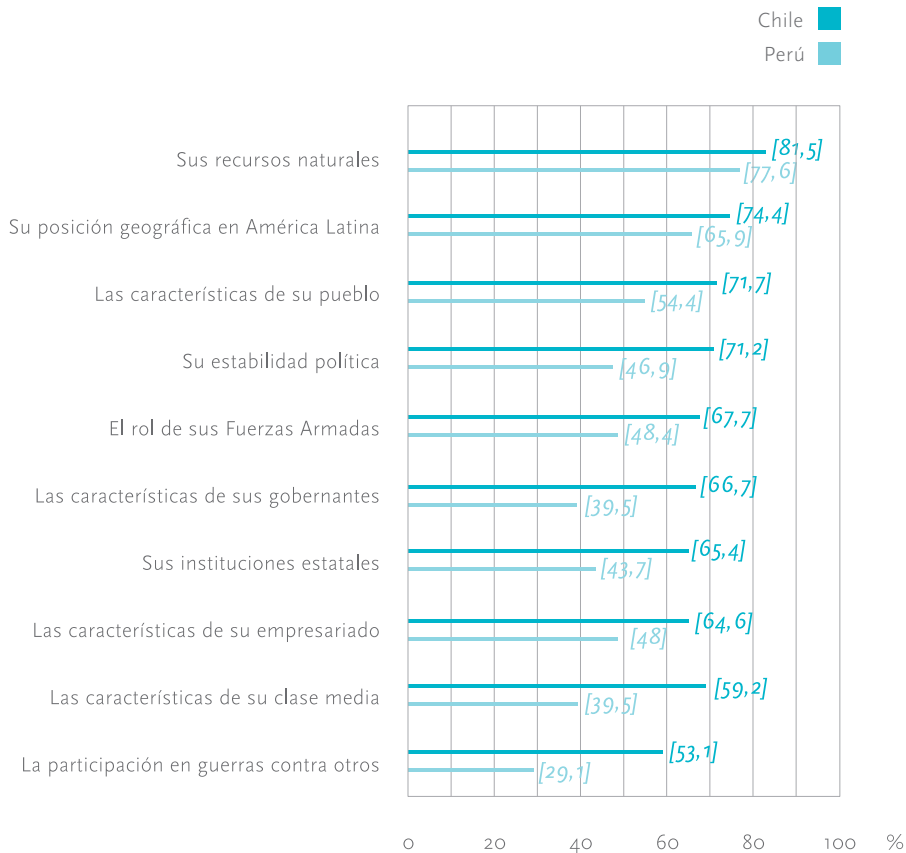
Nos interesó averiguar la percepción de la opinión pública sobre cuáles han sido los factores centrales para el desarrollo (gráfico 6). En otros términos, exploramos hasta qué punto la percepción de la posición a nivel internacional se relaciona con las impresiones de las condiciones políticas e institucionales en cada territorio.

Tanto en Chile como en Perú los recursos naturales, la posición geográfica en América Latina y las características del pueblo, se consideran como los tres elementos más importantes para el desarrollo a lo largo de su historia como naciones independientes.

El contraste se produce en la mención de atributos por parte de los encuestados chilenos respecto de aspectos institucionales y sociales: estabilidad política, rol de las fuerzas armadas, características de sus gobernantes, de sus instituciones estatales, de su empresariado y de su clase media. La única que aparece menos destacada, aunque en un porcentaje todavía mayoritario, es la participación en guerras contra otros países. En el caso de Perú -salvo las tres características subrayadas anteriormente y que se asemejan a Chile- el resto recibe un porcentaje de menciones menor al 50%. Las tres con menos menciones fueron las particularidades de sus gobernantes y de su clase media (39,5%) y la participación en guerras contra otros países (29,1%).

Gráfico 6

Pregunta: Importancia de factores en el desarrollo



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base porcentaje de opciones "muy importante" y "algo importante".

Las diferencias más profundas en las opiniones de la población de Chile y Perú frente a los factores que han afectado a su respectivo desarrollo, se producen frente a las características de sus gobernantes y a la participación en guerras contra otros países, las cuales presentan altos niveles de significación.

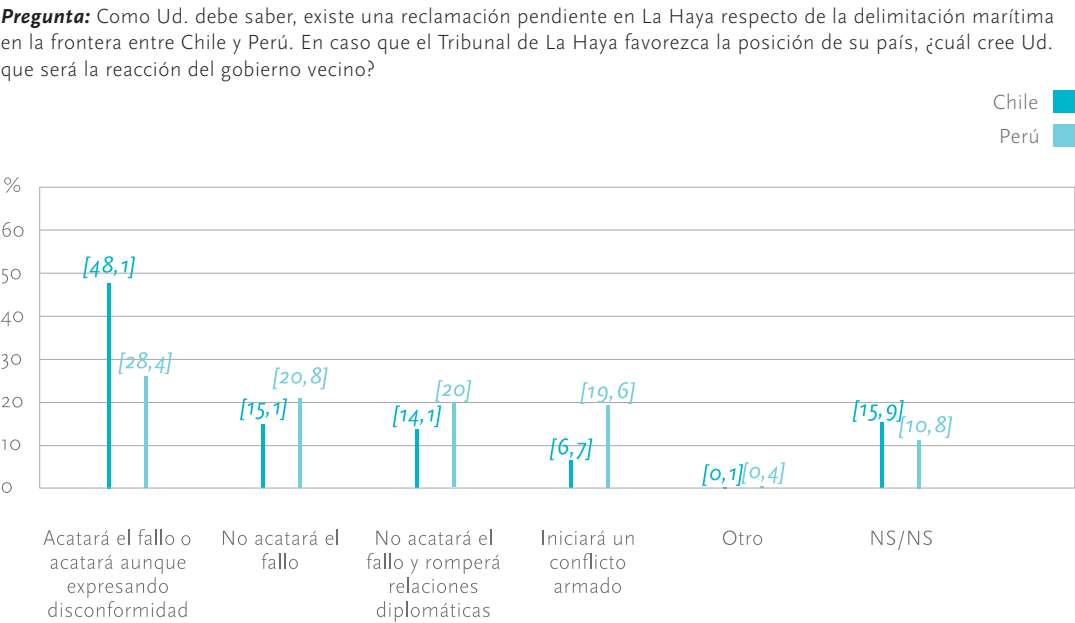
► REACCIONES FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CORTE DE LA HAYA: ¿ACATAMIENTO O CONFLICTO?

Más que conocer la percepción sobre la definición de la Corte de La Haya, otra dimensión que decidimos explorar se refiere a la forma en que chilenos y peruanos perciben que reaccionará el otro frente a un eventual fallo adverso. Es esta percepción la que pone a prueba los niveles de confianza respecto del vecino.

Al consultar a los entrevistados sobre qué cree que hará el gobierno del vecino país si La Haya no favorece a este último, un 48,1% de los chilenos considera que el gobierno peruano acatará el fallo o, al menos, lo obedecerá expresando alguna disconformidad. En tanto, sólo el 28,4% de los peruanos cree que los chilenos se someterán al fallo o lo harán expresando alguna disconformidad (gráfico 7).

En el caso de los chilenos, un 35,9% manifiesta que el gobierno peruano simplemente no acatará el fallo, o cortará relaciones diplomáticas, o iniciará un conflicto bélico. Esta última opción es indicada por un 6,7% para el caso de los encuestados en Chile. Perú, en tanto, manifiesta mayor escepticismo respecto de la actitud que adoptaría el gobierno chileno. El 60,4% manifiesta que el gobierno o simplemente no acatará, romperá relaciones, o iniciará un conflicto bélico. El 19,6% de los peruanos se inclina por favorecer esta última opción.

Gráfico 7



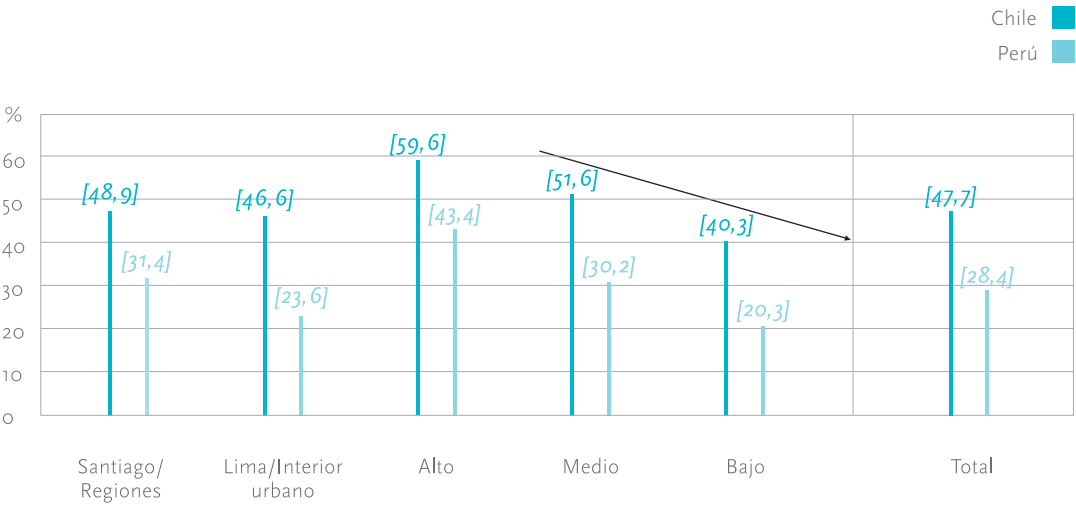
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Total de la muestra.

Al considerar algunas variables, la tendencia más reveladora se presenta al observar las diferencias por nivel socioeconómico (gráfico 8). En ambos países sucede que a mayor nivel socioeconómico, hay mayor confianza en que el país vecino acatará el fallo. A más bajo nivel socioeconómico, en cambio, menor es el porcentaje de credibilidad del gobierno vecino.

Esta misma diferencia se observa entre los peruanos que viven en Lima en comparación con quienes viven fuera de la capital. Esta situación no se observa en Chile. Un 49% de los chilenos que vive en Santiago cree que si La Haya favorece a Chile, Perú respetará el fallo o, al menos, lo acatará con cierto grado de disconformidad, mientras que un 46,6% de los chilenos que viven en regiones considera lo mismo. En Perú las diferencias son más notorias. Las personas residentes en Lima y Callao en un 31,4% creen que -de favorecer La Haya a Perú- los chilenos acatarán el fallo, disconformes o no, mientras que de las personas que viven al interior urbano de Perú sólo en un 23,6% considera la misma opción, porcentaje casi cinco puntos bajo el promedio nacional peruano.

Gráfico 8

Pregunta: Como Ud. debe saber, existe una reclamación pendiente en La Haya respecto de la delimitación marítima en la frontera entre Chile y Perú. En caso que el Tribunal de La Haya favorezca la posición de su país, ¿cuál cree Ud. que será la reacción del gobierno vecino?

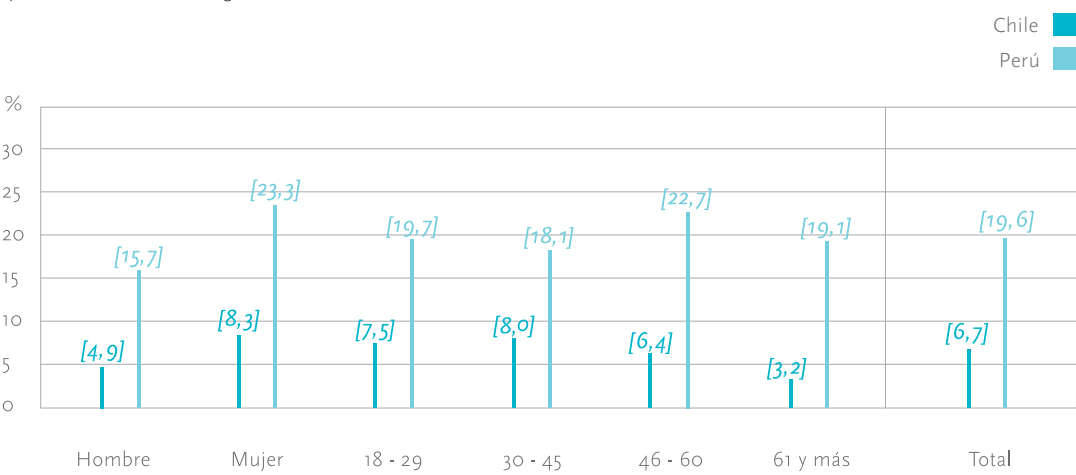


Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base porcentaje de opciones "acatará el fallo" o "acatará aunque expresando disconformidad".

Al detenernos en aquel grupo de encuestados que considera que podría iniciarse un conflicto (6,7% en Chile y 19,6% en Perú), observamos que en ambos países las mujeres parecen tener mayor nivel de desconfianza en el país vecino. En Perú, un 23,3% de las mujeres cree que si La Haya favorece a su país, el gobierno de Chile iniciaría un conflicto armado, mientras que en Chile el porcentaje de mujeres que piensa lo mismo respecto de la reacción del otro país es 8,3%. Los hombres peruanos se encuentran cerca de cuatro puntos porcentuales bajo el promedio nacional; en Chile, el porcentaje masculino cae a un 4,9% (gráfico 9).

Gráfico 9

Pregunta: Como Ud. debe saber, existe una reclamación pendiente en La Haya respecto de la delimitación marítima en la frontera entre Chile y Perú. En caso que el Tribunal de La Haya favorezca la posición de su país, ¿cuál cree Ud. que será la reacción del gobierno contrario?

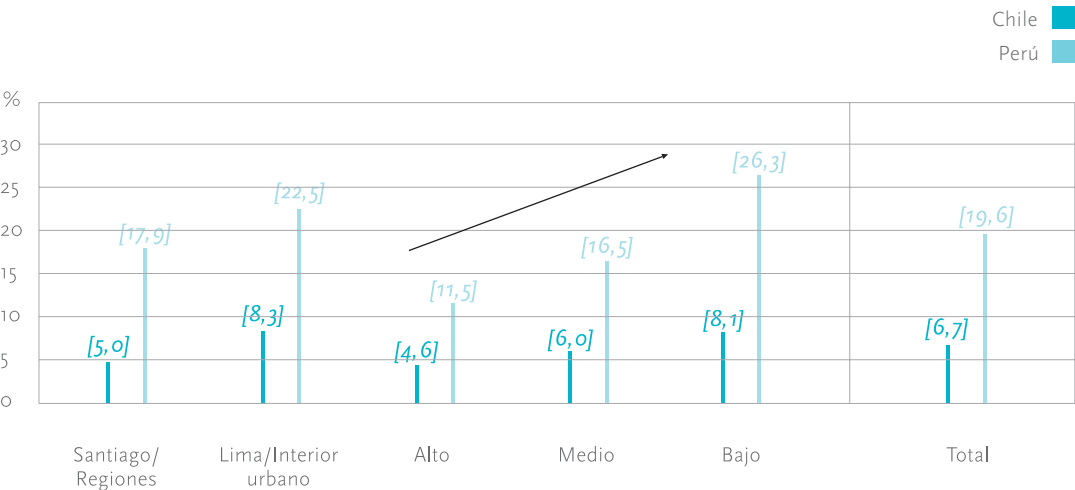


Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Total muestra. Base porcentaje de opción "iniciará un conflicto armado".

La tendencia más significativa se asocia al nivel socioeconómico de los entrevistados, puesto que a menor nivel socioeconómico, los peruanos perciben una mayor predisposición del gobierno de Chile para iniciar un conflicto armado si La Haya los favorece. Y a mayor nivel socioeconómico los porcentajes decaen incluso al 11,5% en el estrato alto de la sociedad peruana (gráfico 10).

Gráfico 10

Pregunta: Como Ud. debe saber, existe una reclamación pendiente en La Haya respecto de la delimitación marítima en la frontera entre Chile y Perú. En caso que el Tribunal de La Haya favorezca la posición de su país, ¿cuál cree Ud. que será la reacción del gobierno contrario?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Base porcentaje de opción "iniciará un conflicto armado".

En Chile ocurre una situación similar. Si bien los niveles de incertidumbre respecto al inicio de un conflicto armado por parte de Perú son bajos, a menor nivel socioeconómico aumenta la creencia de que Perú podría iniciar un conflicto armado si La Haya los favorece en el fallo. En el estrato bajo, el porcentaje llega al 8,1%, casi el doble de lo que se tiene en el estrato alto chileno (4,6%).

En términos de zona de residencia (capital versus provincia), en ambos países se repite la tendencia: es en las regiones donde se percibe un mayor grado de incertidumbre respecto de la reacción del país vecino frente a un fallo adverso.

El estudio constata, de este modo, diferencias significativas entre ambas sociedades en cuanto a la autopercepción de importancia e influencia de los respectivos países en relación con los factores claves que explican su propio desarrollo y en virtud de la eventual reacción del vecino país frente a un fallo adverso. El nivel socioeconómico y la zona de residencia parecen tener un fuerte efecto en las percepciones sociales en cada país.

► ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS VARIABLES

Con el objetivo de estudiar en forma conjunta las relaciones que tienen las variables analizadas anteriormente, se utilizó la técnica de análisis de correspondencia múltiple (ACM). El ACM permite identificar la relación entre las categorías de múltiples variables y develar la estructura latente que vincula a las diferentes categorías de cada una de ellas. Así, se posiciona en un plano cartesiano cada una de las categorías que puede tener cada variable. Los puntos más cercanos indican que esas categorías se relacionan. Asimismo, señalan que a mayor distancia mayor oposición.

Se utilizaron las siguientes variables activas:

- Como Ud. debe saber, existe una reclamación pendiente en La Haya respecto de la delimitación marítima en la frontera entre Chile y Perú. En caso que el Tribunal de La Haya favorezca la posición de su país ¿cuál cree Ud. que será la reacción del gobierno contrario?
- ¿Qué tan importante cree Ud. que es Chile/Perú a nivel internacional?: muy importante, algo importante, poco importante o nada importante.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que Ud. piensa sobre el papel de Chile en América Latina?

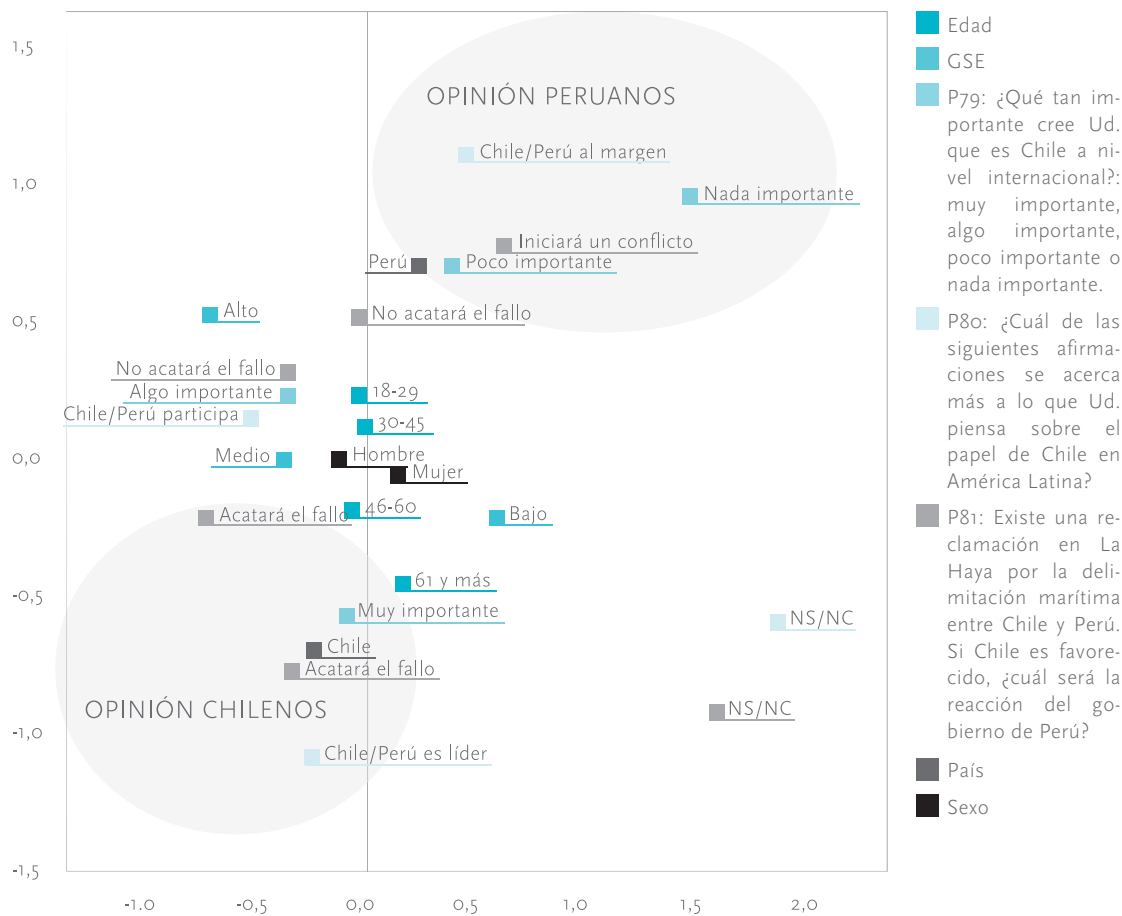
Como variables que conforman el espacio social, se usaron:

- Grupo socioeconómico.
- Género.
- Edad.
- Región.

Se observa en el gráfico 11, que existen dos cuadrantes opuestos. En el superior derecho, se concentran las opiniones de la población peruana, la que considera que su país no es importante a nivel internacional, que Perú se mantiene al margen de la cooperación latinoamericana y que Chile no acatará el fallo de La Haya si es negativo.

Por otra parte está la opinión de los chilenos sobre Perú: que considera que sí acatará el fallo, que sí es líder en América Latina, y que sí juega un rol muy importante a nivel internacional.

Gráfico 11



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010 y Encuesta Instituto de Opinión Pública PUCP 2010. Total muestra. Base porcentaje de opción "iniciará un conflicto armado".

En síntesis se puede concluir que: 1) Los entrevistados que opinan que se acatará el fallo son las personas que viven en la Región Metropolitana frente a los de otras regiones, de mayor edad y los hombres; 2) Aquellos que opinan que el otro país acatará el fallo con disconformidad, son personas que pertenecen a los GSE más altos. Los estratos socioeconómicos más bajos piensan que puede haber un conflicto armado; 3) Los peruanos en su mayoría creen que Chile no acatará el fallo, frente a los chilenos que en general piensan que Perú sí lo acatará; 4) En ambos países, los que piensan que ni las instituciones estatales ni las características del gobierno son importantes para el desarrollo, opinan también que el otro país no acatará el fallo; 5) Las personas que aseguran que su país es líder dentro de la región, tienden a opinar que el otro país no acatará el fallo de La Haya.

Conclusiones

Nuestro artículo intenta explicar las significativas diferencias que existen en las actuales percepciones sociales respecto a la importancia relativa del país y las percepciones sobre el vecino. Advertimos que estos dos países evidenciaron procesos políticos internos durante el siglo XX que marcaron diferenciadamente sus destinos. Chile enfrentando menores niveles de inestabilidad política, mayores progresos sociales y mayores niveles de desarrollo económico en las dos décadas. En cambio, en Perú observamos más inestabilidad y menor progreso social y económico. Agregamos que el legado de la Guerra del Pacífico -seguramente reproducido generacionalmente- también afectó a las dos sociedades.

Nuestro trabajo demuestra bastante consistencia entre tipo de desarrollo y percepciones sociales. En un país como Chile, que ha progresado y que cuenta con mayor estabilidad relativa comparada, es esperable que la sociedad manifieste percepciones más favorables sobre la influencia e importancia del país a nivel internacional. Para Perú, por otra parte, que adolece de más inestabilidad y posee menores niveles de desarrollo económico, es entendible que la sociedad tenga una autopercepción de menor importancia e influencia en el concierto externo.

Del mismo modo, al estudiar algunas de las variables sociodemográficas, observamos que ellas son bastante consistentes con tradicionales argumentaciones: vivir en regiones y ser pobre se relaciona en ambos países con mayores niveles de desconfianza hacia el otro.

Sin duda, una cuestión que resulta de interés y que convendría seguir analizando es la conformación de dos tipologías: los desencantados con las instituciones que manifiestan actitudes de desconfianza, y los confiados en el liderazgo del país que también manifiestan actitudes de incredulidad. En otros términos, pareciera ser que la percepción positiva del país como líder no conlleva, necesariamente, actitudes de mayor confianza en la resolución pacífica de controversias.

¿Qué nos dice esto respecto de nuestra primera reflexión sobre la paz democrática? En teoría, nuestras democracias no debiesen involucrarse en un conflicto bélico. Existe suficiente evidencia empírica que probaría la fortaleza de esta “ley” de las relaciones internacionales que señala que en las democracias existirían suficientes mecanismos para evitar la conflictividad bélica. No obstante, lo que nuestro artículo sugiere es que si bien aquel argumento parece demostrarse a nivel agregado, cuando analizamos las percepciones de sociedades con bajo grado de historia democrática, como sin duda lo son Perú y Chile, es factible reconocer altos niveles de desconfianza e, incluso, de temor frente a un vecino país que, por lo demás, es democrático. Así, como en muchos de nuestros países la democracia no está consolidada, actitudes nacionalistas de las élites pueden motivar reacciones adversas con relación al otro. El conflicto puede transformarse en una bandera de unidad nacional y de confrontación. Nuestro artículo sugiere la necesidad de cuestionarse sobre el tipo de percepciones que se han construido a lo largo del tiempo entre nuestras naciones y, eventualmente, plantearse el desafío de transformar las percepciones negativas hacia el otro.

Disolución de la identificación partidaria en Chile¹

MAURICIO MORALES

¹ Agradezco los comentarios recibidos en el seminario desarrollado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales. De igual forma, mi gratitud con Miguel Ángel López, quien comentó y criticó detalladamente una versión original del manuscrito. Ciertamente, la responsabilidad por eventuales errores u omisiones recae exclusivamente en el autor.

² Hay algunas excepciones como Schuster (2007), Toro (2009), Segovia (2009), Morales y Rubilar (2010).

La identificación partidaria en Chile ha caído de manera sistemática. Sin embargo, el tema no ha recibido tan amplia cobertura como sí ha sucedido con el análisis del sistema y participación electorales². La identificación partidaria, frecuentemente, es considerada casi como un hecho de la causa. Dado que Chile tiene uno de los niveles de volatilidad electoral más bajos de América Latina, se supone que los partidos mantienen una fuerte raigambre social y que aquello representa precisamente un indicador de estabilidad. Lo que no se observa en detalle es el evidente proceso de desafección partidaria. Éste parece quedar oculto por los bajos niveles de volatilidad y la estabilidad de la competencia.

Contrario a lo que plantea la tipología de la institucionalización partidaria (Mainwaring y Scully, 1995; Mainwaring, 1999; Payne et al., 2003), es posible la convivencia entre partidos sin arraigo social y competencias electorales estables. Tal combinación es, al menos, contraintuitiva. Se supone que la estabilidad se logra precisamente porque hay partidos con fuertes bases sociales y altos niveles de adhesión. Como los identificados votan continuamente por el mismo grupo, entonces el resultado será baja volatilidad y, en consecuencia, alta estabilidad de la competencia. Pero Chile no calza con esta lógica argumentativa. Siendo uno de los países con el sistema de partidos más institucionalizado de la región, la desafección está muy por sobre el promedio continental.

Sobre la base de esta inquietud teórica, estudio los factores que explican la filiación partidaria en Chile de acuerdo a los datos de la última Encuesta Nacional UDP. Tomo las variables más típicas en el análisis de la identificación partidaria -utilizadas, entre otros, por Dalton (1999, 2000 y 2002)- para las democracias industrializadas avanzadas. Si bien existe la tentación de clasificar a Chile como un caso similar a este tipo de democracias, en este trabajo muestro que existen algunas precauciones antes de promover dicha clasificación.

En términos muy generales, Dalton sostiene que la identificación partidaria en las democracias industrializadas avanzadas ha caído producto del incremento de las capacidades cognitivas de los electores (movilidad social y educación) y, también, por el auge de los medios de comunicación. En este escenario, los ciudadanos serían más autónomos de los grupos políticos, dejando de percibirlos como las agencias

exclusivas de representación. Según el autor, entonces, la identificación partidaria tendería a alojarse en los segmentos menos educados y de mayor edad. Los datos de la Encuesta Nacional UDP 2010 no son consistentes con este planteamiento teórico. En Chile la edad no discrimina en función de la identificación y, contrario al modelo de Dalton, son los más educados los que muestran mayores niveles de identificación partidaria. La tesis de Dalton también es discutida por Albright (2009) para democracias avanzadas.

En consecuencia, Chile parece ser un caso anormal no sólo para la tipología de la institucionalización partidaria, sino que también para las teorías que apuntan hacia la modernización como causante de la de-safección política. De igual forma, Chile tampoco calza plenamente con las conclusiones de Mainwaring et al. (2006) en su análisis sobre la falta de adhesión en las democracias andinas. Una tesis central de los autores pasa por explicar la desafección en función de la ineficiencia del Estado en el suministro de bienes públicos básicos (justicia y seguridad pública, entre otros). La baja representación no tiene que ver con el bloqueo a la participación o a la representación, sino con las fallas del Estado para suministrar esos bienes. "The formal systems of representation in these countries are already open. The grave deficiency is in state capacity" (Mainwaring, 2006: 302).

Si bien en Chile la delincuencia es percibida como el principal problema del país, los tribunales de justicia -en el contexto latinoamericano- presentan niveles de confianza razonables pero determinados por el nivel de ingresos: los más pobres muestran menores niveles de confianza (LAPOP, 2008). Por tanto, aunque Chile pueda cumplir algunas de las condiciones de ineficiencia estatal detectadas por Mainwaring et al. (2006) para las democracias andinas, sus características no obedecen exactamente a este grupo de países. Esto, sin perjuicio de reconocer que la crítica a la eficiencia del Estado provenga de los sectores con menos recursos.

Existen seguramente otras variables que explican por qué Chile combina estabilidad electoral y distanciamiento hacia los partidos. La respuesta más lógica está en las normas institucionales; el sistema electoral binominal se ha convertido en la barrera que impide transformar la desafección en mayor volatilidad. Como los partidos están prácticamente obligados a convivir en coaliciones, entonces las posibilidades del elector están reducidas a sólo dos actores competitivos. La pregunta es por qué, entonces, este método se replica para elecciones locales con sistemas electorales distintos, particularmente en la de concejales que tiene magnitudes de distrito de 6, 8 y 10.

En las elecciones de concejales claramente la volatilidad es mayor, pero insuficiente como para generar cambios sustantivos en el sistema de partidos. Lo que sucede es que los conglomerados generan acuerdos intertemporales entre los actores. Un acuerdo electoral municipal tiene efectos sobre un futuro compromiso presidencial y parlamentario, más aún si, por el calendario electoral, los comicios municipales anteceden por poco más de un año a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Esto explica por qué las coaliciones mantienen casi idéntica composición en dos elecciones con lógicas electorales diferentes. La excepción, ciertamente, fue 2008. En éstas, la Concertación presentó dos listas de concejales. Amplió al doble su número de candidatos, pero aún así el resultado estuvo lejos de ser satisfactorio.

Este artículo se divide en tres partes. En la primera, describo los principales planteamientos teóricos en torno a la identificación partidaria y comparo a Chile con el resto de los países de la región. La segunda parte analiza descriptivamente la identificación partidaria en Chile de acuerdo a los datos de la última Encuesta Nacional UDP. Finalmente, se muestra un análisis inferencial que exhibe los principales determinantes de la identificación partidaria.

¿Importa la identificación partidaria?

Las investigaciones sobre la identificación partidaria tienden a entenderla como una característica deseable y normativamente “buena” para la democracia. Los estudios seminales de la Escuela de Michigan (o escuela de la identificación partidaria) así lo señalan. El proceso de socialización de los individuos es central en el desarrollo de las actitudes políticas, destacando la identificación partidaria cuya característica central es un vínculo afectivo entre elector y partido (Miller y Shanks, 1996; Holmberg, 2007). Esta lealtad partidaria impacta sobre la estabilidad de la competencia política. Como la identificación es el principal predictor de la intención de voto, entonces los ciudadanos identificados difícilmente cambian sus preferencias, prefiriendo sistemáticamente el mismo partido. En consecuencia, altos niveles de identificación irían asociados a una alta estabilidad de la competencia político-electoral. Esto es, al menos, lo que se desprende de la discusión en torno a la institucionalización partidaria que revisé más arriba. Que a mayor raigambre social de los partidos, menores niveles de volatilidad y mayor estabilidad de la competencia.

Lo anterior parece confirmar a la identificación partidaria como una condición necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas de partidos. De hecho, fue vista como una “causa primera” de otras predisposiciones políticas y, en tal sentido, era una condición escasamente variable (Campbell et al., 1960). La discusión tomó otro cariz cuando en Estados Unidos se comenzaron a producir cambios en la identificación partidaria monopolizada por demócratas y republicanos (Abramson y Ostrom, 1994; Bishop et al., 1994; MacKuen et al., 1989). Desde otras perspectivas, en tanto, la identificación partidaria cumple la función de generar atajos informacionales a los electores (Hinich y Munger, 1994). Como en las campañas existe abundante información sobre partidos y candidatos, esta preferencia política permite ahorrar ese costo. Los electores reconocidos con un determinado partido, lo terminarán votando sin mediar un análisis exhaustivo de todas las candidaturas disponibles.

Entonces, si la identificación partidaria favorece la institucionalización de los sistemas de partidos, y si pensamos que los modelos más institucionalizados tendrán una mejor calidad de democracia (Levine y Molina, 2007), la identificación debiese afectar positivamente a la calidad de ésta. Pero los datos no muestran evidencia contundente de esta relación. Más bien la adhesión partidaria no tiene un efecto sistemático sobre la calidad de la democracia o, al menos, son dos variables que no están relacionadas linealmente (el coeficiente de correlación es de 0.088, ver gráfico 1)³. Chile, por ejemplo, es clasificado como uno de los países con mayor nivel de calidad de democracia en América Latina, pero sus porcentajes de identificación partidaria están muy por debajo del promedio regional.

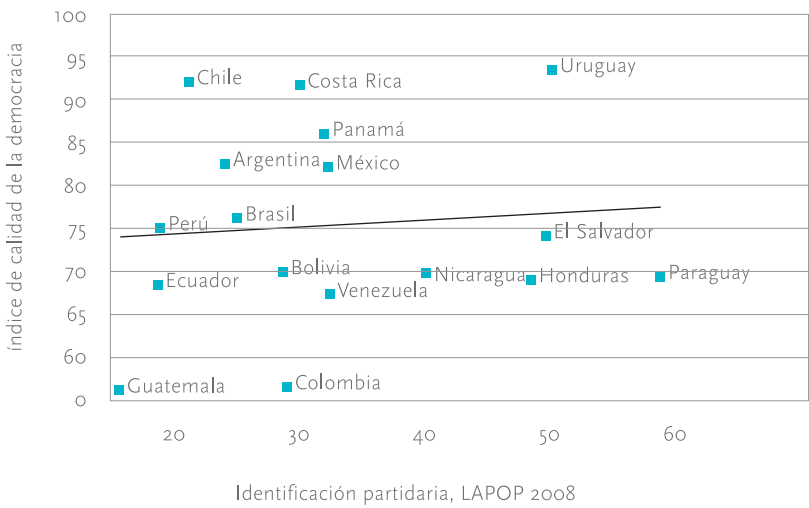
3 Los datos de identificación partidaria corresponden al estudio LAPOP de 2008, mientras que el índice de calidad de la democracia fue extraído de Levine y Molina (2007).

Esto puede deberse al tipo de identificación que frecuentemente se analiza. Lo más probable es que se observe como “normativamente buena” a la identificación programática, pero no a la adhesión clientelar. Dos casos que representan estos tipos de filiación son Uruguay y Paraguay, respectivamente. Ambos tienen niveles de adhesión muy por sobre el promedio latinoamericano, pero sus niveles de calidad de la democracia difieren sustantivamente. Así, puede ser que la literatura sobre la institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina haya pensado más en la identificación programática como una condición saludable para la democracia en lugar de la clientelar.

Lo anterior abre la puerta para otra aproximación teórica hacia la identidad partidaria que sólo dejo mencionada en este trabajo. Todo parece indicar que no se ha hecho un esfuerzo suficiente para distinguir los tipos de adhesión partidaria que existen en América Latina. En algunos países postcomunistas, por ejemplo, se ha distinguido entre identificación positiva y negativa en función del rechazo al totalitarismo, lo que permite un análisis más específico (Rose y Mishler, 1998; Brader y Tucker, 2001). En América Latina, en tanto, la filiación partidaria no ha sido un tema ampliamente cubierto por la literatura y, además, frecuentemente se utiliza una conceptualización más norteamericana para definir lo que se entiende por ella. De ahí, probablemente, que se piense en la identificación partidaria como una dimensión general sin profundizar en una eventual tipología que contribuya a caracterizarla en los distintos países. Seguramente existe una variedad de mecanismos que permite la reproducción de la identificación, ya sea ésta de orden programático o clientelar. Es un área poco explorada por la literatura que requiere de un estudio más detallado. De lo contrario, no podremos entender por qué Paraguay y Uruguay tienen niveles similares de adhesión política, pero calidades de democracia totalmente opuestas.

Gráfico 1

Calidad de la democracia e identificación partidaria



Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008 y Levine y Molina (2007).

Identificación partidaria en Chile

Existe una serie de preguntas que intentan medir la filiación partidaria. El Latinobarómetro, por ejemplo, formuló la consulta de adhesión de manera intermitente desde 1995 a 2003. El gráfico 2 muestra el promedio de cada país en esta serie. La pregunta que se realiza es la siguiente: “Respecto a los partidos, ¿cómo se siente Ud.?: muy próximo, bastante próximo, simplemente simpatizante, no está próximo a ningún partido político”. Para el cálculo se sumaron las opciones “muy próximo”, “bastante próximo” y “simplemente simpatizante”. Chile aparece en la zona baja de la distribución con sólo un tercio de identificación partidaria en promedio.

El reciente estudio LAPOP de 2010, en tanto, muestra un panorama menos auspicioso. Chile está en el último lugar en América Latina con tan sólo un 11% de adhesión. LAPOP realiza una pregunta más sencilla que es la siguiente: “En este momento, ¿simpatiza con algún partido político?: sí/no”. Más allá de las cifras, lo concreto es que el desarraigo partidario es evidente. Independiente del tipo de encuesta, muestreo y preguntas que se formulen.

Gráfico 2

Identificación partidaria en América Latina, promedio 1995-2003. Datos Latinobarómetro



Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008 y Levine y Molina (2007).

Desde 2005, la Encuesta Nacional UDP ha preguntado sistemáticamente por la identificación partidaria. Lo hace en un formato distinto al implementado por los dos estudios citados. La pregunta es la siguiente: “¿Cuál de los siguientes partidos políticos representa mejor sus intereses, creencias y valores?”. El fraseo es mucho más específico y al encuestado se le entrega el listado de partidos existentes. Acá no se trata de medir intención de voto pues el encuestado no es llevado al escenario hipotético de prontas elecciones parlamentarias. Lo que se intenta medir, al igual que las preguntas de las otras instituciones, es el grado de vínculo afectivo (no evaluativo) con el partido.

Como se observa en el gráfico 3, la identificación partidaria ha caído bruscamente. Si en 2005 el 47,5% se reconocía con algún partido, en 2010 esa cifra cayó al 26,3%. Algo similar, pero de menor magnitud, ha ocurrido con la identificación ideológica. Es decir, el porcentaje de encuestados que se autoubica en algún punto de la escala de izquierda a derecha. En 2005, el 76,3% se autoposicionaba en algún peldaño de la escala, cifra que descendió al 56,2% en 2010. En ambos casos la caída ha sido de 20 puntos, pero la identificación partidaria lo ha hecho de manera más acelerada. Comparando 2010 con 2005, la caída ha sido de un 44,6%. Es decir, y tomando como base el 47,5% de 2005, la caída de 21,2 puntos representa el 44,6% de ese valor original. La identificación ideológica, en tanto, ha caído en un 26,3% (20,1 puntos considerando como base el porcentaje de 2005, que fue de 76,3%).

Ambas noticias son indicadores de la crisis de representación. Evidentemente, esta crisis no es asimilable a la que ocurre en otros países de la región, pero tampoco es comparable con lo que sucede en las democracias industrializadas avanzadas. Lo concreto, eso sí, es que estos datos muestran que es posible la convivencia de bajos niveles de vinculación partidaria y competencia política estable. Además, los datos indican que si bien la identificación más programática o ideológica ha descendido, aún existe una buena porción de chilenos que se sigue representando en la escala izquierda-derecha (Zechmeister, 2010). Ciertamente esto puede dar paso a un electorado de corte más clientelar que programático, cuestión que puede fortalecerse en caso de implementar el sistema de voto voluntario. Como los ciudadanos no estarán constreñidos institucionalmente para votar (no serán sancionados), a lo mejor se consolida un lazo más clientelar que genere los incentivos suficientes para que los electores acudan a las urnas.

Los gráficos 4, 5, 6 y 7 muestran la relación entre filiación partidaria e ideológica con algunas variables sociodemográficas. En primer lugar, se observa que la edad no tiene un efecto sustantivo sobre los niveles de identificación partidaria y también parece no tenerlo sobre la identificación ideológica (gráfico 4). Esto echa por tierra la primera gran apreciación de Dalton en su análisis de las democracias industrializadas avanzadas. Como son los jóvenes los que más se exponen a los medios de comunicación y cada vez se consideran más autónomos de los partidos, entonces la identificación debería ser más baja en ellos que en el resto de la población. Los jóvenes, seguramente, no han tenido la suficiente experiencia electoral como para vincularse con algún partido.

Lo señalado puede ser propio de una democracia reciente, considerando que Chile dio paso a elecciones competitivas hace apenas 20 años. Entonces, y siguiendo a Converse (1969) y Dalton y Weldon (2007), puede ser que la juventud de nuestra democracia explique por qué no existen diferencias entre jóvenes y adultos en términos de adhesión

partidaria. Otra interpretación podría sostener que el caso de Chile sigue cuestionando esta teoría general, dado que parte sustantiva del electorado que votó en el plebiscito de 1988 también lo hizo en las elecciones pre 1973 y que, además, los jóvenes de 18 años que votaron en ese plebiscito fueron socializados en un ambiente de alta politización, contrario a la generación que comenzó a votar después de las elecciones inaugurales. En otras palabras, lo esperado sería que quienes sufragaron en el plebiscito (40 años y más) presenten mayores niveles de identificación partidaria que los jóvenes, dado que han tenido más experiencia electoral y fueron socializados en un fuerte ambiente político. No obstante, al realizar el corte entre encuestados menores de 40 años y de 40 años y más, las diferencias no son estadísticamente significativas. Ambos grupos evidencian similares porcentajes de representación partidaria (27,4% y 25,4% respectivamente).

Respecto al nivel educativo, la tendencia de Chile es opuesta a lo que sucede en las democracias industrializadas avanzadas (gráfico 5). La identificación está claramente concentrada en los segmentos con mayores niveles de educación. Aquí utilizo la variable en forma íntegra, pero siendo precavido respecto al bajo número de casos de las categorías polares como “sin estudios” (11 casos) y “postgrado” (13 casos). Excluyendo o recodificando estos datos, la tendencia se mantiene sin mayor variación. Igual cosa sucede al analizar la identificación ideológica. Los más educados presentan mayores porcentajes de cercanía política.

Se podría decir que las teorías más modernizadoras no se aplican plenamente al caso de Chile. No es que las personas más ricas tengan mayores niveles de desafección porque se sientan independientes de los partidos, o porque no los consideren relevantes como agencias de representación. Más bien, la desafección aparece con mayor fuerza en los segmentos menos educados y de menores ingresos (gráfico 6), y no discrimina por sexo ni hábitat (Santiago versus regiones).

4 Mainwaring (2006) también subraya como determinantes de la crisis de representación a las tasas de delito, corrupción y al auge de los medios de comunicación. Según el autor, como oposición y gobierno se enfrentan sistemáticamente a través de la prensa ventilando casos de corrupción o exagerando los aspectos negativos del partido que está en el poder, entonces se produce una guerra de trincheras que distancia aún más a la ciudadanía de los partidos.

Acá podría tener mayor sentido la hipótesis de Mainwaring et al. (2006) guardando las proporciones en la comparación con las democracias andinas. Puede ser que sean precisamente los más pobres y/o menos educados los que muestren mayores niveles de insatisfacción con la función del Estado en la provisión de bienes públicos básicos como, por ejemplo, justicia y seguridad ciudadana⁴. Si cruzamos el nivel educativo y la satisfacción con la democracia, son los segmentos menos educados los que muestran menores porcentajes de satisfacción (particularmente las personas sin estudios o con educación básica incompleta), sucediendo lo mismo al utilizar el nivel socioeconómico. Entonces, este tipo de percepciones podría estar influyendo en el proceso de desafección, a lo que se suman las peores evaluaciones y expectativas respecto a la economía del país y la economía personal por parte de los segmentos con menos recursos. No sostengo que estos factores sean los más relevantes o los únicos que influyen en el desarraigo partidario. Doy parte de crédito a la teoría que se ha desarrollado en torno a la desafección en América Latina desde las percepciones ciudadanas, considerando la ineficiencia del Estado para suministrar bienes públicos.

Para finalizar esta sección y siguiendo a Colomer y Escatel (2005) cruzo la identificación partidaria con la ideológica. Parto del supuesto que el grupo de los identificados consistentes (encuestados que se identifican con partidos y en la escala) ha caído bruscamente, creciendo el grupo de los desafectos sistemáticos (entrevistados que no se identifican con partidos ni con la escala política). Para ello comparo esta tabla de

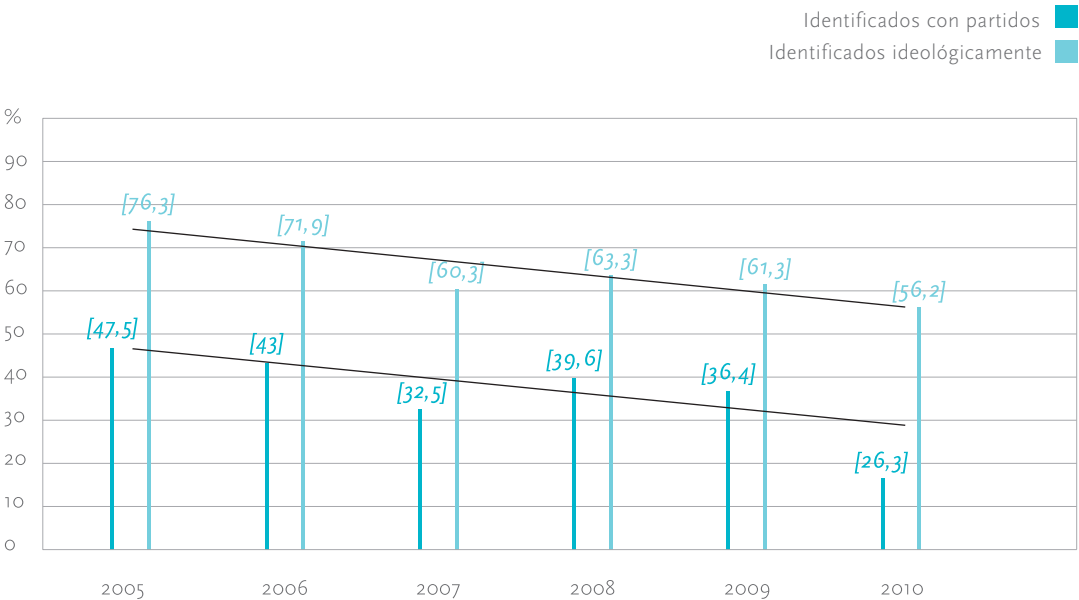
contingencia con datos de 2005 a 2010, a fin de capturar los principales cambios. Los resultados se reportan en el gráfico 8.

Efectivamente, el grupo de los consistentes ha caído de 45,7% en 2005, a 25,3% en 2010, mientras que el grupo de los desafectos sistemáticos creció de 21,9% a 42,9%. Se podría suponer que estos cambios se produjeron de manera brusca. Al seguir la serie de tiempo de la Encuesta Nacional UDP, desde 2005 a 2010, esta hipótesis tiene cierto asidero dado el incremento sustantivo de los desafectos sistemáticos. En 2005 eran 21,9%, en 2006 pasaron a 27,1%; en 2007 a 38,3%; en 2008 bajan a 34,6%; en 2009 a 37,4%; y en 2010 a 42,9%. No hay una tendencia que marque cambios más transitorios. Me refiero a la evolución del grupo de encuestados desafectos con partidos, pero con adhesión ideológica.

El grupo mencionado ha bordeado sistemáticamente (exceptuando 2008) el 30%. Por tanto, se hace difícil pensar que los encuestados realicen un tránsito que resulta más o menos lógico. Es decir, dejar de vincularse con un partido, pero seguir representándose con algún peldaño de la escala política, para después dejar de identificarse tanto con partidos como con la escala. Para fortalecer esta conclusión sería necesario contar con encuestas en formato de panel, pero al menos acá se muestra una tendencia más o menos clara. Lo mismo sucede con el grupo de identificados no ideológicos (Colomer y Escatel, 2005), que son aquellos que se identifican con algún partido, pero que no son capaces de autoubicarse en el eje izquierda-derecha. Presuntamente, se trataría de ciudadanos más inclinados hacia políticas de orden clientelar. En Chile no han sobrepasado el 2,2%.

Gráfico 3

Identificación partidaria e identificación ideológica en Chile, 2005-2010



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráficos 4, 5, 6 y 7.
Identificación partidaria e ideológica según variables sociodemográficas

Gráfico 4

Identificación partidaria e ideológica según edad

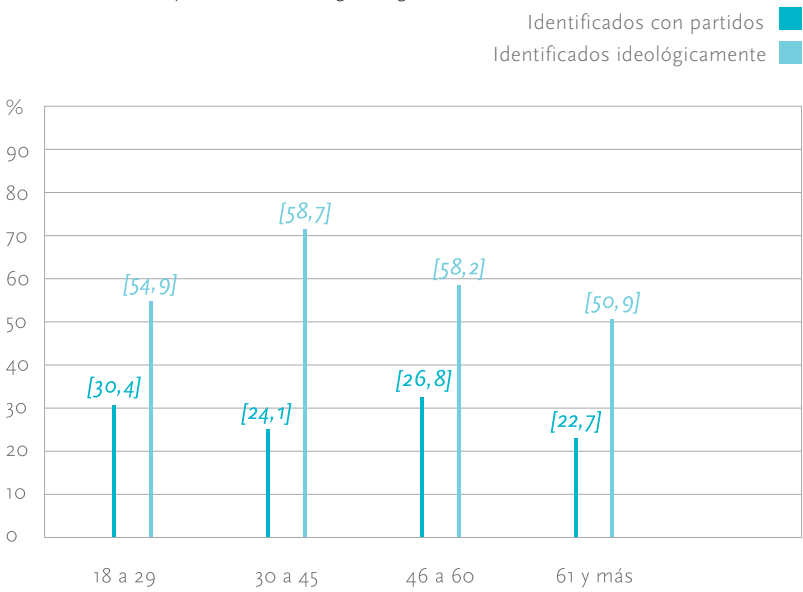


Gráfico 5

Identificación partidaria e ideológica según nivel educativo

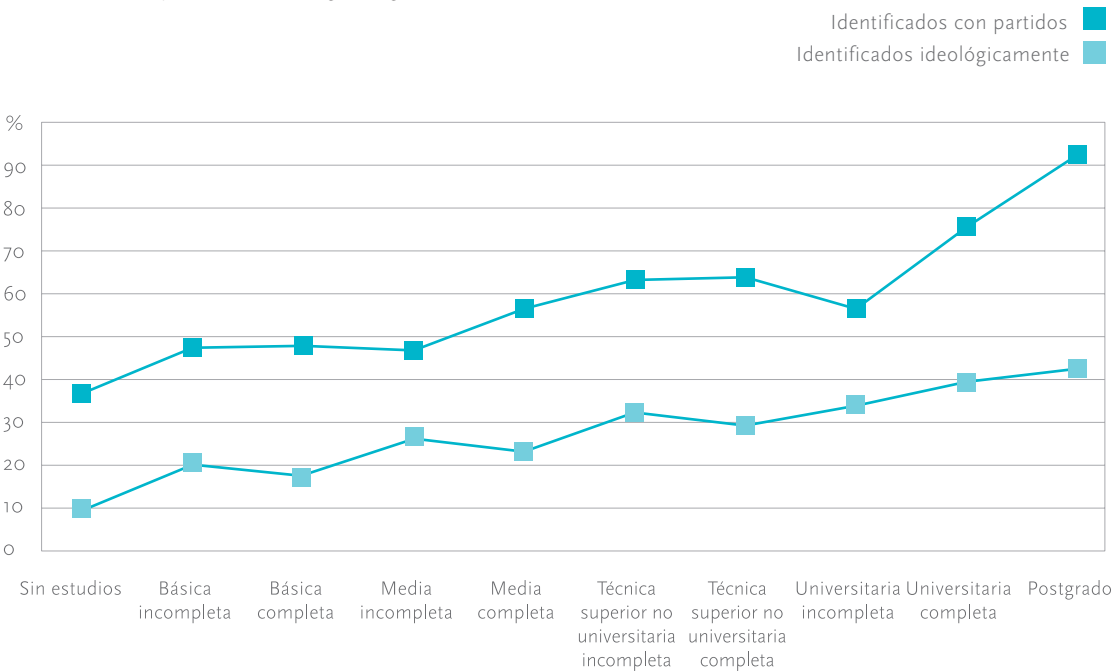


Gráfico 6

Identificación partidaria e ideológica según nivel socioeconómico

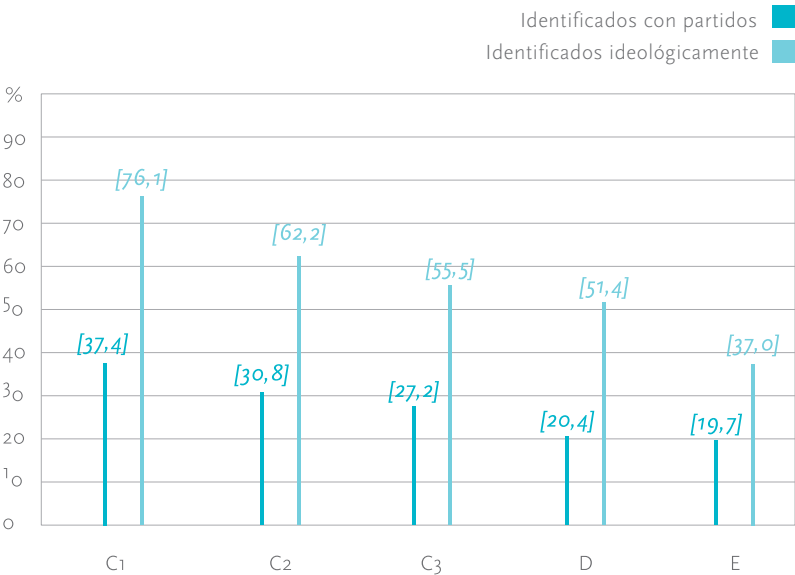
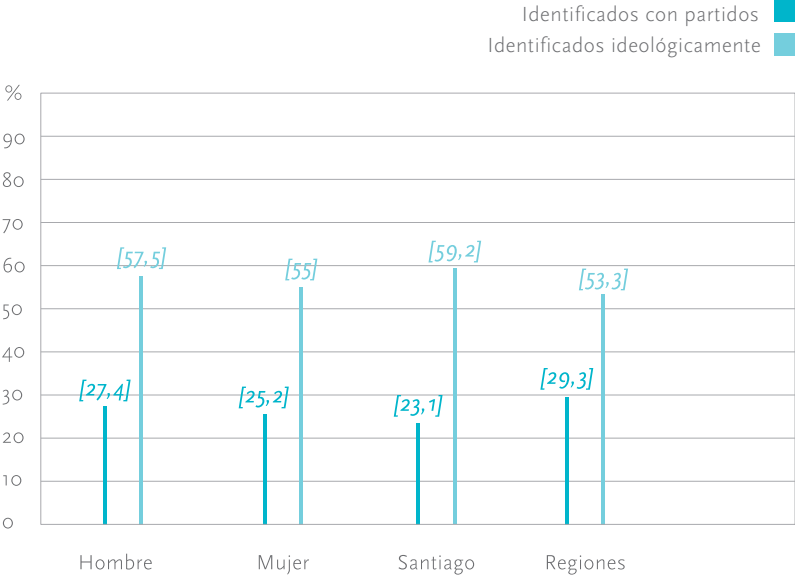


Gráfico 7

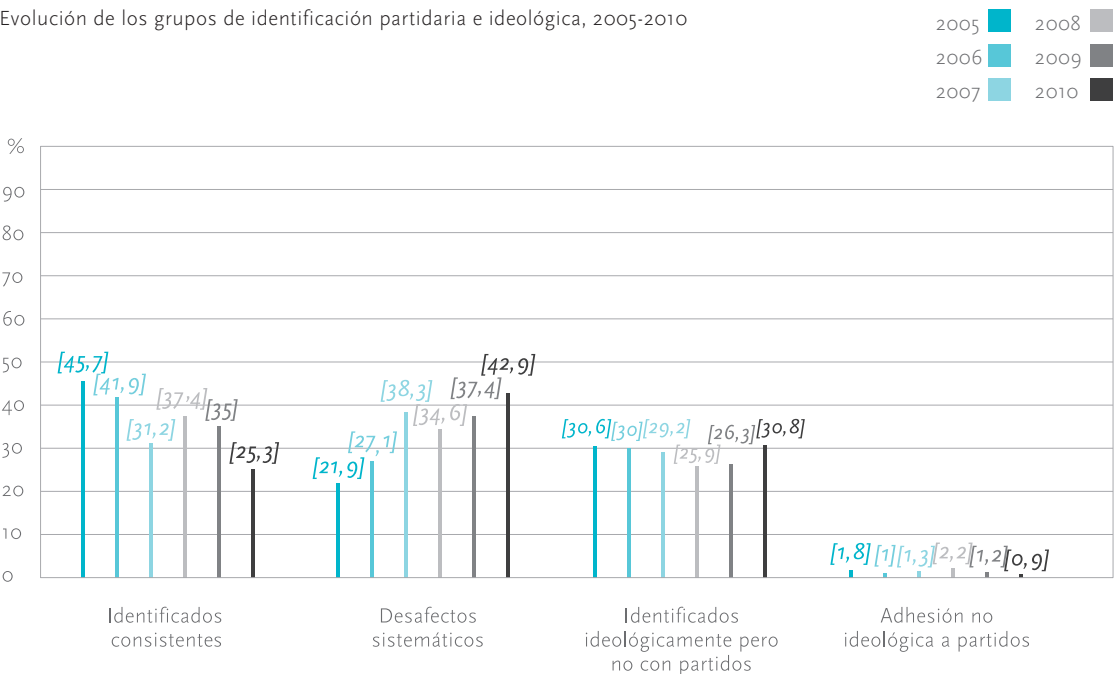
Identificación partidaria e ideológica según sexo y hábitat



Fuente gráficos 4,5,6 y 7: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráfico 8

Evolución de los grupos de identificación partidaria e ideológica, 2005-2010



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP, 2005-2010.

¿Qué explica la identificación partidaria?

Luego de haber evaluado los posibles determinantes de la identificación partidaria, someto a prueba algunas hipótesis. Debido a la limitada extensión de este trabajo me concentraré en edad y educación como dos factores centrales para la teoría de la modernización respaldada por Dalton. Es decir, que tanto jóvenes como personas más educadas tienden a presentar menores niveles de afección partidaria. Sobre esto ya se avanzó en el punto anterior, pero me parece adecuado probar el funcionamiento de estas variables en un modelo estadístico. Controló el efecto de dichas variables mediante sexo y hábitat. Adiciono otras variables que van más apegadas a la evaluación que los ciudadanos realizan respecto al funcionamiento del país y que se aproximan a la propuesta teórica de Mainwaring et al. (2006) ligada a la eficiencia estatal. En específico, me refiero a las evaluaciones de la economía del país y la economía personal, percepción de corrupción y satisfacción con la democracia.

Sugiero un modelo *logit*. La variable dependiente corresponde a identificación partidaria. He codificado como “1” a aquellos encuestados que tienen cercanía con alguno de los partidos, y con “0” aquellos que no la tienen, incluyendo los que no saben o no contestan la pregunta. Mi objetivo no es encontrar los determinantes de representación de cada uno de los partidos, sino que la identificación en general. Además, el número de casos que corresponde a la identificación por cada partido es muy reducido y dificulta la especificación de un modelo.

Incluyo como fuerte control en el modelo al interés en la política, asumiendo ciertamente que los más interesados presentan mayores niveles de identificación. Esto puede contribuir a despejar algunos problemas

de endogeneidad en la especificación del modelo, debido a la bidireccionalidad causal que puede existir entre la identificación y las variables asociadas al modelo teórico que aplica para las democracias andinas (Mainwaring et al., 2006). De todas formas, añado un segundo modelo que excluye el interés en la política. Seguramente esta variable captura gran parte de la varianza de la adhesión partidaria, por lo que podría anular el efecto de otras variables incluidas en el modelo estadístico.

Los resultados van en la línea de lo señalado más arriba. En primer lugar, la edad no tiene un efecto significativo sobre los niveles de vínculo político. Este dato no es novedoso y ha sido constatado con otras encuestas en Chile (Schuster, 2007; Segovia, 2009; Morales y Rubilar, 2010). En segundo lugar, la educación tampoco tendría un efecto significativo descontando el impacto que ejerce el interés en la política. Sin embargo, al excluir esta variable, los años de educación (en el modelo 2) funcionan de la manera esperada, considerando los datos descriptivos: los más educados tienden a representarse más que los menos educados. En tercer lugar, no se advierte un efecto significativo de variables asociadas a eficiencia estatal. Sólo la corrupción tiene cierto impacto en el modelo 2, mostrando que quienes más corrupción perciben, menos identificación muestran.

Tabla 1

Modelos de regresión logística. La variable dependiente es identificación partidaria

	Modelo 1	Modelo 2
Sexo (1=Hombre; 2=Mujer)	0,031	-0,006
Edad	-0,002	-0,002
Educación (1=Sin estudios; 9=Postgrado)	0,055	0,105 ***
RM (1= RM; 0=Regiones)	0,383 ***	0,282 ***
Interés en la política (1=Nada interesado; 4=Muy interesado)	0,519 ***	-
Situación económica del país (1=Muy mala; 5=Muy buena)	-0,088	-0,032
Situación económica personal (1=Muy mala; 5=Muy buena)	-0,020	-0,005
Percepción de corrupción (1=Ha disminuido; 3=Ha aumentado)	-0,159	-0,216 *
Satisfacción con la democracia (1=Nada satisfecho; 4=Muy satisfecho)	0,096	0,101
Constante	-2,353 ***	-1,427
R cuadrado de Nagelkerke	0,096	0,03
Porcentaje pronosticado correcto	72	70,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP, 2005-2010.

*** Significativo al $p \leq 0.01$ ** Significativo al $p \leq 0.05$ * Significativo al $p \leq 0.1$

Conclusiones

La identificación partidaria ha caído de manera sistemática en Chile. Lo particular del caso es que dicho descenso ha sido más o menos parejo según cada grupo de edad. Acá sólo evaluó el comportamiento de las variables en una sola encuesta, pero otros trabajos han mostrado que esta tendencia se ha mantenido en el tiempo (Morales y Rubilar, 2010). Entonces, y contrario a lo que suele pensarse desde los distintos enfoques que estudian el tema, la edad no es un predictor significativo de la filiación con los partidos. Incluso segmentando por generaciones políticas (Toro, 2009) el resultado se mantiene sin grandes variaciones. La desafección es similar en encuestados que votaron en el plebiscito de 1988 respecto a los que no votaron en esa elección.

El caso de Chile no se condice con el modelo teórico aplicado para las democracias industrializadas avanzadas. No es que Chile sea un caso “postmaterial” en América Latina. Esto, porque ni la edad ni la educación funcionan de la manera esperada por el modelo. Es decir, la adquisición de mayores habilidades cognitivas no va de la mano con un decrecimiento de la adhesión partidaria. Los datos descriptivos muestran, en el caso de la educación, un funcionamiento inverso a como predice la teoría. Son los más educados los que más se representan con los partidos. En el peor de los casos, como sugiere uno de los modelos estadísticos, la educación no tendría mayor efecto sobre la identificación. Pero cuando se analiza por ingreso, claramente los segmentos más altos muestran mayores niveles de adhesión a partidos.

Estos resultados invitan a repensar el caso de Chile a la luz de los distintos modelos teóricos sobre la desafección partidaria. Los datos no permiten clasificar a Chile en el mismo grupo de los países con democracias industrializadas avanzadas atendiendo a los factores que, para esos casos, explican la caída de la identificación. Chile tampoco calza con el modelo teórico sugerido por Mainwaring et al. (2006) para las democracias andinas.

Si bien se advierten quejas de la ciudadanía, particularmente por el problema de la delincuencia, las deficiencias estatales no son de la misma magnitud que en Perú, Ecuador, Venezuela o Colombia. Por tanto, las razones de la débil identificación partidaria probablemente tengan relación con algunas coyunturas históricas como el tipo de régimen autoritario y el formato de la transición a la democracia. Ahí podrían encontrarse las raíces del descontento y el eterno malestar ciudadano con la clase política (Huneeus, 1999). A esto se debe añadir la escasa competitividad que impone el sistema electoral binominal, generando una especie de oligopolio partidario que impide el fortalecimiento de la representación.

Referencias

- ABRAMSON**, Paul R. y Charles W. Ostrom. 1991. "Macropartisanship: An Empirical Reassessment", *American Political Science Review* 85 (1): 181-192.
- ALBRIGHT**, Jeremy J. 2009. "Does Political Knowledge Erode Party Attachments?: A Review of the Cognitive Mobilization Thesis", *Electoral Studies* 28 (2): 248-260.
- BISHOP**, George F., Alfred J. Tuchfarber y Andrew E. Smith. 1994. "Question Form and Context Effects in the Measurement of Partisanship: Experiment Tests of the Artifact Hypothesis", *American Political Science Review* 88: 945-954.
- BRADER**, Ted y Joshua A. Tucker. 2001. "The Emergence of Mass Partisanship in Russia, 1993-1996", *American Journal of Political Science* 45 (1): 69-83.
- CAMPBELL**, Angus, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes. 1960. *The American Voter*. New York: John Wiley.
- COLOMER**, Josep y Luis Escatel. 2005. "La dimensión izquierda-derecha en América Latina", *Desarrollo Económico* 45 (177): 123-136.
- CONVERSE**, Philip E. 1969. "Of Time and Partisan Stability", *Comparative Political Studies* 2: 139-171.
- DALTON**, Russell. J. 1999. "Political Support in Advanced Industrial Democracies", en *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*, editado por Pippa Norris. Oxford: Oxford University Press.
- DALTON**, Russell J. 2000. "Citizen Attitudes and Political Behavior", *Comparative Political Studies* 33 (6/7): 912-940.
- DALTON**, Russell. 2002. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. Chatham: Chatham House.
- DALTON**, Russell J. y Steven Weldon. 2007. "Partisanship and Party System Institutionalization", *Party Politics* 13 (2): 179-196.
- HINICH**, Melvin y Michael Munger. 1994. *Ideology and the Theory of Political Choice*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- HOLMBERG**, Sören. 2007. "Partisanship Reconsidered", en Russell Dalton y Hans D. Klingemann, *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press, pp. 557-570.
- HUNEEUS**, Carlos. 1999. "Malestar y desencanto en Chile: Legados del autoritarismo y costos de la transición", Papeles de Trabajo. Programa de Estudios Prospectivos, 54, Santiago.
- LEVINE**, Daniel y José Molina. 2007. "La calidad de la democracia en América Latina: Una visión comparada", *América Latina Hoy* 45: 17-46.
- MAINWARING**, Scott. 1999. *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*. Stanford: Stanford University Press.
- MAINWARING**, Scott. 2006. "State Deficiencies, Party Competition, and Confidence in Democratic Representation in the Andes", en Scott Mainwaring, Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro Leongómez, *The Crisis of Democratic Representation in the Andes*. Stanford: Stanford University Press.
- MAINWARING**, Scott y Timothy R. Scully. 1995. "La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina", *Revista de Ciencia Política* XVII (1-2): 63-102.
- MAINWARING**, Scott; Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro Leongómez. 2006. *The Crisis of Democratic Representation in the Andes*. Stanford: Stanford University Press
- MACKUEN**, Michael B., Robert S. Erikson y James Stimson. 1989. "Macropartisanship", *American Political Science Review* 83 (4): 1125-1142.
- MILLER**, Warren y Merrill Shanks. 1996. *The New American Voter*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- MORALES**, Mauricio y Fernando Rubilar. 2010. "La evolución de la identificación partidaria en Chile. La edad no hace la diferencia", manuscrito.
- PAYNE**, Mark, Daniel Zovatto, Fernando Carrillo y Andrés Allamand. 2003. *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*. Washington, D.C.: BID e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- ROSE**, Richard y William Mishler. 1998. "Negative and Positive Party Identification in Post-Communist Countries", *Electoral Studies* 17 (2): 217-234.

SCHUSTER, Martín. 2007. "¿Me inscribo por ninguna?: Algunos determinantes de la participación electoral de los jóvenes chilenos en comparación a la población nacional en las encuestas de opinión, 1990-2006", tesis para optar a la licenciatura en ciencia política, Universidad Diego Portales.

SEGOVIA, Carolina. 2009. "¿Crisis de la política en Chile? Percepciones y valoraciones de los partidos", en Rodrigo Cordero (ed.), *La sociedad de la opinión. Reflexiones sobre encuestas y cambio político en democracia*. Santiago: Ediciones UDP.

TORO, Sergio. 2008. "De lo épico a lo cotidiano: jóvenes y generaciones políticas en Chile", *Revista de Ciencia Política* 28 (3): 143-160.

ZECHMEISTER, Elizabeth J. 2010. "Left-Right Semantics as a Facilitator of Programmatic Structuration", en *Latin American Party Systems*, eds. H. Kitschelt, K. Hawkins, J. Luna, G. Rosas y E. Zechmeister, Cambridge: Cambridge University Press: 96-118.

Precauciones frente al voto voluntario¹

MAURICIO MORALES

¹ Agradezco los comentarios recibidos en el seminario desarrollado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales. De igual forma, mi gratitud con Miguel Ángel López, quien comentó y criticó detalladamente una versión original del manuscrito. Ciertamente, la responsabilidad por eventuales errores u omisiones recae exclusivamente en el autor.

² Me refiero a Francisco J. Díaz. Ver http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050108/pags/20050108184641.html.

³ Ver <http://salud.latercera.cl/noticia/politica/2010/11/674-304793-9-pinera-emplaza-a-parlamentarios-por-voto-voluntario-los-compromisos-son-para.shtml>.

⁴ El debate sobre voto obligatorio y voluntario puede ser seguido en Valenzuela, 2004; Huneus, 2004 y 2005; Madrid, 2005; Sierra, 2007; y Chuaqui, 2007, entre otros. En la historia política de Chile este tema también se ha discutido, particularmente, a partir de las reformas de 1958 y 1962 con los debates en torno a la cédula única de votación y al establecimiento de la inscripción electoral y del voto obligatorio. El acuerdo de la elite parlamentaria fue que los ciudadanos debían ser responsables por sus decisiones y, por tanto, era obligatorio participar en los procesos electorales.

Todo parece indicar que en Chile los partidarios del voto obligatorio han perdido la batalla. Tanto en la opinión pública como en parte de la elite parlamentaria existe suficiente consenso respecto a que el mejor camino es la reforma hacia un sistema de voto voluntario. Incluso, para algunos, este sistema ya se estaría implementando “de facto” en Chile, dado que las sanciones por no votar no se aplican².

El apoyo de esta opción por parte de la Concertación no refleja necesariamente una convicción política, pues algunos parlamentarios han manifestado reparos a la reforma. Por tanto, el respaldo al voto voluntario obedece, en mayor medida, al cumplimiento de un compromiso suscrito en el gobierno de Michelle Bachelet en 2009. De hecho, el presidente Sebastián Piñera envió el siguiente mensaje a la Concertación: “Los compromisos, y esto que lo escuchen muy bien todas las autoridades públicas y los parlamentarios, son para cumplirlos. A uno le enseñan desde niño que hay que cumplir lo que promete, y que no hay que prometer lo que no puede cumplir” (*La Tercera*, 4 de noviembre de 2010)³.

Hoy se alzan algunas voces contrarias a la reforma, particularmente desde la Democracia Cristiana. Pero todo ya parece estar definido a favor del voto voluntario. Por un acuerdo suscrito en 2009 por parte de la Concertación, sus parlamentarios no tendrían posibilidad de arrepentimiento. Así, el conglomerado optó por el camino más fácil: cumplir con la palabra empeñada a sabiendas de los efectos negativos que podría generar un sistema de voto voluntario. O al menos eso es lo que cree parte de su elite parlamentaria. La Concertación no quiso pagar el costo de corto plazo que implicaba revocar esa decisión (particularmente la Democracia Cristiana). Esto es comprensible en un escenario de postderrota electoral y donde sus apoyos van claramente a la baja. No cumplir con la palabra podría tener efectos aún más negativos sobre su popularidad. Pero la decisión sería inaceptable en el entendido que los partidos debiesen decidir en función del bien común y del fortalecimiento de la democracia⁴.

El problema no sólo pasa por la caída de la participación que genera el voto voluntario (Lijphart, 1997; Jackman, 1987; Blais y Dobrzynska, 1998; Blais y Young, 1999; Blais, 2006, entre otros), tal como sucedió en Holanda (1971) y Venezuela (1993) que, previamente, contaron con

un sistema de voto obligatorio. Ciertamente en Venezuela existen otras causas de la caída de la participación y que están relacionadas con la crisis del sistema de partidos (Morgan, 2007). El caso de Chile es particularmente delicado pues el sistema de voto voluntario conviviría con el sistema electoral binominal. Como argumento más abajo, esta combinación es nefasta para la democracia, pues se deprimen sus dos dimensiones centrales: participación y competencia (Dahl, 1971).

Lo señalado también tiene un impacto en la calidad de la democracia, pues genera un sistema con escasa incertidumbre y con poco interés ciudadano en asistir a las urnas (Altman y Pérez-Liñán, 2002)⁵. Además, y como otra precaución ante el voto voluntario, está la transformación de las desigualdades económicas en desigualdades políticas. Es decir, que la participación sería mayor en los segmentos con más recursos (Lijphart, 1997; Jackman, 1987; Mueller y Stratman, 2003; Morales et al., 2010; Corvalán y Cox, 2010) y que incluso esto podría tener efectos en los niveles de inequidad social. Los países con sistemas de voto voluntario tenderían a ser menos equitativos que los que cuentan con sistema de voto obligatorio (Chong y Olivera, 2005).

Este artículo se divide en tres partes. En la primera, muestro algunos antecedentes que pueden servir para evaluar los posibles efectos de la reforma. Me refiero particularmente al comportamiento de la participación electoral desde 1989 bajo un escenario de inscripción voluntaria y voto obligatorio (esto último, discutible para 2009). Asimismo, realizo un breve análisis comparado, con datos sobre América Latina, para evaluar el efecto que tienen los sistemas de voto obligatorio y voluntario sobre la participación electoral. En segundo lugar, efectúo un análisis descriptivo de los datos de la Encuesta Nacional UDP, mostrando que un sistema de voto voluntario transforma las desigualdades socioeconómicas en desigualdades políticas: es decir, que los más ricos muestran mayor disposición a participar que los más pobres. En tercer lugar, especifico algunos modelos de regresión *logit* para certificar el efecto significativo del nivel de ingresos sobre la predisposición a participar en las elecciones⁶.

Resulta claro que la opción por cualquier tipo de régimen electoral no resolverá automáticamente los problemas de nuestra democracia. Mi preocupación central pasa solamente por los posibles efectos que pueda traer la aplicación de la modalidad de voto voluntario en los niveles y composición de la participación. Y esto es aún más inquietante si consideramos al voto voluntario en combinación con el sistema electoral binominal, cuya característica central es que desestimula la competencia entre las coaliciones y hace menos atractivo el panorama político para los ciudadanos.

Antecedentes

La última Encuesta Nacional UDP arrojó un amplio apoyo hacia el voto voluntario. Casi el 71% de los entrevistados se inclinó por esta alternativa. En 2009 no se formuló esta pregunta, pero sí se consultó si votar era un derecho, un deber o ambos. Por la primera opción se inclinó un 44,5%; por la segunda un 41,7%; y por la tercera un 10,5%. Hay cierto equilibrio entre las dos primeras alternativas, pero con inclinación a entender el voto como un derecho. Probablemente este antecedente también sirva para explicar el alto apoyo al voto voluntario. Otro dato relevante es que si en 2009 el 59% estaba dispuesto a votar si el voto era

5 Para un análisis comparado de la participación, ver Fornos et al. (2004) y Geys (2006). Para una crítica a la operacionalización del concepto de calidad de la democracia de Altman y Pérez-Liñán (2002), ver Levine y Molina (2007).

6 Parte de este trabajo fue publicado en un documento que escribí para el Observatorio Político Electoral del ICSO, titulado "Razones para el voto obligatorio en Chile". Disponible en: <http://www.encuesta.udp.cl/wp-content/uploads/2010/11/informe-voto-obligatorio.pdf>.

voluntario, en 2010 esa cifra creció a 70,1%. En síntesis, el ambiente en la opinión pública es claramente favorable a la institución del voto voluntario y la disposición a participar electoralmente bajo este sistema también aumenta de manera sustantiva.

Lo anterior podría llevar a pensar que si la ciudadanía está de acuerdo con la reforma, entonces no quedaría más que aplicarla. Si vemos que más de los dos tercios está a favor de dicha modificación y que la participación podría mantenerse, o incluso aumentar, entonces el camino natural iría inexorablemente hacia el voto voluntario. El problema pasa por mirar estas cifras de manera general y sin la precisión que requiere una decisión de esta magnitud.

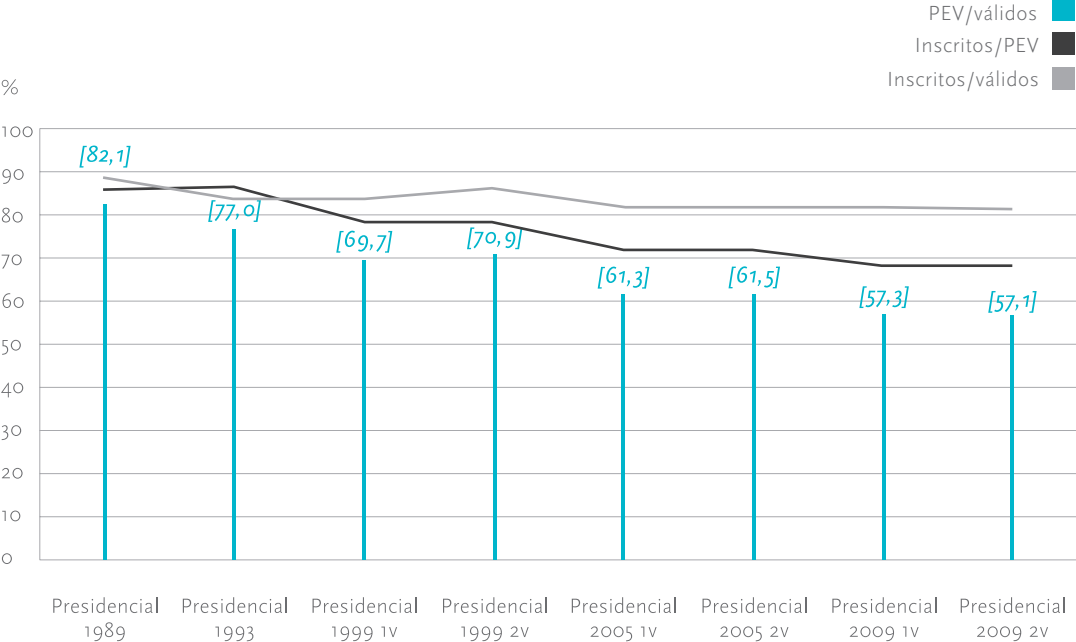
Si los números se leen de manera mañosa, se podría concluir que la participación electoral con voto voluntario sería superior a la existente con voto obligatorio. Es decir, si actualmente en Chile vota el 59,13% de toda la población en edad de votar (PEV), considerando los datos de la segunda vuelta electoral de enero de 2010 (7.203.371 votos emitidos de una población en edad de votar de 12.180.403), esa participación crecería al 70,1%, incluyendo al porcentaje de encuestados que dice que votaría si el voto fuese voluntario. La trampa del argumento pasa precisamente por la comparación, asumiendo que hoy Chile tiene un sistema pleno de voto obligatorio. Se debe tener presente que la pregunta que formula la encuesta expresa dos condiciones: inscripción automática y voto voluntario. La comparación con lo que actualmente sucede en Chile sería inscripción voluntaria y voto obligatorio sin sanciones efectivas, que en la práctica funciona como voto voluntario. No se está comparando frente a un sistema de inscripción automática y voto obligatorio que, desde mi punto de vista, es la combinación ideal. Entonces, si con inscripción automática y voto voluntario la participación estimada fuese del 70,1%, con inscripción automática y voto obligatorio esa participación, seguramente, sería sustancialmente superior.

Es un hecho que la participación electoral en Chile ha caído de manera sistemática (Carlin, 2006) particularmente en los jóvenes, cuestión que también sucede en democracias industrializadas avanzadas (Goerres, 2006). Del total del PEV en 1989, el 84,2% votó en las presidenciales de ese año, cifra que en la segunda vuelta presidencial de enero de 2010 descendió a 59,13%. De igual forma, la tasa de inscritos en los registros electorales ha bajado bruscamente. Si en 1989 el 88,91% del PEV estaba alistado en los registros electorales, hoy ese porcentaje ha caído en 20 puntos, llegando al 68%. Lo que ha bajado de manera más lenta es el porcentaje de inscritos que efectivamente vota. En 1989 sufragó el 94,72% de los registrados, cayendo al 86,94% en 2010 (segunda vuelta presidencial). Esto muestra que, si bien la abstención ha aumentado (inscritos que no votan), la percepción de posibles sanciones ha retenido en niveles razonables la tasa de inscritos que asiste a las urnas.

Un aspecto preocupante corresponde al porcentaje del PEV que sufraga válidamente. Es decir, por alguno de los candidatos en competencia. La barra celeste del gráfico 1 muestra que para las elecciones presidenciales, el 82,1% del PEV votó válidamente en 1989; cifra que cae al 57,1% en la segunda vuelta presidencial de enero de 2010. Esto trae como correlato que el presidente electo haya sido votado por tan sólo un 29,48% del PEV, la cifra más baja en los 20 años de democracia en Chile. Por tanto, la reforma de voto voluntario se zanja en un momento particularmente complejo en términos de participación electoral.

Gráfico 1

Evolución de la participación electoral en Chile, presidenciales 1989-2009



Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl y www.elecciones.gov.cl.

Si bien es cierto que la inscripción automática es una medida adecuada, pues anula los costos de inscripción para los ciudadanos, sobre el voto voluntario existen más dudas que certezas. La inscripción automática desburocratiza totalmente el trámite que implica asistir a las oficinas del Servicio Electoral. Salvo las condiciones que la ley señala, todas las personas de 18 años y más quedarán habilitadas para votar.

Los defensores del voto voluntario señalan, en términos muy generales, que probablemente se incremente el número de votantes dado que el padrón crecerá de ocho a más de 12 millones. Los partidos, por tanto, deberán realizar esfuerzos importantes para captar a esa masa de cuatro millones de nuevos electores potenciales, que son principalmente jóvenes y críticos de los partidos políticos. Esto derivaría en una profunda renovación de los partidos, activando la política no sólo desde los programas, sino que también desde su ejercicio. Los partidos no conocerían de antemano el número de electores que eventualmente votaría. En el sistema actual tampoco lo saben, pero sí se dispone de instrumentos razonables para hacer una estimación. Esta mayor incertidumbre provocaría un profundo cambio en el estilo de campañas y en la forma de hacer política.

Los partidarios del voto obligatorio tienen otros argumentos. Sostienen que con el sistema de voto voluntario la participación caerá aún más. Apoyados en evidencia comparativa contundente, muestran lo que ha sucedido en otros países cuando se cambia de un sistema obligatorio a otro voluntario. Sólo para mostrar esto en términos generales, utilizo dos fuentes de datos. Primero, una base en formato de panel ordenada por país y año para América Latina, que corresponde al trabajo de Power y Garand (2007) en su análisis de la votación nula y blanca entre 1980 y 2000. Segundo, los datos de la encuesta LAPOP 2008, comple-

mentada con información de Altman (2009). En ambos casos la idea es determinar el efecto que tiene el sistema de voto obligatorio sobre la participación electoral. Utilizo, entonces, datos en dos niveles. Primero por país y segundo por individuos.

El modelo con datos de Power y Garand (2007) es lineal en serie de tiempo y controlado por efectos de país (cross-sectional time series regression, tabla 1). El modelo con la encuesta LAPOP, y siguiendo a Altman (2009), es de especificación *logit* multinivel (tabla 2). Acá no sólo se trabaja con datos propios de la encuesta, sino que también se incluye información de contexto para cada país, específicamente el régimen electoral. Para el modelo con datos agregados, la variable dependiente es el porcentaje de gente que participa en las elecciones. Para el modelo con datos individuales, la variable dependiente es la participación electoral declarada de cada encuestado (si votó o no en las últimas elecciones presidenciales). Este último modelo, como señalé, incluye información de contexto y de ahí que pueda ser catalogado como una modelación multinivel. El supuesto es que las instituciones moldean la conducta de los individuos, resultando esperable que la participación declarada sea mayor en aquellos individuos que viven bajo un sistema de voto obligatorio con sanciones efectivas, respecto a los que viven bajo un sistema de voto voluntario.

Ambos modelos apuntan hacia el mismo resultado. No me detengo a analizar la incidencia de las otras variables que se incluyen en las modelaciones, pero basta decir que son las más utilizadas y, muchas de ellas, funcionan como eficientes mecanismos de control y también en la dirección esperada por la teoría. Lo más relevante para el caso de este trabajo es el efecto que tiene el tipo de régimen electoral sobre la participación. Claramente, los sistemas con voto obligatorio y sanciones efectivas estimulan la participación electoral. Esto es así tanto en el modelo con datos agregados por país como en el modelo con datos individuales.

Tabla 1

Modelo de cross-sectional time series regression. La variable dependiente es participación electoral		
Elecciones concurrentes	8.626	(2.38)*
PIB per cápita en dólares (1990)	0.003	(5.72)**
Desproporcionalidad del sistema electoral	-1.690	(5.05)**
Número efectivo de partidos	-0.666	(0.91)
Régimen electoral (0=Voto voluntario; 3=Voto obligatorio con sanciones)	8.469	(5.29)**
Personalización del sistema electoral	0.794	(1.66)
Magnitud de distrito promedio	-0,049	(0.76)
Constante	47.504	(9.77)**
Observaciones	57	
Países	16	

Fuente: Elaboración propia con datos de Power y Garand (2007).

** Significativo al 5% * Significativo al 1%

Tabla 2

Determinantes de la participación electoral en América Latina. Modelo *logit* multinivel

Género (1=Hombre; 2=Mujer)	0.030	(0.39)
Edad	0.054	(7.29)**
Años de educación	0.073	(12.95)**
Zona (1=Urbano; 2=Rural)	0.195	(3.18)**
Ingresos	0.028	(2.43)*
Apoyo a la democracia	0.002	(4.64)**
Satisfacción con la democracia	0.003	(2.08)*
GDP per cápita 2005	-0.000	(15.51)**
Años desde la primera elección libre	0.004	(1.54)
Tipo de voto (0=Voluntario; 3=Obligatorio con sanciones)	0.338	(23.42)**
Constante	-2.256	(6.41)**
Observaciones	21092	

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008 y Altman (2009).

** Significativo al 5%

* Significativo al 1%

Otro argumento de los defensores del voto obligatorio pasa por el sostenimiento de la democracia. Si pagamos impuestos para dar vida al sistema económico, entonces no habría razones suficientes para no hacer lo mismo con la democracia (Huneus, 2004 y 2005). Para que ésta funcione se requiere de participación.

Un tercer argumento pasa por los efectos que el voto voluntario trae sobre el gasto en campañas. Como existirá mayor incertidumbre respecto al número de votantes y las campañas deberán extenderse más allá de los límites actuales, entonces puede ser que el dinero sea aún más preponderante en la definición del ganador. Morales y Piñeiro (2010) muestran claramente el efecto que tiene el gasto sobre el éxito electoral de los candidatos. Por tanto, muchas veces los atributos de un candidato sumado a sus tasas de incumbencia no son garantía de triunfo. Se necesita gastar. Y acá viene el problema.

De acuerdo al trabajo citado en el párrafo anterior, los partidos de derecha presentan un nivel de gasto sustantivamente superior al de los partidos de la Concertación, al menos considerando los datos disponibles para 2005. Esto se confirma en el trabajo de Massoud (2010) para las parlamentarias de 2009. En consecuencia, como los electores no estarán obligados a votar, entonces pueden ser presa de otro tipo de incentivos principalmente económicos. Se podría contraargumentar que esto ya sucede en Chile. El trabajo de Luna (2009) sobre la UDI así lo demuestra. Se trata de la profundización de mecanismos de representación clientelar. Por tanto, si con el sistema actual las campañas ya son onerosas y las dosis de clientelismo van en ascenso, los partidarios del voto obligatorio sostienen que resultaría contraproducente generar una institución que agudice estos problemas, en lugar de aplacarlos o corregirlos.

Finalmente, los defensores del voto obligatorio señalan un punto particularmente importante. Me refiero a las desigualdades económicas traspasadas a la esfera política. Supuestamente, en un sistema de voto voluntario participan en mayor medida los más ricos. Más arriba cité literatura comparativa que trata el tema. Sin embargo, para Chile sólo se han realizado algunas aproximaciones al punto (Morales et al., 2010).

Análisis general

La pregunta que formula la Encuesta Nacional UDP para medir la predisposición a participar con voto voluntario es la siguiente: “Si en las próximas elecciones Ud. estuviese inscrito automáticamente en los registros electorales y votar fuese voluntario, ¿Ud. iría a votar?”. Como adelanté, el 70,1% dice que lo haría, cifra superior al porcentaje que actualmente vota de acuerdo al PEV. Ya señalé los reparos contra este argumento. No obstante, existe otra crítica aún más convincente. Al mirar la composición de la participación electoral se advierte el efecto que tiene el ingreso de las personas sobre esa predisposición. Como se observa en el gráfico 2, mientras en el segmento con mayores recursos la predisposición a votar llega al 78,06%, en los más pobres alcanza el 66,48%. Más adelante verifico que estas diferencias sean estadísticamente significativas sobre la base de un modelo que controla la relación con otras variables.

De esta manera, el sistema de voto voluntario puede transformar las desigualdades económicas en desigualdades políticas. No obstante, se debe reconocer que este problema ya existe con el método actual. Sospecho que con una modalidad de voto obligatorio con sanciones efectivas, este inconveniente -si bien pudiera existir- al menos sería de menor magnitud.

También está la posibilidad de que las políticas clientelares que puedan ejercer algunos partidos (generalmente los que tienen más recursos) reduzcan el efecto del ingreso. Es decir, si estos partidos establecen incentivos para votar en la población más pobre, entonces es posible que tanto ricos como pobres voten en similar magnitud. Pero, como señalé más arriba, esto discrimina en contra de los partidos que tienen menor capacidad para movilizar recursos. Claro está que esto también sucede en el sistema actual, pero estimo que un sistema de voto voluntario puede agudizar este problema.

Otra defensa que subrayan los defensores del voto voluntario pasaría por el incremento de la votación juvenil. Como los partidos estarían prácticamente obligados a recurrir a estos electores, entonces deberían generar las estrategias necesarias para capturar su adhesión. Reconozco que esto puede ser plausible (gráfico 3). Hoy los jóvenes representan una porción muy pequeña del padrón electoral. Si en 1989 los jóvenes entre 18 y 29 años representaban alrededor del 35%, en 2009 no sobrepasan el 9%. Si bien la tendencia de los resultados de la encuesta muestra que los jóvenes tienen menos predisposición a votar que el resto, de todas formas es posible especular que su participación pudiese aumentar con este nuevo sistema. El supuesto central que está tras este argumento pasa por la inscripción automática. Como los costos por inscribirse se anulan, entonces los electores hasta ahora no inscritos -fundamentalmente jóvenes- pueden decidir hasta último minuto si participar o no.

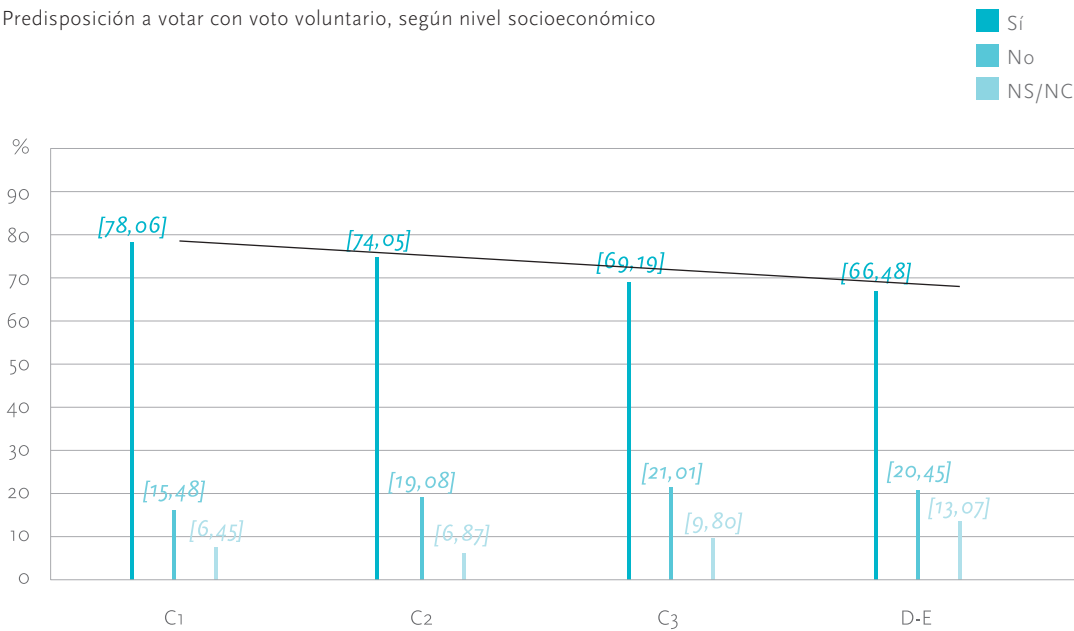
Lo discutible es que la modalidad de voto obligatorio no pueda generar el mismo efecto. Con este sistema también estarán más de 12 millones de ciudadanos disponibles para votar. El hecho de que el voto sea un deber implica, más bien, la exigencia de asistir a las urnas el día de la elección, no que el ciudadano esté constreñido a marcar una opción por algún candidato. En este escenario, los partidos también tendrán el suficiente incentivo para llegar al máximo de electores posibles, incluyendo a los jóvenes. Por tanto, resulta dudoso el argumento de que un sistema obligatorio bloquee la participación juvenil, más aún si también operará la inscripción automática.

Asimismo, sistemáticamente, se sostiene que el voto voluntario implicará mayores dosis de incertidumbre en la competencia política. Estoy de acuerdo en que ésta es central para la democracia. De hecho, la democracia bien podría entenderse como la “institucionalización de la incertidumbre” (Przeworski, 1991). La pregunta es por qué el sistema de voto voluntario debiese aumentar la falta de certeza en la competencia electoral y no el voto obligatorio. Si todos los ciudadanos quedan inscritos de manera automática y todos están obligados a votar aumentando el padrón de ocho a 12 millones, entonces naturalmente la incertidumbre también se incrementará.

Puede ser que dadas las tendencias históricas de las elecciones y los patrones de votación, los partidos conozcan, más o menos, el comportamiento global de los inscritos, pero tendrán poca información (a excepción de las encuestas) respecto a los no inscritos. Es más. Los niveles de incertidumbre no dependen necesariamente del tipo de régimen electoral, sino más bien del modelo electoral. Hoy, con el sistema binominal, la competencia está absolutamente bloqueada, generando fuertes oligopolios políticos. Los ciudadanos saben, más o menos, quiénes resultarán electos en sus distritos. Por tanto, y si a esto se le suma un voto voluntario, la escasa competencia se traducirá en una baja participación. Acá está el centro de la discusión al analizar el efecto del tipo de régimen sobre la participación electoral.

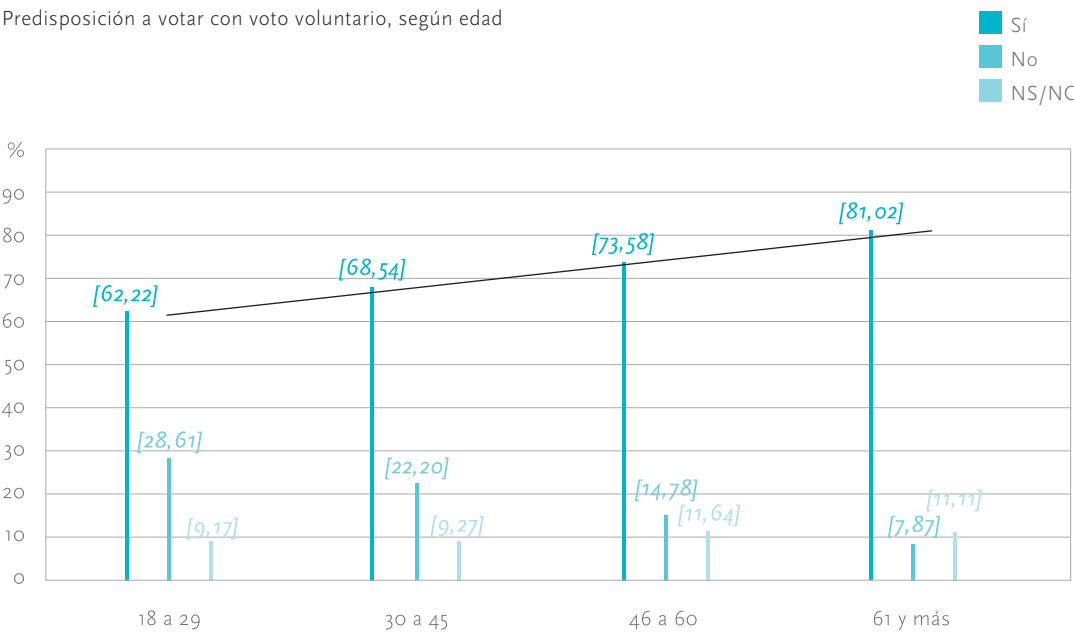
En síntesis, los atributos que frecuentemente se esgrimen a favor del voto voluntario son perfectamente compatibles con un sistema de voto obligatorio. La diferencia está en que el sistema de voto obligatorio no reproduce las desigualdades económicas en políticas. Adicionalmente, resulta preocupante la convivencia de voto voluntario y sistema binominal, dado que en conjunto pueden deprimir las dos dimensiones centrales de la democracia: competencia y participación.

Gráfico 2



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

Análisis inferencial

Para cerrar este trabajo pruebo una de las hipótesis centrales. Es decir, que la predisposición a votar con voto voluntario está determinada por el nivel de ingresos de las personas y que las disparidades económicas se transforman también en políticas.

He construido dos modelos de regresión *logit*. La variable dependiente es la predisposición a votar con voto voluntario. Se incluye el nivel socioeconómico como principal determinante. A esto se añade un fuerte control que corresponde a si la persona está inscrita en los registros electorales. Supuestamente, esta variable debiese ser un predictor central y que posiblemente anule el efecto de las otras variables incluidas en el modelo. De igual forma, se incluye sexo, edad, hábitat y posicionamiento en la escala izquierda-derecha. La edad también debiese actuar como un fuerte predictor, dado que sistemáticamente los más jóvenes muestran menor predisposición a votar.

El problema del modelo 1 está en el porcentaje de casos perdidos que se reportan, dado que el 43,8% no se identifica en ningún peldaño de la escala ideológica izquierda-derecha. Por tanto, decidí implementar una transformación. Codifiqué con “1” a todos los encuestados que se autoposicionan en algún peldaño y con “0” a los que no se identifican. De esta forma, incremento sustantivamente el número de casos a estudiar. En este modelo la exigencia también es fuerte, pues se incluye a los inscritos y a los identificados. Lo esperable es que ambas variables sean significativas y que, como consecuencia, anulen el efecto de las restantes, entre las que se incluye el nivel socioeconómico.

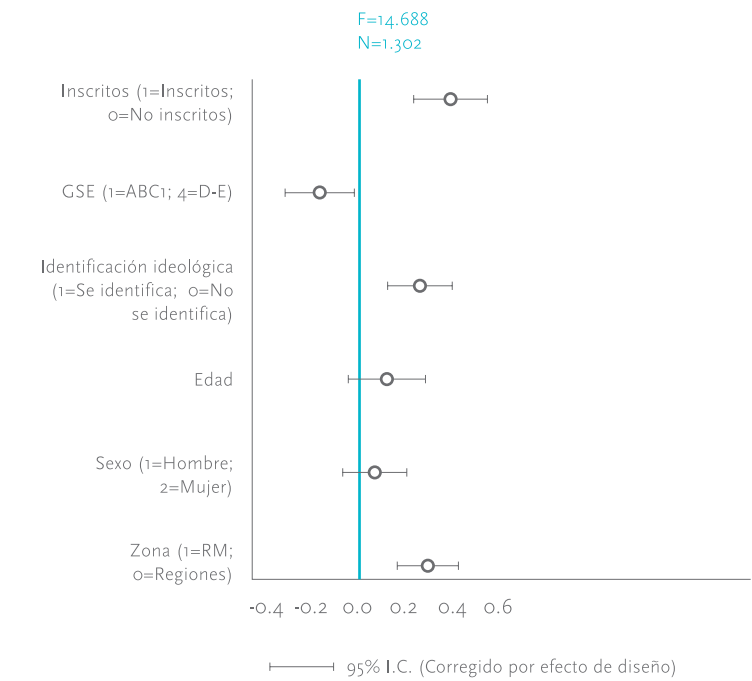
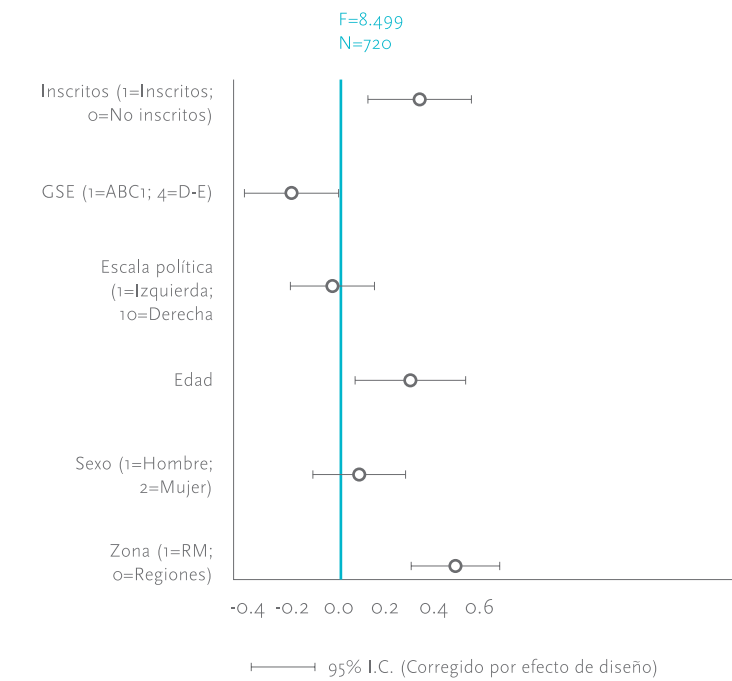
Los resultados van en la línea esperada de acuerdo al análisis descriptivo. El nivel socioeconómico de los encuestados tiene un efecto significativo sobre la predisposición a votar en ambos modelos. El funcionamiento es el esperado: a mayor ingreso mayor predisposición a votar. Presento los resultados mediante gráficos evacuados con el programa Stata, cuyos formatos fueron extraídos de la encuesta LAPOP para la ronda 2008. Cada variable lleva asociada una barra. El punto central de esa barra equivale al coeficiente beta estandarizado y las extensiones corresponden al intervalo de confianza de ese coeficiente. Si la barra atraviesa la línea vertical celeste, esa variable no será estadísticamente significativa a un 5%. Como se observa en el modelo 1, las variables estadísticamente significativas son las siguientes: en primer lugar, el hecho de estar inscrito aumenta las chances de que una persona efectivamente vote con sistema de voto voluntario. Lo mismo sucede con la edad. Los mayores tienen más chance de votar. Igual cosa sucede con nivel socioeconómico y con los ciudadanos de la Región Metropolitana. No hay diferencias según escala política. De acuerdo a estos datos, tanto personas de izquierda como de derecha declaran similares niveles de participación.

En el modelo 2 la situación es similar. Se anula el efecto de la edad producto de la transformación que se hizo de la escala política. Esto es, considerando toda la muestra y comparando a identificados y no identificados. Como en el grupo de los no identificados predominan los jóvenes, entonces puede ser que ambas variables estén capturando dimensiones similares y que, por tanto, sobreviva sólo la identificación ideológica. Sin embargo, no sucede lo mismo con el nivel socioeconómico, que se mantiene como una variable estadísticamente significativa. Por tanto, nuevamente, a mayor ingreso, mayor predisposición a votar⁷.

⁷ De todos modos, la variable que más pesa dentro del modelo es, naturalmente, el hecho de estar inscrito en los registros electorales, con un estadístico “wald” de 27,74.

Gráfico 4 y 5

Determinantes de la predisposición a participar con voto voluntario, Encuesta Nacional UDP 2010



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

Conclusiones

Los propulsores de la reforma que conduce al voto voluntario debiesen tener en cuenta las precauciones que acabo de señalar. Es decir, que un sistema de esta naturaleza conviva con un sistema electoral que desestimula la competencia, y que la participación pueda estar determinada por las condiciones socioeconómicas de la gente. Como sostuve más arriba, parece al menos osado combinar voto voluntario con un sistema de partidos escasamente competitivo. Si la gente no va a votar en este ambiente político incluso estando inscrita (la abstención ya está por sobre el 13%), menos lo hará si el voto es voluntario.

De igual forma, resulta contraproducente profundizar los males que actualmente tiene nuestro régimen electoral. Es decir, que los ciudadanos con mayores recursos asistan a votar en mayor medida que los más pobres. Como he señalado, esta desigualdad ya se produce con el régimen electoral actual. No veo razón para seguir agudizando un problema de esta naturaleza. Al final de cuentas, las decisiones políticas pasarán, al igual que las decisiones económicas, por los grupos con más recursos. Esto no le hace bien a nuestro sistema político y, peor aún, daña fuertemente la democracia.

Referencias

- ALTMAN**, David, y Aníbal Pérez-Liñán. 2002. "Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness, and Participation in 18 Latin American Countries", *Democratization* 9 (2):85-100.
- ALTMAN**, David. 2009. "The Unpredicted Impact of Political Competence on Electoral Participation: The Case of Latin American Presidential Races", manuscrito.
- BLAIS**, André. 2006. "What Affects Voter Turnout?", *Annual Review of Political Science* 9: 111-125.
- BLAIS**, André y Agnieszka Dobrzynska. 1998. "Turnout in Electoral Democracies", *European Journal of Political Research* 33 (2): 239-262.
- BLAIS**, André y Robert A. Young. 1999. "Why Do People Vote? An Experiment in Rationality", *Public Choice* 99 (1-2): 39-55.
- CARLIN**, Ryan. 2006. "The Decline of Citizen Participation in Electoral Politics in Post-Authoritarian Chile", *Democratization* 13 (4): 632-651.
- CHONG**, Alberto y Mauricio Olivera. 2005. "On Compulsory Voting and Income Inequality in a Cross-Section of Countries", working paper 533, BID, departamento de investigación.
- CHUAQUI**, Tomás. 2007. "Participación electoral obligatoria: una defensa", en *Modernización del régimen electoral chileno*, editado por Arturo Fontaine, Cristián Larroulet, José Antonio Viera-Gallo e Ignacio Walker. PNUD-CEP-Libertad y Desarrollo-Proyectamérica-Cieplan: Santiago, pp. 183-204.
- CORVALÁN**, Alejandro y Paulo Cox. 2010. "When Generational Replacement is Class. Biased: Chilean Turnout (1989-2008)", manuscrito.
- DAHL**, Robert. 1971. *Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- FORNOS**, Carolina A., Timothy J. Power y James C. Garand. 2004. "Explaining Voter Turnout in Latin America, 1980 to 2000", *Comparative Political Studies* 37 (8): 909-940.
- GEYS**, Benny. 2006. "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research", *Electoral Studies* 25 (4): 637-663.
- GOERRES**, Achim. 2006. "Why are Older People More Likely to Vote? The Impact of Ageing on Electoral Turnout in Europe", *British Journal of Politics and International Relations* 9: 90-121.
- HUNEEUS**, Carlos. 2004. "No al voto voluntario". Santiago. *Asuntos Públicos*. Informe número 397 de Política Nacional.
- HUNEEUS**, Carlos. 2005. "Sí al voto obligatorio", en *Voto ciudadano: Debate sobre la inscripción electoral*, editado por Claudio Fuentes y Andrés Villar. Santiago: FLACSO, pp. 103-108.
- JACKMAN**, Robert. W. 1987. "Political Institutions and Voter Turnout in the Industrial Democracies", *American Political Science Review* 81: 405-423.
- LEVINE**, Daniel y José Molina. 2007. "La calidad de la democracia en América Latina: Una visión comparada", *América Latina Hoy* 45: 17-46.
- LIJPHART**, Arend. 1997. "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma", *American Political Science Review* 9 (1): 1-14.
- LUNA**, Juan Pablo. 2010. "Segmented Party Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI", *Journal of Latin American Studies* 42: 325-356.
- MADRID**, Sebastián. 2005. "¿Políticos de ayer, apáticos de hoy? Generaciones, juventud y política en Chile", en *Voto ciudadano: Debate sobre la inscripción electoral*, editado por Claudio Fuentes y Andrés Villar. Santiago: FLACSO, pp. 45-84.
- MASSOUD**, Nicole. 2010. "Financiamiento político: la influencia del gasto sobre el éxito electoral en las campañas de diputados 2005-2009", tesis para optar al grado de licenciado en Ciencia Política, Universidad Diego Portales.
- MORALES**, Mauricio y Rafael Piñeiro. 2010. "Gasto en campaña y éxito electoral de los candidatos a diputados en Chile 2005", *Revista de Ciencia Política*, por aparecer.
- MORALES**, Mauricio; Carlos Cantillana y Julián González. 2010. "Participando con voto voluntario: efecto de la edad, del nivel socioeconómico y de la identificación política", en informe de Encuesta Nacional UDP 2009, *Chile 2009: actitudes y percepciones sociales*, pp. 39-48.
- MORGAN**, Jana. 2007. "Partisanship During the Collapse of Venezuela's Party System", *Latin American Research*

Review 42 (1): 78-98.

MUELLER, Dennis C. y Thomas Stratman. 2003. "The Economic Effects of Democratic Participation", *Journal of Public Economics* 89 (7): 2129-2155.

POWER, Timothy y James Garand. 2007. "Determinants of Invalid Voting in Latin America", *Electoral Studies* 26 (2): 432-444.

PRZEWORSKI, Adam. 1991. *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. New York: Cambridge University Press.

SIERRA, Lucas. 2007. "El voto como un derecho: una cuestión de principios", en *Modernización del régimen electoral chileno*, editado por Arturo Fontaine, Cristián Larroulet, José Antonio Viera-Gallo e Ignacio Walker. PNUD-CEP-Libertad y Desarrollo-Proyectamérica-Cieplan: Santiago, pp. 157-182.

VALENZUELA, Samuel. 2004. "¿El voto voluntario fortalece o debilita la democracia?". *Asuntos Públicos*. Informe número 399.

Justicia y opinión pública

RODRIGO HERNÁNDEZ

Por segundo año consecutivo, la Encuesta Nacional UDP reveló interesantes percepciones de los chilenos en torno a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1973-1990). Los períodos en que se realizaron las mediciones corresponden a dos estadios distintos: en 2009 el escenario político era muy cercano a las elecciones presidenciales. En 2010, mientras tanto, ya gobernaba el actual presidente Sebastián Piñera, representando al conglomerado de derecha, por primera vez, desde el retorno a la democracia.

En este artículo exponemos los resultados de ambos momentos e intentamos problematizarlos a partir del estado de los juicios de derechos humanos, que aún se mantienen activos en el país¹.

Estado de los juicios

Resulta necesario contextualizar el escenario actual de las violaciones de derechos humanos. Y si bien una mirada sobre el estado de la justicia no debe reducirse a un problema numérico, las cifras que citamos a continuación constituyen un buen indicador de la situación judicial en Chile. Ello permite integrar a este análisis un panorama de la realidad y así evaluar si la opinión pública se hace o no cargo de ella.

Hoy existen 456 causas activas en Chile. Ellas representan al 40% de las 3.185 víctimas de ejecución política y desaparición forzada reconocidas por el Estado chileno. De éstas, un 7% logró finalizar su causa en los tribunales de justicia, aunque cabe señalar que el fin del proceso no implica, necesariamente, una sanción.

De aquellas víctimas reconocidas por el Estado (3.185) existe un 53% que no ha tenido causa abierta en cortes chilenas. Por esa razón, durante el año 2010 la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) comenzó un proceso de presentación de querellas. Se pretende, de esta manera, sumar 1.000 víctimas con causa activa.

Existen 786 agentes involucrados en juicios de derechos humanos desde el año 2000 en adelante. De ellos, 568 se encuentran en proceso, esperando la culminación de sus juicios. Asimismo, 147 agentes están condenados pero en libertad, ya sea por aplicación de beneficios o

¹ La investigación sobre el estado actual de las causas judiciales de derechos humanos es parte del permanente trabajo del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Éste ha desarrollado una labor sistemática en los últimos dos años respecto de las violaciones a los derechos fundamentales, buscando ser un aporte académico para la sociedad. Uno de los principales productos es un buscador de causas de derechos humanos *online*, donde se pone a disposición del público información de procesos judiciales de manera sistematizada y, al mismo tiempo, con un lenguaje que permita ampliar el entendimiento de tales causas. En la página web www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos, asimismo, se encuentran noticias actualizadas para Chile y países del Conosur, además de una serie de documentos de análisis (manual de leyes, historias judiciales, etc.).

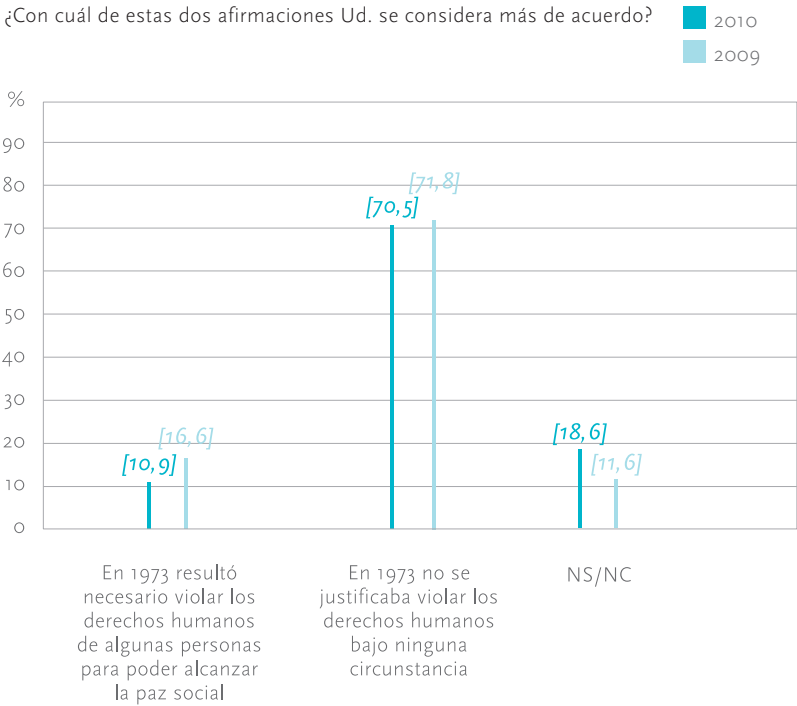
(los menos) por haber cumplido la sentencia. Hoy, sólo 71 agentes se encuentran cumpliendo pena efectiva de cárcel, principalmente en penales especiales como Punta Peuco o Cordillera. En suma, 218 agentes han sido condenados por tribunales civiles².

2 Las estadísticas utilizadas corresponden a una elaboración propia con la base de datos del Observatorio de Derechos Humanos UDP y con estadísticas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Las cifras se encuentran actualizadas a diciembre de 2010.

Resultados de la Encuesta Nacional UDP

Según los datos de los años 2009 y 2010, se mantiene la opinión generalizada de que no se justificaba violar los derechos humanos en 1973 (71,8% y 70,5%, respectivamente). Asimismo, se observa una disminución porcentual -en poco más de seis puntos- de la proporción de personas que cree que sí fue necesario violar los derechos humanos en virtud de la paz social.

Gráfico 1



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

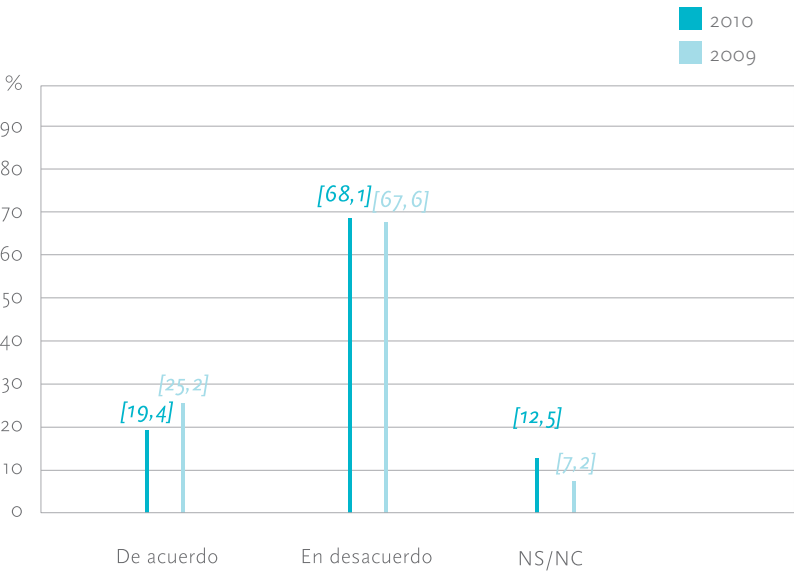
Estos resultados son concordantes con lo expresado por los encuestados sobre el valor de los derechos humanos. En efecto, ante la afirmación “en algunas ocasiones es preferible que las autoridades violen la ley, a fin de garantizar la seguridad de las personas”, el porcentaje de quienes estaban de acuerdo disminuyó de un 25,2% en 2009 a un 19,4% en 2010.

Por otra parte, es interesante constatar que existe una menor proporción de encuestados (10,9%) que, en virtud de la paz social, considera como necesarias las violaciones a los derechos humanos cometidas en 1973, respecto a la cuota de personas que está de acuerdo con que en algunas ocasiones es preferible que las autoridades violen la ley a fin de garantizar la seguridad de las personas (19,4%). Probablemente, la explicación de esta diferencia sea imputable al hecho que esta segunda pregunta es más abstracta, en tanto la primera está referida a los su-

cesos específicos de 1973. Así, la disposición a validar violaciones a los derechos humanos sería mayor a la aprobación efectiva que se le otorga cuando se cita una circunstancia específica.

Gráfico 2

En algunas ocasiones, es preferible que las autoridades violen la ley a fin de garantizar la seguridad de las personas



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Podríamos aventurar, entonces, que de la población que se muestra favorable a prácticas de privación de derechos en virtud de la seguridad de las personas, existe un porcentaje mayor que se muestra a favor de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Está claro que se ha logrado sensibilizar a la población y, además, inculcar un rechazo mayoritario a los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, consideramos importante analizar el valor general de los derechos humanos: el respeto por la libertad y la vida de las personas.

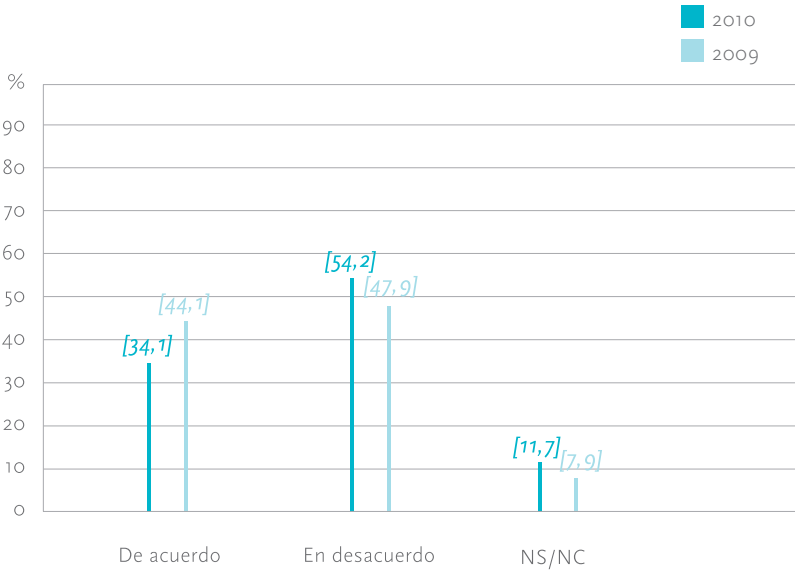
Estar en contra de las violaciones a los derechos humanos puede ser consecuencia de profesar valores o principios democráticos. Pero también puede ser una opinión políticamente correcta. Ambas alternativas son relevantes y valorables para la construcción democrática. Pero creemos que es importante ver si existe un aprendizaje de lo vivido durante la dictadura a nivel ético y moral para las personas y las instituciones.

Lo anterior nos llevó a estudiar las percepciones en torno a valores generales sobre derechos humanos. Ante la afirmación “cuando un policía sorprende a un delincuente cometiendo un delito se justifica el uso de la violencia”, que sitúa al entrevistado en un escenario de vulnerabilidad personal respecto de un tema (la delincuencia) bastante sensible en el Chile de hoy, la respuesta es más polarizada que las anteriores. Así, se observa que el grado de aprobación del uso de la violencia policial ante un delito disminuyó significativamente desde un 44,1% en 2009 a un 34,1% en 2010.

Si bien existe una reducción importante, hipotéticamente consideraremos que, cuando se lleva al plano personal un cierto valor (como el respeto por los derechos de las personas), los chilenos se muestran más abiertos a tolerar ciertas prácticas de represión física contra otra persona clasificada como “enemigo”.

Gráfico 3

Cuando un policía sorprende a un delincuente cometiendo un delito se justifica el uso de la violencia



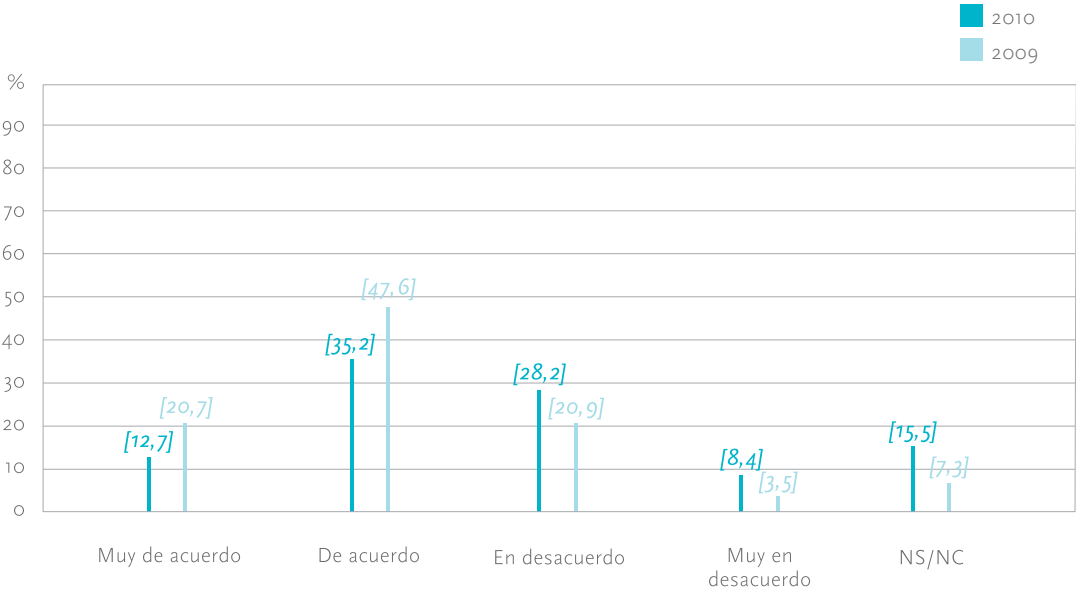
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Hablamos de los valores generales de los derechos humanos como una forma de problematizar el aprendizaje que, como sociedad, hemos adquirido a propósito de lo sucedido durante la dictadura militar. Sin embargo, como lo mencionamos al inicio de este trabajo, sabemos que aún existen juicios y que una importante proporción de víctimas todavía no tiene causas abiertas o causas con sentencia definitiva. Asimismo, el número de agentes procesados por tribunales de justicia pareciera ser menor respecto a los alcances de la represión del Estado.

En esta línea, consultamos sobre los juicios y el futuro de éstos. Podemos apreciar que los resultados de ambos años presentan diferencias importantes: durante 2009 existía un 68,3% de los chilenos que estaba “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que se debían cerrar los juicios de derechos humanos, mientras que en 2010 esa cifra disminuyó al 47,9%.

Gráfico 4

Chile requiere cerrar los casos de violaciones a los derechos humanos y mirar hacia el futuro



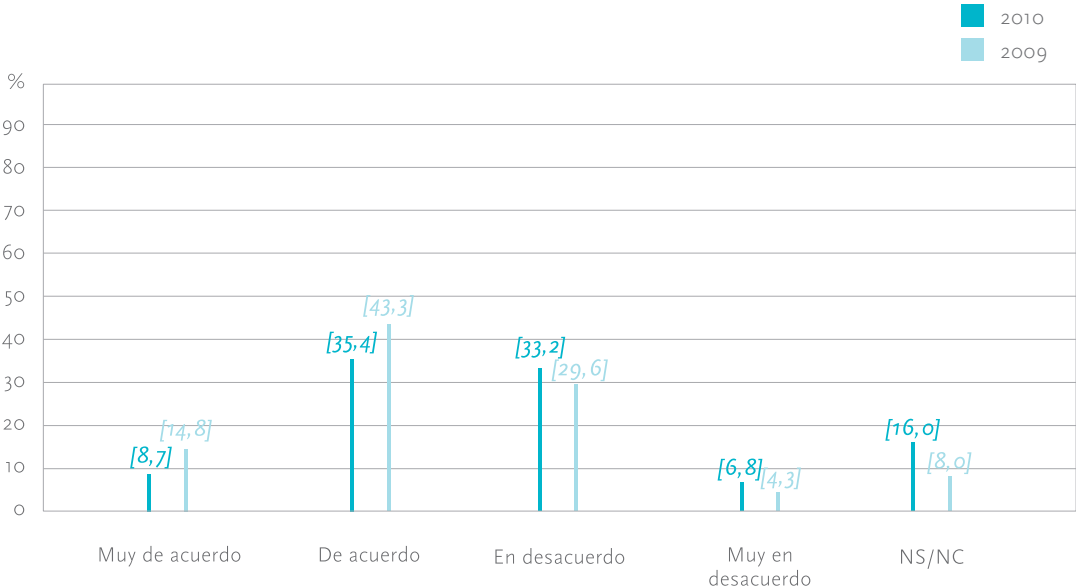
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Cuando se dice que “Chile requiere cerrar los casos de violaciones a los derechos humanos y mirar hacia el futuro” se asume un procedimiento de cierre que no es explicitado. Ello se puede entender como la finalización de los procesos abiertos siguiendo las instancias judiciales pertinentes, o bien que se institucionalice una suerte de “punto final” mediante instancias políticas y no judiciales.

”Juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos sólo ayuda a aumentar el odio entre los chilenos”, es otra de las afirmaciones sometidas a evaluación en la Encuesta Nacional UDP 2010, donde el grado de acuerdo disminuye respecto a 2009. Para este último año, la suma de las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” resultó en un 58,1% de aprobación, mientras que para 2010 fue de 44,1%. Además, observamos que el grado de desacuerdo aumenta en 6,1 puntos porcentuales (2009: 33,9% y 2010: 40,0%).

Gráfico 5

Juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos sólo ayuda a aumentar el odio entre los chilenos



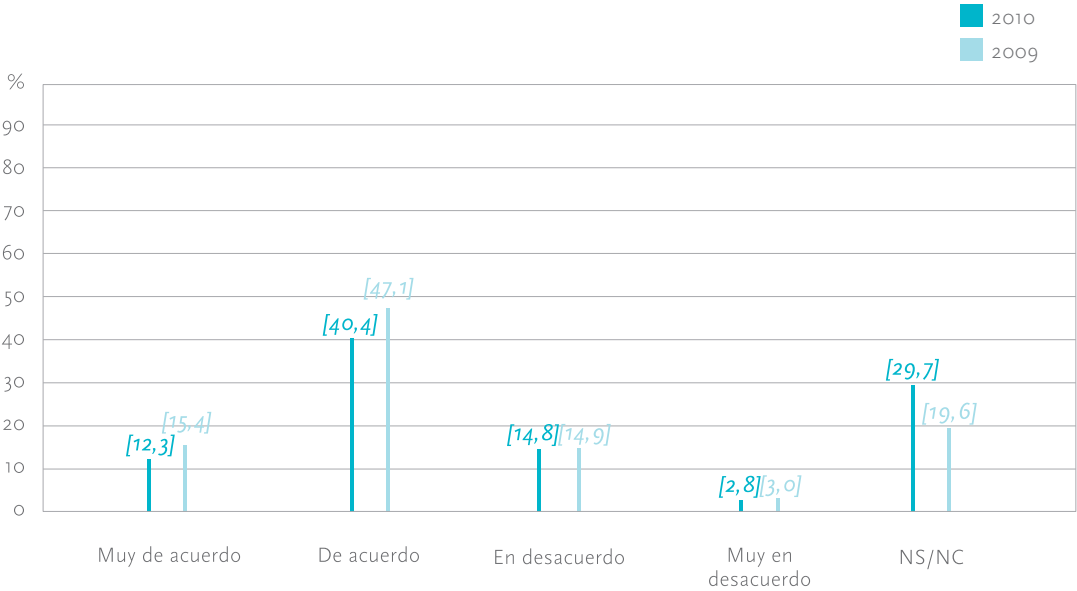
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

El hecho de considerar que juzgar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos es aumentar el odio, no necesariamente implica, al mismo tiempo, estar en contra de seguir con los juicios. Es perfectamente posible que un porcentaje de chilenos esté a favor de juzgar a los responsables pese a considerar que esto aumenta el odio entre los chilenos.

Al consultar sobre el acuerdo o desacuerdo respecto a la frase “las Fuerzas Armadas saben dónde están los cuerpos de los desaparecidos pero no quieren entregar la información”, se esperan resultados desde la opinión y no desde la certeza. Ello, pues no existen datos validados masivamente que indiquen que la afirmación es correcta. Quizás precisamente eso explique por qué, en ambos años, un porcentaje importante de los encuestados se inclina por no dar una respuesta (2009: 19,6% y 2010: 29,7%). Es prudente remarcar que el porcentaje de personas que se manifiesta en contra de esta afirmación es más bien bajo, alcanzando el 14,8% en 2010 y el 14,9% en 2009.

Gráfico 6

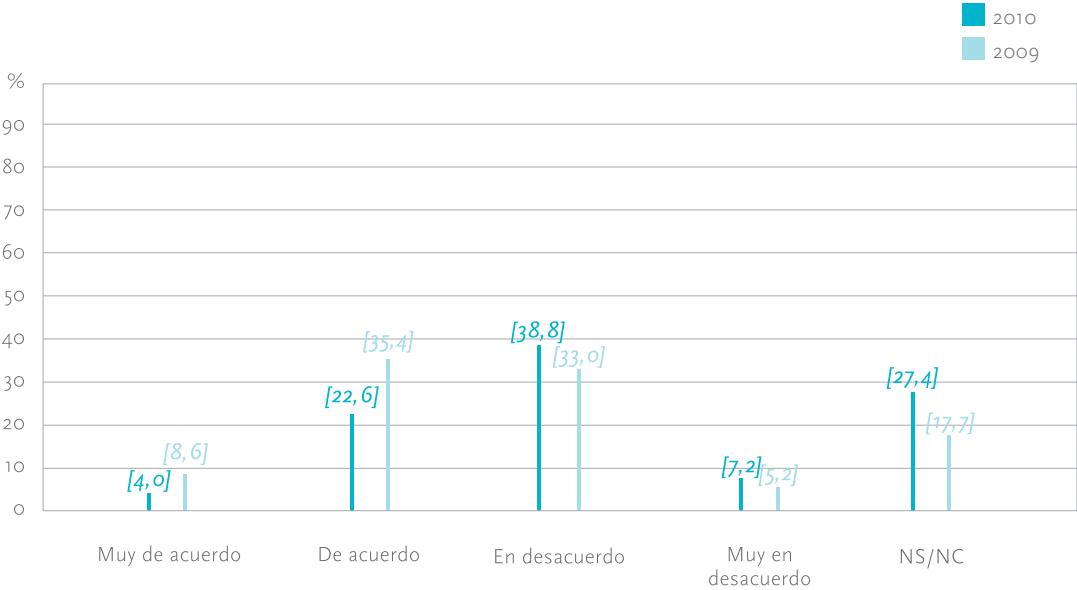
Las Fuerzas Armadas saben dónde están los cuerpos de los desaparecidos pero no quieren entregar la información



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Gráfico 7

Los juicios contra los militares son una revancha de los políticos



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

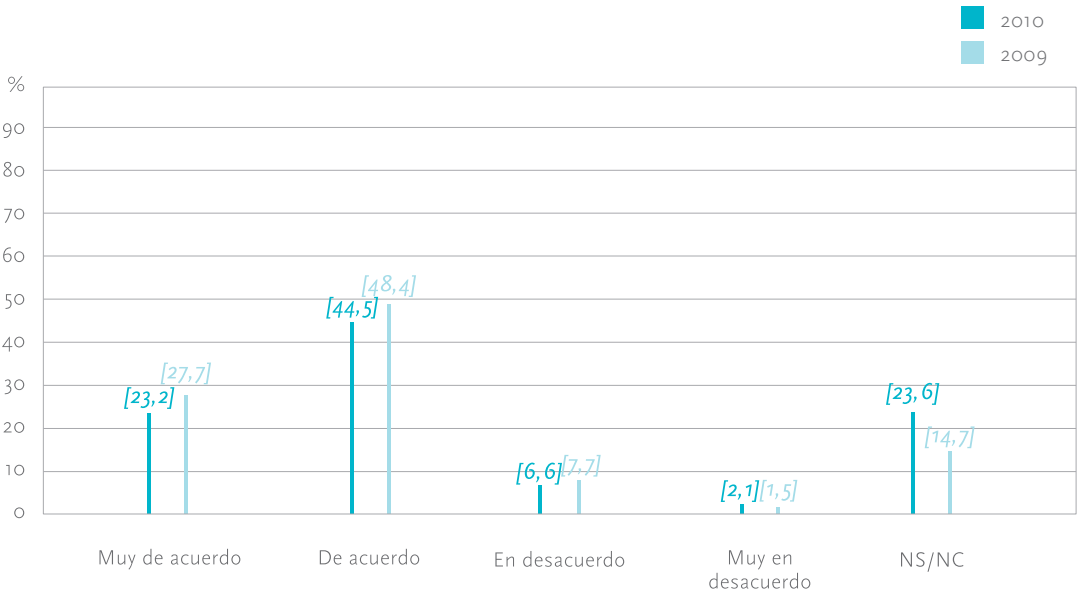
La valoración de los juicios puede tener diferentes aristas. Uno de los indicadores utilizados fue la respuesta frente a la afirmación que “los juicios contra los militares son una revancha de los políticos”. Durante 2009 -donde la elección presidencial que se avecinaba ciertamente ayudaba a polarizar las opiniones- un 44% declaró estar de acuerdo y un 38,2% en desacuerdo. Sin embargo, en 2010 los resultados varían considerablemente: el porcentaje de abstención a contestar aumenta casi 10 puntos porcentuales, mientras que el grado de acuerdo (categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo”) baja a un 26,6%.

En el ámbito político y social podemos apreciar que aún existe una cuota importante de personas que defiende la obra de la dictadura militar y, además, que niega o justifica las violaciones a los derechos humanos. En este contexto, es pertinente recordar que dos parlamentarios -a propósito de los beneficios que supuestamente el gobierno daría a los presos mapuche durante la extensa huelga que ellos sostuvieron en 2010- solicitaron de manera pública que también se les otorgaran beneficios a los militares detenidos por crímenes de derechos humanos.

Aunque la valoración positiva del legado de la dictadura ha decaído a nivel general en los últimos años ¿qué sucede con Augusto Pinochet? Su imagen pública se vio afectada por los atropellos a los derechos humanos en un primer momento, sin embargo, creemos que los delitos ligados a temas económicos han hecho decaer su imagen aún más.

Gráfico 8

El general Pinochet siempre supo de las violaciones a los derechos humanos



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

En 2010, un 67,7% de los encuestados se muestra de acuerdo o muy de acuerdo respecto a la afirmación “el general Pinochet siempre supo de las violaciones a los derechos humanos”, mientras que sólo un 8,7% manifiesta algún grado de desacuerdo con dicha afirmación. ¿Hubiese sido posible que hace diez años se obtuvieran resultados como éstos? Ciertamente no contamos con la herramienta estadística ni el instrumento metodológico para contrastar datos. Sin embargo, sostenemos que existe un cambio en la opinión de los chilenos respecto de este tema en el último tiempo y que se debe, principalmente, a la permanente insistencia en los juicios que han tenido familiares, abogados, agrupaciones y otras instancias.

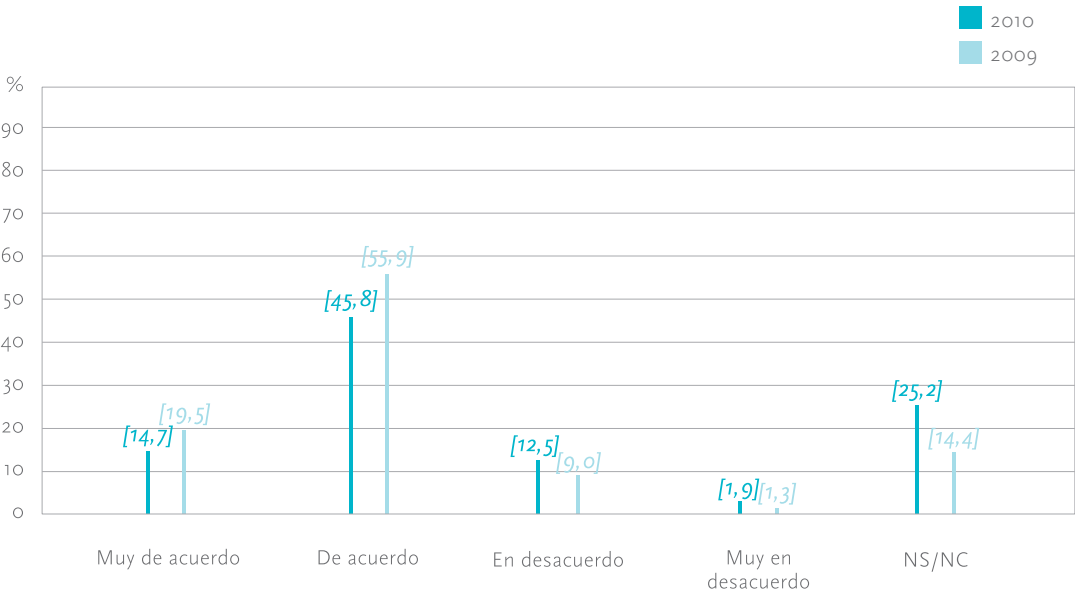
Aún más atractivo resulta analizar la responsabilidad que le asignan los chilenos a los civiles involucrados en la dictadura. En 2009, más del 75% de los chilenos estaba de acuerdo con la responsabilidad de civiles en las violaciones a los derechos humanos. En 2010, un 60,5% lo está, mientras que el porcentaje de desaprobación a esta afirmación es bastante menor, alcanzando un 14,4% en 2010.

3 Ver documento “Agentes condenados cumpliendo pena de cárcel,” en www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos.

Una vez más la opinión de los chilenos nos sorprende. En relación con la información que aporta el gráfico 9, debemos considerar que sólo son dos los civiles cumpliendo pena efectiva de cárcel³ por juicios de derechos humanos. Se trata de personas que actuaron de manera directa en los métodos represivos de la dictadura.

Gráfico 9

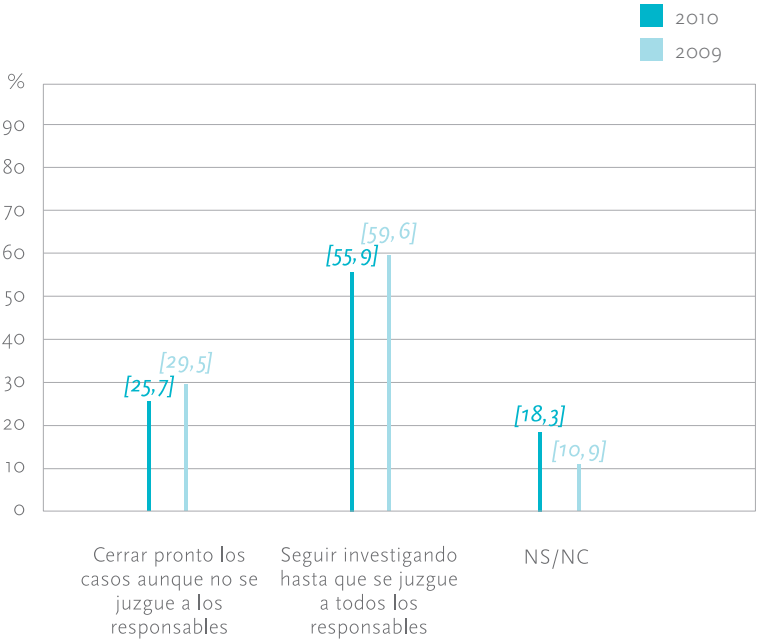
Los civiles que participaron en el gobierno militar también son responsables por las violaciones a los derechos humanos



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Gráfico 10

¿Con cuál de estas opciones se siente más de acuerdo?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2009 y 2010.

Al preguntar acerca de lo que debe pasar con los juicios de derechos humanos, encontramos un porcentaje mayoritario (2010: 55,9%) que piensa que se debe investigar hasta encontrar a todos los responsables. También existe un 25,7% de encuestados que cree que se deben cerrar los casos aunque no se juzgue a los responsables y un 18,3% que prefiere no contestar esta pregunta.

A modo de conclusión

A través del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional UDP de los años 2009 y 2010, hemos intentado entregar un mapeo general de los juicios y de la percepción que tienen los chilenos respecto al tema de derechos humanos en el país.

Los datos nos ayudan a argumentar ciertas conclusiones que el Observatorio de Derechos Humanos ha trabajado e investigado. La primera de ellas, referente a los juicios, es que ciertamente éstos ayudan a establecer una verdad jurídica de lo sucedido durante la dictadura y, particularmente, con las víctimas que cada juicio incorpora. Asimismo, pensamos que los juicios han ayudado a establecer una verdad social respecto de los alcances de la represión en Chile. Por ejemplo, a determinar y finiquitar que lo vivido entre 1973 y 1989 sí fue una política del Estado de Chile en contra de un sector de la población que se consideró como “enemigo”.

Hoy resulta imposible sostener que los delitos cometidos fueron actos aislados perpetrados por personas (militares o civiles) que no obedecían a una institucionalidad creada y mantenida para dicho objetivo, como fue la persecución, secuestro, tortura y desaparición. El fallo de la Corte Suprema respecto del homicidio de los hermanos Vergara Toledo

4 Ver fallo Corte Suprema de los hermanos Vergara Toledo, www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos.

es significativo y ejemplificador en ese sentido: "(...) las acciones deben ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, cuestión que aparece suficientemente demostrada en los antecedentes, si se tiene en cuenta que el gobierno militar llevó adelante una persecución sin tregua contra todos aquellos que eran militantes del Partido Comunista, del Movimiento de Izquierda Revolucionario y varios otros más, decisión explicitada en el mismo artículo octavo de la Constitución y al que antes se aludió"⁴.

Existe, entonces, una verdad jurídica que también ayuda a establecer una verdad social. Pero creemos que no ha existido un aprendizaje institucional de parte del Estado de Chile respecto del tema, pues los avances que se han obtenido en los juicios de derechos humanos encuentran su justificación más en la audacia, persistencia y tenacidad de los abogados y familiares y en una buena disposición de los tribunales para juzgar, que como producto de un proceso de avances institucionales generalizados.



SEGUNDA PARTE

SOCIEDAD

La estructuración política del gusto¹

MODESTO GAYO

¹ Este estudio se hizo en el marco del proyecto Fondecyt 1100523, titulado “La desigualdad cultural y sus determinantes. Un estudio sobre el gusto y la participación cultural en Chile”.

Introducción

Si hay una tesis que ha sido ampliamente demostrada en los estudios sobre participación y gusto culturales, es la que propone la existencia de un vínculo estrecho y positivo entre posición socioeconómica y práctica cultural (Gayo et al., 2009; Gayo y Teitelboim, 2008; Bennett et al., 2010; entre muchos otros). En otras palabras, cuanto mayor es el capital cultural y económico de una persona, más sofisticado y/o intelectualmente exigente es su desempeño cultural. Ésta es la célebre tesis de la homología entre cultura y estructura.

Sin embargo, independientemente de que la evidencia empírica muestra, una vez tras otra, la validez de esa afirmación, es necesario reconocer que es posible hacer más extensa la idea de estructura. Y eso en un sentido muy preciso: no es posible pensarla únicamente como una estructura de capitales, tal como lo hizo Bourdieu (1979), sino que es igualmente factible denotar las bases políticas sobre las cuales las prácticas se producen. En definitiva, si hacemos caso a la idea de la “distinción”, no tratándose de mera diferenciación, sus consecuencias son políticas, o tienen que ver con una especie de autorregulación del orden social por la vía de las asimetrías de mérito colectivamente significadas o reconocidas. No en vano, si nuestras prácticas son signos y significan, han sido muy frecuentemente utilizadas para decir sin decir, o para hacerle llegar a los “otros” nuestros acuerdos o desacuerdos, nuestras filias y fobias, entre ellas las políticas. Así sucedía con los punks y los metaleros en los años 80, y lo mismo ha ocurrido con muchas otras expresiones culturales a lo largo de la historia.

En este estudio mostramos cómo en Chile los gustos están efectivamente asociados a posiciones políticas bien delimitadas. En otros términos, los chilenos expresan sus planteamientos políticos a través de sus preferencias culturales. Esto significa que los gustos no son sólo el producto de un conflicto dinámico que tiene como base el orden clasista de una sociedad. Son también expresiones de una problematización donde lo que está en juego no es la posición de clase, sino un orden colectivo, independiente que de éste se derive una nueva forma de estructura de clase. Esto último puede o no darse, pues no siempre la clase será el centro de las tensiones sociales. En definitiva, las preferencias culturales pueden ser a menudo las expresiones de posiciones políticas, siendo el cuerpo de éstas variado, tanto en lugar como en el tiempo.

Nota metodológica

El estudio de la relación entre cultura y política tiene dos partes. Por un lado, hemos utilizado el posicionamiento político que los encuestados declaran, lo que nos permite disponer de una distribución con cuatro alternativas posibles: izquierda, centro, derecha y ninguno. Sin excluir que cada una de ellas pueda tener sus particularidades, nos centramos en la primera y la tercera de las posibilidades, pues tanto la comprensión tradicional del mundo político en gran parte de los países modernos, como los patrones que obtuvimos al analizar los datos, nos invitan a ello. Esa es la razón por la que nuestro espectro político quedará reducido a las categorías de “izquierda” y “derecha”.

Por el lado de la cultura, también fue necesario adoptar un conjunto de decisiones. En primer lugar, se optó por crear un módulo de preguntas en la encuesta que hicieran referencia a personas, artistas o grupos concretos. En algunos casos también a obras de teatro o películas particularmente emblemáticas (*La negra Ester*, *La pérgola de las flores*) o recientes (*Machuca*, *El chacotero sentimental*), según el caso. Esta estrategia metodológica buscó indagar sobre la relación entre posturas políticas y patrones culturales, vínculo sobre el cual hay un amplio silencio en la literatura internacional. Lo anterior es, en buena medida, porque hasta ahora los cuestionarios sobre consumo cultural y uso del tiempo libre, tal y como sucede en Chile, se aproximan al estudio de la cultura desde los géneros o expresiones culturales, y no desde casos concretos.

En segundo lugar, se pregunta sobre ejemplos ampliamente conocidos en el país. Ello, puesto que el objetivo no era acercarse a la cultura de elite -como lo fue en el caso bourdieuano-, sino estudiar divisiones dentro de lo masivo, si es que éstas existían. En tercer lugar, fueron incluidos un conjunto heterogéneo de ítems, para evitar que los patrones observados no dependieran solamente de lo que sucedía en un único ámbito cultural, como pudiera ser la música². De este modo, se espera que los resultados tengan un carácter más generalizable.

A los encuestados se les preguntó sobre un conjunto de cantantes, grupos musicales, películas, obras de teatro, escritores, políticos y otras personas conocidas del mundo del espectáculo, tales como actores y futbolistas. Las preguntas se hicieron en el formato de escalas *likert* con valores entre 1 y 7, refiriéndose el menor valor a “no me gusta nada” y el mayor a “me gusta mucho”. En todos los casos, se trató de personas o producciones chilenas.

El examen de los datos se realizó mediante el uso de la técnica de análisis de correspondencias múltiples. Ésta nos permite estudiar pautas de asociación entre una gran cantidad de variables categóricas³. En sentido estricto, lo que se estudia es la proximidad relativa entre categorías de variables, lo que en su conjunto genera un mapa de clasificaciones conocido frecuentemente como “espacio social”.

² El listado completo de las preguntas del módulo sobre consumo cultural de la Encuesta Nacional UDP 2010 puede encontrarse en www.encuesta.udp.cl.

³ Ejemplos de uso de este procedimiento son Savage et al. (2005), Gayo-Cal et al. (2006), Gayo et al. (2009a). En los dos primeros se estudia el caso británico, y en el último es examinado el caso chileno.

La asociación entre gustos

En Chile, los patrones de vínculo entre los ítems culturales previamente mencionados son bien evidentes. Basta con examinar con atención el gráfico 1 para observar pautas de relación muy claras. ¿Cuáles son éstas? Primero, el espacio social de los gustos está dividido entre gustos y aversiones. De acuerdo al eje 1, que es el que más inercia o varianza explica (sobre un 28%), en el lado derecho tenemos todos los “no me

gusta”, sin excepción alguna. Por el contrario, en el lado izquierdo del mismo eje se encuentran todos los “me gusta”. En consecuencia, gustos y “disgustos” culturales parecen no mezclarse.

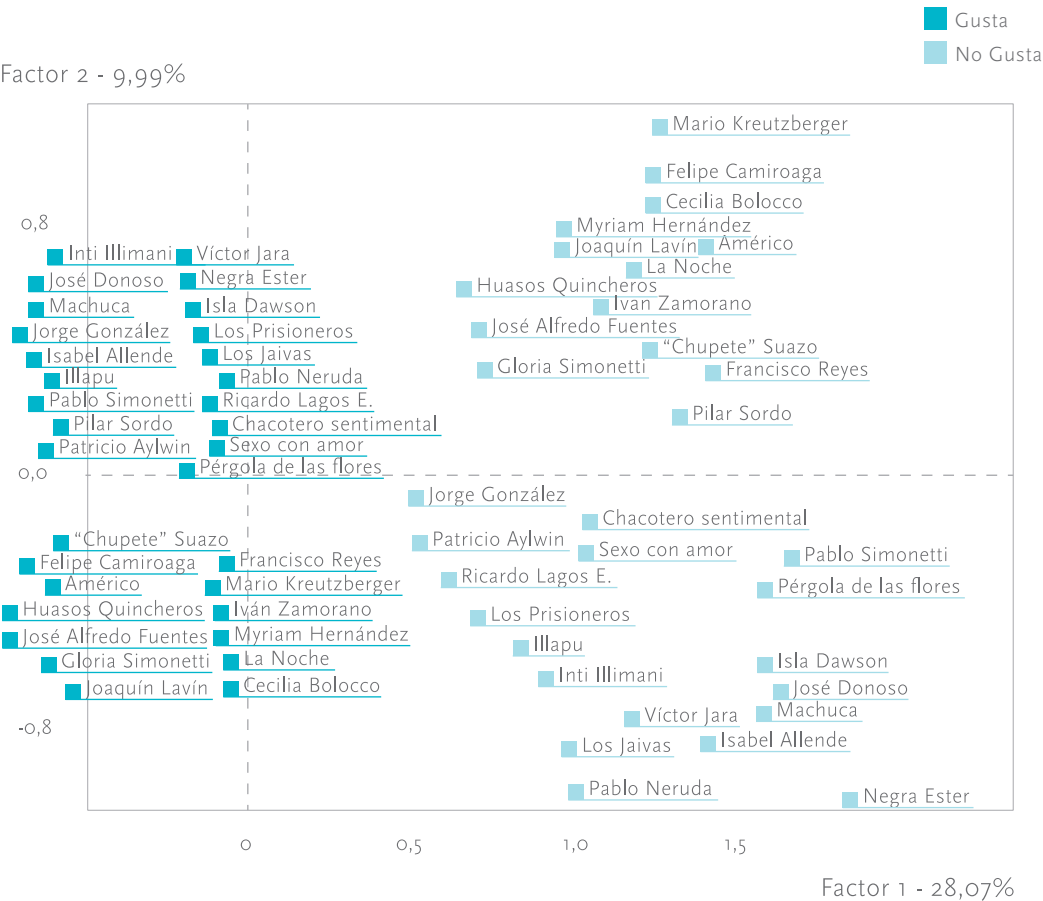
Lo anterior puede ser observado cuando se estudian las correlaciones entre las escalas con las que se midió originalmente la preferencia de los encuestados, según los ítems aquí examinados. En todos los casos, hallamos una correlación positiva entre ellos, lo cual parecería bastante sorprendente, pero cuya razón de ser quedará clara a la luz de los análisis que presentaremos en la sección siguiente. En definitiva, si me gusta algo tenderé a tener una orientación positiva hacia todo lo demás antes que a su rechazo. Y sucederá lo inverso si muestro aversión por las opciones ofrecidas.

Si atendemos a los gustos y a la división en torno a los mismos, resulta imprescindible estudiar el eje 2 del gráfico 1. Aquí se observa perfectamente cómo hay una gran fragmentación en dos grandes grupos. Por un lado, están los que se sienten relativamente más próximos de los grupos Inti Illimani, Illapu, Los Jaivas y Los Prisioneros; los cantantes Víctor Jara y Jorge González; los escritores José Donoso, Isabel Allende, Pablo Simonetti, Pablo Neruda y Pilar Sordo; los políticos Patricio Aylwin y Ricardo Lagos Escobar; las películas *Machuca*, *Isla Dawson*, *El chacotero sentimental* y *Sexo con amor*; la obra teatral *La negra Ester*; y, finalmente, el musical *La pérgola de las flores*. Por otro lado, encontramos a un grupo también numeroso, y son los que prefieren a los grupos musicales Los Huasos Quincheros y La Noche; los cantantes Gloria Simonetti, Myriam Hernández, José Alfredo Fuentes y Américo; los futbolistas Humberto “chupete” Suazo e Iván Zamorano; los animadores de televisión Mario Kreutzberger (don Francisco), Felipe Camiroaga y Cecilia Bolocco, y, por último, el político Joaquín Lavín.

Esta imagen de asociación entre gustos es idéntica, si bien invertida, a la de los ítems que observamos en el gráfico 1 que relaciona los “no me gusta”. Como indicábamos antes, los cuadrantes superior e inferior del lado izquierdo del gráfico son como un espejo volteado de lo que sucede en su parte derecha, sin excepción alguna.

Gráfico 1

Espacio social de los gustos culturales



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

La estructuración política de los gustos

¿Por qué se da la asociación mencionada entre gustos y aversiones?
¿Cómo podemos entender los patrones identificados? Para esto hay varias respuestas posibles que funcionan de forma complementaria, y que tienen que ver tanto con cuestiones de método o medición, como con temas teóricos o explicativos.

La parte que tiene que ver con el método es fundamental pues explica, muy probablemente, lo que sucede en el eje 1. Para entender este punto conviene prestar atención a la estructura del espacio social que mostramos en el gráfico 2. Aquí tenemos un cruce ortogonal de dos variables, posicionamiento político y edad⁴. Esta última está relacionada fuertemente con el primer eje. ¿Qué es lo que ello indica? Nos está mostrando que los gustos o las propensiones positivas hacia los ítems ofrecidos en el módulo de la encuesta son principalmente una orientación propia de los grupos de personas adultas de mediana edad (30-45 años) o mayores. En otras palabras, el conjunto de preguntas incluidas en el módulo aludido se refería a preferencias que no apelan directamente a las vivencias y orientaciones, es decir, a la experiencia de los jóvenes chilenos de hoy día. Esta es la razón por la cual se superponen juventud y aversión cultural. Actualmente, en la cultura juvenil del país ya no destacan Los Prisioneros, Inti Illimani y Los Jaivas, entre otros.

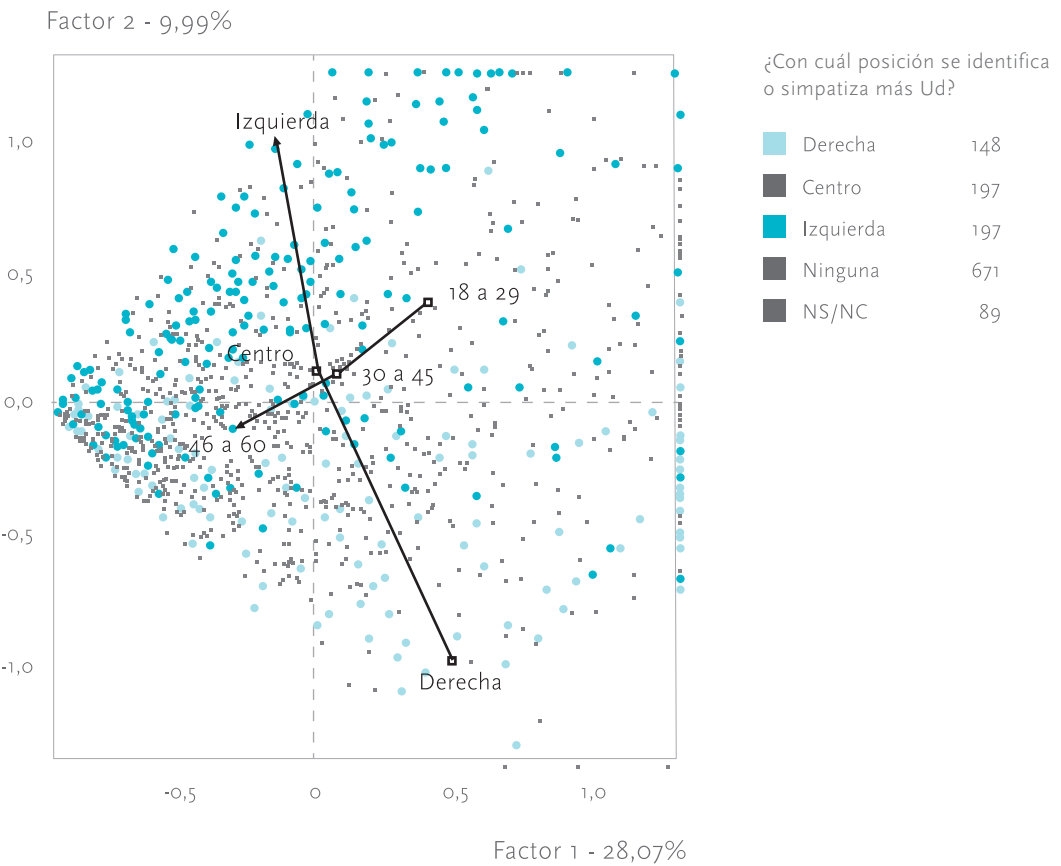
4 La importancia de la edad en los estudios que se han dedicado a investigar el consumo cultural, ha sido crecientemente subrayada (Gayo-Cal et al., 2006; Bennett et al., 2009; Gayo et al., 2009a).

Sea como fuere, los jóvenes también aparecen divididos. Para entender esto, no importa tanto que no sobresalgan por el lado de la intensidad de las preferencias, sino que es igualmente destacable que sus “disgustos” estén divididos fuertemente y de forma simétrica, aunque invertida, a como lo están los gustos. Por lo tanto, la posición política de los más jóvenes no será conocida en primer lugar por lo que les gusta, sino por lo que detestan. A modo de ejemplo, a un joven de izquierda no lo identificaremos por su alta adhesión a novelistas como Pablo Neruda, obras de teatro como *La negra Ester*, o su pasión por Víctor Jara. Sin embargo, podemos reconocerlo por su distanciamiento con respecto a José Alfredo Fuentes, Cecilia Bolocco, Los Huasos Quincheros e Iván Zamorano. Por tanto, el “no me gusta” puede decir tanto de una persona como el “me gusta”.

Además, esto quiere decir que, intergeneracionalmente, la transmisión de patrones de gustos pudiera realizarse a través de la desaprobación, y no tanto por compartir preferencias. Esto se refiere a que una generación transmite a sus herederos culturales no la misma pasión por Los Huasos Quincheros o por Myriam Hernández, sino que heredan sus aversiones. En este caso, perduraría la desaprobación de Víctor Jara, Illapu y los Inti Illimani. De forma sintética, podría funcionar el aserto “no comparto los gustos de mis padres, pero sigo molestándome por lo mismo”.

Gráfico 2

Espacio social y trayectorias de las variables posicionamiento político y edad



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional UDP 2010.

En lo que respecta al eje 2, encontramos una asociación fuerte con el posicionamiento político. De este modo, podemos decir que los gustos culturales en Chile han estado fuertemente relacionados con la adopción de posiciones políticas. Las expresiones culturales y la adhesión a las mismas tienen frecuentemente un contenido político que no debemos soslayar. En Chile, sentirse representado por la izquierda no significa sólo -o ni siquiera principalmente- votar por partidos o candidatos identificados a sí mismos con esta parte del espectro político, sino que implica de forma quizás más profunda y cotidiana tener una experiencia de vida formada por ciertos gustos y prácticas culturales. En otras palabras, disfrutar de escuchar a Inti Illimani, Illapu y Los Prisioneros; leer a Pablo Neruda e Isabel Allende; preferir a las figuras de Ricardo Lagos Escobar y Patricio Aylwin; mostrar aprobación hacia las películas *Isla Dawson*, *Machuca* y *Sexo con amor*; y, en definitiva, tener una evaluación positiva de las obras teatrales *La negra Ester* y *La pérgola de las flores* forma, en su conjunto, parte de la experiencia compartida o del acervo de la vivencia de la izquierda político-cultural chilena. En consecuencia, ser de izquierda no es sólo un acto puntual como el voto a favor de un partido de la Concertación, sino un perfil de práctica y gusto que da forma a nuestra vida cotidiana y a nuestra persona.

Obviamente lo mismo sucede con la derecha. El fenómeno se observa en los gráficos 1 y 2, en su parte inferior. El gusto asociado a esta orientación política prefiere a los presentadores Felipe Camiroaga, Cecilia Bolocco y Mario Kreutzberger; evalúa positivamente a los cantantes Américo, José Alfredo Fuentes y Myriam Hernández; es favorable a los grupos musicales La Noche y Los Huasos Quincheros; y aprueba a los futbolistas Iván Zamorano y “chupete” Suazo.

Desde el punto de vista metodológico, y en beneficio de la aportación del análisis de datos, es necesario hacer una distinción entre lo que parecería obvio al lector, y lo que es un descubrimiento “neto” producto del presente estudio. Me refiero, primero, a que cualquiera podría pensar que algunos de los ítems incluidos tenían claramente filiaciones partidistas. En la izquierda, así son los casos de los Inti Illimani, *La negra Ester*, *Isla Dawson*, Ricardo Lagos y Víctor Jara, por poner algunos ejemplos. Por su parte, en la derecha, idéntica sería la situación de Los Huasos Quincheros, Joaquín Lavín y Gloria Simonetti. En todos los casos, su situación en el espacio social de los gustos, tal y como lo hemos construido, se comporta como hubiésemos esperado y fue proyectada desde un comienzo.

Al mismo tiempo que hay encaje de los resultados dentro de nuestro universo de expectativas, también hay descubrimientos no esperados, y ni siquiera reflexionados con anterioridad. Por la izquierda, estos serían, entre otros, los casos de Pilar Sordo, *Machuca*, *El chacotero sentimental* o Los Prisioneros. Por la derecha, podrían ilustrar nuestro argumento Américo, Francisco Reyes, Felipe Camiroaga, Mario Kreutzberger y La Noche. Una vez representados en el espacio producido por el análisis de correspondencias múltiples, todo pudiera parecer evidente. Lo cierto es que previo al examen de los datos no podríamos haber concluido los patrones de fragmentación que ahora aparecen tan nítidos. En cualquier caso, ayuda a aprobar su validez el hecho de que no son contraintuitivos. Ello no obsta a que sean realizados estudios similares en el futuro y se triangulen sus hallazgos con los aquí presentados.

Antes de concluir, es importante reflexionar brevemente sobre el contenido material de los hallazgos. Esto no es ya sobre la relación entre cultura y política -que ya hemos observado-, sino sobre la naturaleza de las culturas de izquierda y derecha, tal y como fue medido con el instrumento de encuesta que está en la base del presente análisis. A este respecto, creo que hay una conclusión que es insalvable: la cultura de izquierda tiene mayor envergadura intelectual que la de derecha. Ello es así no sólo dada la impresión que produce ver los dos agrupamientos de ítems, sino que producto del análisis de datos también se hizo obvio que las personas con mayor nivel educativo, en promedio, se inclinaban fuertemente a favor de la cultura de izquierda, mientras las personas con menores niveles de educación disfrutaban más, siempre en términos relativos, de los artistas, obras y personajes de derecha.

Si bien debemos entender que lo anterior se refiere a la cultura masiva, no parece descabellado deducir que la cultura de izquierda ha sido la gran dominadora del mundo cultural chileno, si tomamos como medida su mayor legitimidad o nivel. Por su parte, la cultura masiva de derecha ha estado dedicada preferentemente al espectáculo o entretención ligera, como una forma quizás de darle esquinazo a los temas sociales, que con frecuencia han eludido. No cabe duda que la legitimidad cultural de las expresiones culturales ha sido, y seguramente seguirá siendo, motivo de discusión. Aquí lo dejamos como un tema abierto a la interpretación del lector.

Conclusión: la política es culturalmente importante

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, fue muy evidente la dimensión política de la cultura, o las implicaciones culturales de la política. Lejanas ya las apologías del “hombre nuevo” de la primera parte del siglo XX, los conocidos como “nuevos movimientos sociales” promovieron, principalmente en los países de desarrollo económico más avanzado, diversas formas de cambio cultural. Los movimientos feministas, ecologistas, antiarmamentistas, entre otros, defendieron -y todavía lo hacen- giros importantes en nuestro modo de pensar, los cuales deberían tener consecuencias prácticas de acuerdo con el motivo de lucha.

Estos conflictos, e igualmente los que han mantenido a los partidos políticos como actores principales, han tenido comúnmente una dimensión cultural relevante. Las personas no sólo muestran sus preferencias a través del voto, sino mediante todo un conjunto de comportamientos, entre los cuales los gustos y prácticas culturales de forma más genérica han sido nucleares. En este sentido, ser de izquierda no es sólo votar al Partido Comunista o al Partido Socialista, sino escuchar a Inti Illimani, Víctor Jara o Illapu. Ser de derecha no significa únicamente sufragar a favor de la UDI o RN, sino preferir a Los Huasos Quincheros o a Gloria Simonetti.

Desde los 90 en adelante la sociología vio decaer, aunque nunca desaparecer, la idea de clase. En particular cuando ésta ha sido conceptualizada desde la estructura ocupacional. Este declive se llevó por delante también la asociación entre política y cultura, pues la misma estaba mediada por la evidencia clasista. En otros términos, si la clase ya no importaba tanto para entender la política, tampoco sería tan relevante la cultura de clase. No es que la cultura dejase de importar, sino una versión de cultura o de cultura política: la cultura política de clase.

Nuestros resultados muestran cómo es todavía posible e importante pensar en culturas políticas, o en la relación entre cultura y política, sin necesitar la mediación de la idea de clase. El posicionamiento político -se produzca éste por las razones que fuere- está asociado a perfiles culturales particulares. No sería posible entender los mismos sin incorporar en nuestra explicación la variable política.

Eso quiere decir que nuestras manifestaciones culturales, individuales y colectivas, no son una mera elección individual de alternativas disponibles, sino la expresión de compromisos o adhesiones colectivas, con una connotación política innegable. Obviamente, esto no significa que cada una de nuestras elecciones sea política, aunque fuera por implicación, sino que algunas o muchas de ellas lo serán, dependiendo de los casos. Tampoco significa que siempre que optemos por una alternativa seamos conscientes de todas las consecuencias de nuestra decisión. No obstante, sería igualmente nefasto pensar que nuestros gustos y preferencias no tienen significado político, porque esto sucede con mucha frecuencia.

El espacio social de los gustos está fragmentado en el modo que hemos comentado. No obstante, ello no debe ocultar que también está integrado en torno a la edad y a los dos grandes grupos ideológicos. Dado que la política tiene que ver con los proyectos de país o sociedad, podríamos esperar que las divisiones culturales -cuya estructura encaja con una matriz política y a la cual dota de contenido (prácticas, usos, preferencias, conocimientos, valores, actitudes)- estén asimismo insertas en tradiciones identitarias que sirven a la permanente construcción y reconstrucción de los imaginarios nacionales. Es por ello que hablar de izquierda y derecha, en su dimensión cultural, no se trata sólo de hacer referencia a un momento concreto del tiempo. De forma diferente, se trata de subrayar el devenir en el tiempo de conflictos de *longue durée*. Así, la cultura no sería una decisión individual libre acotada al presente, sino un conjunto de opciones dinámicas o en evolución cargadas de significado intersubjetivo y colectivamente actualizadas a través de conflictos de naturaleza variada (de clase, generacionales, políticos) que nunca terminan. En este sentido, el gusto expresa tensiones, y es el conflicto presente en su expresión cotidiana lo que nos permite relacionarlo con lo político.

Referencias

- BENNETT**, Tony, Mike Savage, Elizabeth Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal y David Wright. 2009. *Culture, Class, Distinction*. Londres: Routledge.
- BOURDIEU**, Pierre. 1979. *La distinction*. Paris: Les éditions de minuit.
- GAYO**, Modesto, Mike Savage y Alan Warde. 2006. "A Cultural Map of the United Kingdom 2003", *Cultural Trends*, volume 15, issue 2/3, n. 58/59: 213-237.
- GAYO**, Modesto, Berta Teitelboim y Marfa Luisa Méndez. 2009a. "Patrones culturales de uso del tiempo libre en Chile. Una aproximación desde la teoría bourdieuana", *Universum*, año 24, n.º 2: pp.42-72.
- GAYO**, Modesto y Berta Teitelboim. 2009b. "Localismo, cosmopolitismo y gustos musicales", en informe de Encuesta Nacional UDP (cuarta versión), *Radiografía social, política y económica de Chile*, Santiago, Chile, año 2, n.º 2, abril: pp.111-120.
- SAVAGE**, Mike, Modesto Gayo-Cal, Alan Warde y Gindo Tampubolon (con la colaboración de Johs Jjellbrekke, Brigitte LeRoux and Henry Rouanet). 2005. "Cultural Capital in the UK: a Preliminary Report Using Correspondence Analysis", *CRESC Working Paper Series*, n. 4, agosto.

Cartografía del progresismo en el Chile actual

FRANCISCA GATICA / DAVID JOFRÉ / EMILY JUSTIN-SZOPINSKI

El traspaso de la banda presidencial a Michelle Bachelet en el 2006 -una mujer socialista, separada y secular- significó una potente transformación en los conceptos que, hasta ese entonces, dominaban la forma de entender el gobierno en Chile (Castillo, 2006). Durante su administración, no sólo se modificaron las distribuciones del poder para garantizar un mayor equilibrio de género en la política, sino también se impulsó, sobre parte de la base ideológica del progresismo, un programa de reformas que apuntaba a redefinir algunos esquemas de pensamiento heredados del pasado (Lakoff, 2004).

Resulta atractivo tomarle una fotografía a este momento, luego que ya haya concluido el mandato de la primera presidenta mujer en Chile. Se trata de un período interesante, pues podría estar marcando un precedente en la senda de las reivindicaciones de género y las tendencias ideológicas del país. Un ejemplo: durante la contienda presidencial de 2009-2010 el candidato Marco Enríquez-Ominami se apropió de la idea de progresismo para su campaña, autoperfilándose como el candidato oficial asociado a este concepto. Quizás, parte de su popularidad puede deberse precisamente a que el progresismo está jugando un rol más importante en Chile. En efecto, hoy Enríquez-Ominami es quien lidera el Partido Progresista (PRO), la primera fuerza política que emplea la corriente por su nombre propio. ¿Hacia dónde nos conducen estos procesos?

Si después de un gobierno de mujer -con fuertes tintes progresistas- se ha creado un movimiento que explota tales postulados para crecer en Chile, resulta relevante identificar cuáles son las características principales de estos grupos en la sociedad chilena actual. Tomarles una radiografía a estos hombres y mujeres servirá, sin duda, para dibujar el mapa de un Chile distinto. Un país que ha roto su matriz cultural con ciertas posturas que perduraron durante décadas, en búsqueda de una nueva definición de las libertades individuales.

Más allá de la postura política

Para obtener respuestas, analizamos las opiniones sobre temas que hoy son motivo de discusión. La Encuesta Nacional UDP 2010 incluye un set bastante amplio de preguntas que sirvieron de base para este trabajo.

La libertad individual, la igualdad de oportunidades y el derecho a elegir son los tres pilares de la agenda progresista actual. A partir de éstos, se extrajeron las variables para sistematizar un modelo analítico que cruza la opinión sobre temas complejos como la homosexualidad o el divorcio, entre otros, con los factores sociodemográficos más determinantes en la intensidad del progresismo. Asimismo, se consideraron una serie de posicionamientos políticos e indicadores de estatismo para enriquecer esta cartografía.

Construimos un índice de progresismo que genera perfiles según tres posicionamientos ideológicos: conservadores, moderados y progresistas. Estas categorías se formulan respecto a aquellos temas que suelen diferenciar a unos de otros, como los derechos civiles y reproductivos. En paralelo, se configuró un índice de estatismo, que establece una escala de “poco estatista” a “bastante estatista” según la opinión que se tenga del rol del Estado en la regulación de los servicios básicos, el transporte y la salud, entre otros.

Actualmente, las personas más progresistas en Chile son los jóvenes, que se declaran agnósticos o ateos y que se identifican con la izquierda, contando con más años de escolaridad que el resto. Son varones en su gran mayoría, aprueban el desempeño de Bachelet y desapruban la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. La edad y el nivel educacional son elementos clave para revelar el polo conservador de esta fotografía a los progresistas chilenos.

La agenda del progresismo

Cuando Bachelet asumió el gobierno del país, al mismo tiempo lo hizo Tavaré Vázquez en Uruguay. Así, se posicionó un enclave de mandatarios de centro-izquierda en el Cono Sur que incluía a Brasil y Argentina. Su norte era muy claro: adherirse a los postulados del progresismo internacional y, de esta manera, fijar una agenda de alta productividad económica y multiplicación de las libertades individuales, según los estándares propuestos por la CEPAL. Más allá de si efectivamente las metas sociales se pudieron cumplir en Chile (Antía, 2008), el fenómeno permitió evidenciar los pilares del progresismo: es tan liberal como estatista, su lema es la equidad social, su espíritu es el reformismo y su praxis es la reorganización del capitalismo.

Sobre estos cimientos, se ha desarrollado una fuerte vocación por garantizar la autonomía genuina de los sujetos como actores incidentes en la construcción del país (Castillo, 2006). En este sentido, tanto a un progresista identitario, preocupado de su género o clase (según las clasificaciones de Lakoff, 2004), como a un progresista comunitario, preocupado del medio ambiente, los une el supuesto que las personas eligen por sus propios medios al darse cuenta de las cosas y perseguir su interés personal. Todos los progresistas, dice este autor, buscan incorporar en la agenda del país una matriz de energías renovables, la igualdad de los derechos ciudadanos, la protección de los consumidores y una economía basada en la innovación y el emprendimiento.

Por otra parte, la teoría suele ligar las demandas de género del progresismo con las ambientalistas, pues el orden androcéntrico que busca reformarse no incluye sólo a las mujeres sino también a la naturaleza (Pozzoli, 2008). El supuesto es que a medida que el modelo occiden-

tal se fue globalizando, el desarrollo humano se negativizó hasta violar la integridad de los sistemas orgánicos interconectados e interdependientes, mediante la explotación y la desigualdad (Shiva, 1995).

En este contexto, en el análisis de valores y evaluaciones que hemos efectuado para estudiar mejor la relación entre diferentes variables y progresismo, sin duda lo más relevante es la revisión que se hace de la debilidad de los actores sociales (Guzmán, 1996). Lo anterior, dado que el gobierno de Bachelet se autoproclamó precisamente como un gobierno ciudadano.

Construcción de indicadores

A juicio de Lakoff (2004), la única vía para modificar un esquema mental es a través del lenguaje. Por ser una estructura sumamente compleja, no se puede acceder conscientemente a la ideología, requiriéndose la verbalización para reconfigurarla. Por eso es que debieron considerarse categorías dicotómicas en la construcción de nuestro índice de progresismo: lo que opinen las personas a favor o en contra de premisas bien claras, define qué tanto se acercan a “0” o a “1” en esta escala.

Los componentes de este índice fueron los siguientes:

- **Apertura a la inmigración**, que consideró la aprobación o desaprobación a las siguientes afirmaciones: que la población extranjera tiene un bajo nivel educacional, que es un riesgo para el trabajo de los chilenos, que es un aporte cultural al país y que los inmigrantes son más de los que la sociedad chilena puede acoger.
- **Derechos homosexuales**, procesado según las siguientes afirmaciones: la homosexualidad es una opción tan válida como otras, las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse, las parejas de gays o lesbianas pueden criar a un hijo tan bien como una pareja heterosexual y debiesen tener derecho a adoptar hijos.
- **Derechos humanos**, que consideró la evaluación de si fue o no necesario violar los derechos humanos en 1973 y si en algunas ocasiones las autoridades pueden hacerlo para garantizar la seguridad civil.
- **Derechos reproductivos**, que incluyó las siguientes premisas: la píldora del día después debiese distribuirse gratuitamente; dicho dispositivo es una decisión de cada mujer y no de las autoridades; y está bien que la pareja que no pueda tener hijos naturalmente use el semen, óvulo o útero de otra persona.
- **Derecho a la eutanasia**.
- **Despenalización del aborto**, tomando las siguientes situaciones: si la mujer no desea tener un hijo, si la pareja decide no tenerlo, si la madre corre peligro por el embarazo, si el feto tiene un serio defecto, si el embarazo se produjo por una violación, si no se tienen los medios económicos para la crianza y si la madre es menor de 14 años.
- **Despenalización del consumo de marihuana**.
- **Igualdad de género**, medida como la aprobación a la premisa de que las mujeres están igual o mejor capacitadas que los hombres para gobernar. Se consideró, asimismo, la opinión de que pueden ser mejores, como una manifestación de que, dependiendo del perfil de la persona y el cargo, una mujer lo haría bien.

- **Igualdad de oportunidades**, que se sostuvo en la afirmación que el Estado está más capacitado que los privados para resolver la desigualdad económica.
- **Maternidad y crianza**, tomando en cuenta la opinión sobre si una madre soltera puede criar un hijo tan bien como una casada, si un padre soltero puede criar un hijo tan bien como uno casado, si la madre que trabaja puede establecer con sus hijos una relación tan buena como otra que no y si una pareja separada puede criar bien a un niño.
- **Matrimonio y divorcio**, procesado mediante las siguientes premisas: la sexualidad sólo debe ejercerse dentro del matrimonio, el matrimonio es una institución pasada de moda, está bien que las parejas vivan juntas antes de casarse y/o nunca se casen y el divorcio es la mejor solución a los problemas matrimoniales.
- **Valor de la democracia**, que se formula con la premisa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Se consideraron como contrarios a este valor los que justifican un gobierno autoritario o son indiferentes.
- **Voto universal**, procesado como el conjunto de posturas ante el derecho de sufragio de los reos, los que estuvieron presos pero ya cumplieron condena, los extranjeros residentes en Chile y los chilenos residentes en el extranjero.

Todos estos componentes son binarios, es decir, constituyen dos categorías según esté o no de acuerdo con la premisa formulada. De este modo, se le otorga valor “1” en caso que la posición fuera progresista y un valor “0” en el escenario contrario. Para sumarlas al índice de progresismo tienen el mismo peso: el total se dividió por el número de variables, lo que permitió construir una estandarización para acceder a un análisis de porcentajes de progresismo que va de “0” a “1”, como variable continua. Posteriormente se recodificó en tres rangos equivalentes para los perfiles correspondientes.

El mismo procedimiento de binarización se empleó para el índice de estatismo, compuesto por opiniones sobre la estatización o privatización de diversos servicios y/o instituciones. En total se incluyeron nueve variables: la privatización de Codelco, de las isapres y de las empresas de servicios públicos, así como la estatización del transporte urbano, de las pensiones, la banca, la educación particular-subvencionada, las universidades privadas y las farmacias.

Dado el elevado nivel de variables incorporadas para ambas escalas, entre un 30% y un 50% eran susceptibles de perderse. Para ganar representatividad, se reemplazaron los casos perdidos con la media de los que sí responden, dado que es el mejor predictor para analizar variables continuas en un modelo tan complejo.

Respecto a los componentes incluidos, diferentes estudios señalan la relevancia del tema de la maternidad y su paulatina relativización como rol exclusivamente femenino en los modelos de pensamiento del progresismo. Por eso es que este índice se afirma sobre varias categorizaciones de este tema.

Como constructo social, la noción de maternidad ha ido evolucionando históricamente en relación directa con la definición de la identidad de la mujer y su posición en la sociedad (Molina, 2006). Ello, en virtud que

las mujeres ya tienen o demandan la libertad de definirse a sí mismas desde identidades que no tienen nada que ver con las de la madre. Su conquista de círculos restringidos antes sólo a los hombres, como el político y el científico, ha convertido a la maternidad en un obstáculo para la realización personal de muchas mujeres. Por consiguiente, el progresismo reivindica el modelo de una mujer empoderada profesionalmente, la crianza compartida y la disminución del número de hijos, en tanto que en lo práctico solicita leyes como la licencia postnatal del padre y la institucionalización de las salas cunas para trabajadores.

Cartografías ideológicas

Un examen de los índices, posicionamientos políticos y variables sociodemográficas en juego en este debate sobre género, progresismo y valores, evidencia en primer lugar que no existe una relación significativa con el nivel de estatismo. Una tabla de cruce entre los dos índices generados no permite demostrar diferencias significativas. De este modo, la distribución de las opiniones sobre las privatizaciones no guarda, necesariamente, relación con la distribución de opiniones sobre las premisas progresistas. Es un resultado crucial, considerando la importancia que la teoría le asigna a la postura frente al rol del Estado de los movimientos progresistas. En efecto, el medio camino entre mercado y sector público que traza el progresismo (Antía, 2008) parece acercarlo más a la moderación que a posturas bien definidas en materia de regulación de los servicios.

Tabla 1

Progresismo según posición política

Posiciones políticas	Escala de progresismo		
	Conservadores	Moderados	Progresistas
Interés en la política			
Interesados	2,5%	79,8%	17,7%
No interesados	1,6%	88,3%	10,1%
Perfil ideológico			
Derecha	2,8%	84,5%	12,7%
Centro	2,1%	86,7%	11,3%
Izquierda	0%	73,5%	26,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

Los factores políticos que marcan efectivamente una diferencia entre conservadores y progresistas son el perfil ideológico y el interés en la política. La tabla 1 muestra cómo, tras los cruces bivariados respectivos, el interés en la política incide en un mayor nivel de progresismo. Hay una diferencia de casi un 8% con respecto a los que no se interesan por la política.

Respecto al perfil ideológico, en la tabla 1 se aprecia cómo del total de los que se identifican con la izquierda, el porcentaje de progresistas duplica al mismo subtotal dentro de los conservadores y dentro de los de centro. En efecto, no existen personas de izquierda que sean conservadoras, según los parámetros del progresismo.

Respecto a la aprobación de los dos mandatarios emblemáticos de cada coalición -Bachelet para los progresistas y Piñera para los más moderados, e incluso conservadores-, la siguiente cartografía sólo comprueba lo que ya era una sospecha:

- Entre los que desaprueban a Bachelet, hay un porcentaje más alto de conservadores que el existente entre el total de los que aprueban su gestión presidencial. No obstante, viendo en la tabla 2 lo que ocurre con los progresistas, se constata un nivel muy similar tanto en el total de los que la apoyan como entre quienes la desaprueban.
- Entre los que desaprueban el desempeño de Piñera, en tanto, hay un alto nivel de progresismo. El total de conservadores que lo apoyan es bastante más reducido que el de los progresistas, aunque este porcentaje es mayor que para el caso de los que aprueban a Bachelet. Esto significa que, salvo las leves diferencias descritas, en su mayoría ambas gestiones tienen un alto apoyo de los moderados (Dorna, 1991). Las claves podrían ser el casi 90% de aprobación con el que Bachelet terminó su período y la conciliación de diversos sectores políticos que consiguió Piñera para su propuesta de cambio.

Tabla 2

Progresismo según evaluación de gestión presidencial

Evaluación de gestión presidencial *	Escala de progresismo		
	Conservadores	Moderados	Progresistas
Michelle Bachelet			
Aprueban su desempeño	1,5%	84,1%	14,4%
Desaprueban su desempeño	5,6%	81,5%	12,9%
Sebastián Piñera			
Aprueban su desempeño	2,3%	85,9%	11,8%
Desaprueban su desempeño	1,6%	74,8%	23,6%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

*Promedio de un set de variables de evaluación de desempeño para cada uno, recodificado como aprobación (notas igual o sobre 4) y desaprobación (notas inferiores).

Un tercer cruce, mucho más contundente, permite visualizar la actitud progresista en virtud de las variables edad, sexo, nivel educacional y religión. La tabla 3 permite sostener que a mayor nivel de educación y menor edad, hay un mayor nivel de progresismo. Las personas con educación universitaria y postgrados son un 11% más progresistas que los que no tienen más de 12 años de escolaridad.

Estudios recientes evidencian la relevancia de la edad como factor clave en algunos de los aspectos que hemos ingresado en este índice. Se trata de la opinión sobre la compatibilidad del trabajo y la maternidad, en donde ha quedado demostrado que los más jóvenes, por ser hijos de la globalización, revisan en forma crítica la herencia patriarcal al relativizar los binomios masculino/público y femenino/doméstico (Aravena y Baeza, 2010). Asimismo, es en este segmento donde se dieron las mayores valoraciones respecto a los avances en la igualdad de género cuando Chile eligió a una mujer como presidenta.

Respecto al género, podemos apreciar que los hombres son más progresistas por una diferencia porcentual no menor. Esto significa que las mujeres tienen una postura más moderada que los hombres incluso en temas de maternidad y reproducción.

En el tema puntual del aborto, un estudio hecho por académicas de la UDP (Herrera y Teitelboim, 2009) reveló que la opinión sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, en todas sus circunstancias, no parece tener menor resistencia o mayor apoyo entre los jóvenes ni tampoco entre las mujeres. El análisis de Aravena y Baeza (2010) sobre el universo de jóvenes, tampoco encontró mayores diferencias por género en evaluaciones sobre maternidad, trabajo y capacidades.

De este modo, concluimos que los hombres pueden ser tanto o más progresistas que las mujeres en muchos temas, a pesar de que en otros debates se pueda haber negado que exista una diferencia por género en el sondeo de este tipo de percepciones.

La variable religión aporta importantes conclusiones, pues casi un cuarto de los individuos que no se identifican con ninguna religión son progresistas. El porcentaje de conservadurismo, mientras tanto, es prácticamente equivalente si se tiene o no un credo. Según lo observado en Chile, los resultados distribuyen el factor religión en la forma esperable. La ausencia de credos, como es el caso de agnósticos y ateos, se correlaciona con un mayor grado de progresismo, según se aprecia en la tabla 3. Por otra parte, la identificación con religiones como la católica, evangélica, protestante u otras, lleva la balanza hacia niveles de mayor conservadurismo.

Tabla 3

Progresismo según factores sociodemográficos

Factores	Conservadores	Moderados	Progresistas
Sexo			
Hombres	2,1%	82,5%	15,4%
Mujeres	1,4%	89,3%	9,3%
Nivel educacional *			
Bajo	2,6%	89,2%	8,2%
Medio	1,2%	85,3%	13,5%
Alto	1,4%	79%	19,6%
Edad			
18 a 29	2%	82,8%	15,2%
30 a 45	0,5%	86%	13,5%
46 a 60	2,3%	85,5%	12,3%
61 y más	3,3%	91,5%	5,2%
Religión			
Alguna creencia	1,9%	87,3%	10,8%
Ateo o agnóstico	1,1%	78,7%	20,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

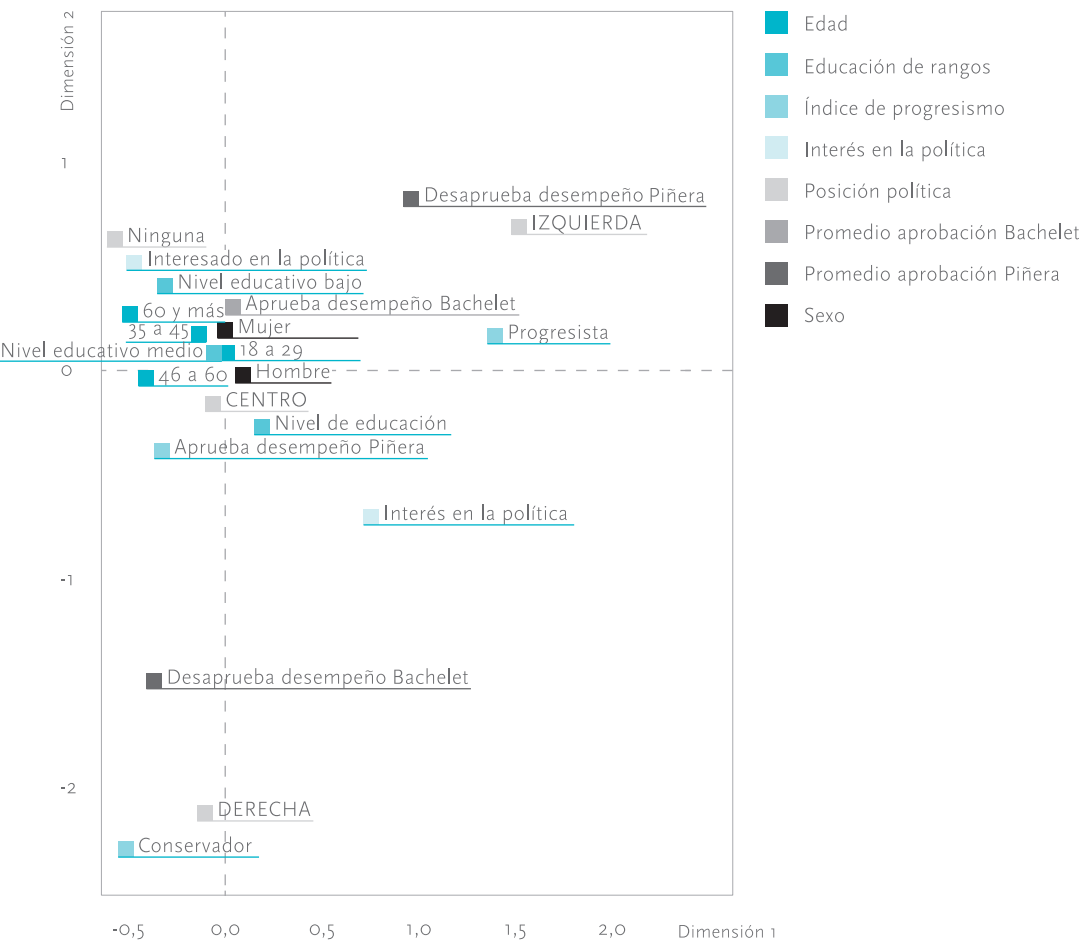
*Se considera por etapas. El nivel más bajo incluye sólo hasta enseñanza media incompleta; el intermedio hasta universitaria incompleta; y el alto hasta postgrado.

Para complementar esta fotografía, efectuamos un análisis de correspondencias múltiples con el índice de progresismo y las variables sociodemográficas y políticas antes descritas, a fin de observar una geografía completa de cómo se distribuyen las asociaciones entre factores dentro de un espacio de dos dimensiones.

El análisis nos permitió concluir que existen dos grandes perfiles, los que se evidencian en el gráfico 1. Primero, están los progresistas que desaprueban el desempeño de Piñera y que se identifican con la izquierda. Y segundo, los conservadores. Ellos desaprueban el desempeño de Bachelet y se identifican con la derecha. Los que se interesan en la política están en una categoría aparte, sin correlación con otras variables, lo cual supone que es un factor transversal a los dos polos ya descritos. Esto último podría vincularse con la teoría del centro político de Dorna.

Gráfico 1

Análisis de correspondencias múltiples con índice de progresismo



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

Conclusiones

Cuando ha terminado el primer gobierno con claras reivindicaciones de género y se ha levantado un movimiento progresista con nombre propio encabezado por jóvenes, es posible identificar el perfil de los progresistas del Chile actual. Se trata de personas que se identifican con la izquierda, no profesan credos religiosos, desaprueban el desempeño del actual mandatario de la centro-derecha y son, en su mayoría, hombres. En rigor, es un perfil muy similar al de la izquierda tradicional del país (Castillo, 2006), claro que con algunos matices por comportar reivindicaciones feministas.

Por ahora, se tiene ya la fotografía de un momento claro, la que será un insumo importante para posteriores revisiones en torno a la evolución de variables relacionadas con el género, los valores y las distribuciones ideológicas en el país. Luego que finalice la administración de Piñera, el primer gobierno de derecha electo democráticamente después de medio siglo, ¿para dónde irá a detenerse la aguja de este barómetro del progresismo? Este ejercicio cartográfico entrega indicios sobre qué elementos no se deben obviar al realizar este análisis en una nueva oportunidad.

Referencias

- ANTÍA**, Florencia. 2008. "Dinamismo y equidad como dimensiones necesarias del desarrollo. ¿Hacia un modelo de desarrollo progresista en Chile y Uruguay?", en *Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe*, Sep/Oct. CLACSO.
- ARAVENA**, Andrea y Manuel Antonio Baeza. 2010. "Jóvenes chilenos y construcción socioimaginaria del ser-otro mujer", *Última Década* 18, 3.
- CASTILLO**, Adolfo. 2006. "La ciudadanía frente al Estado", *Governanza, Revista Internacional para el Desarrollo Humano* 42.
- DORNA**, Alexandre. 1991. "Discurso centrista y estrategias discursivas", en Montero, Maritza, *La psicología política Latinoamericana*, II. Caracas: Eduven.
- FEDIAKOVA**, Evguenia. 2002. "Separatismo o participación: evangélicos chilenos frente a la política", *Revista de Ciencia Política* XXII, 2, pp. 33-45.
- GUZMÁN**, Virginia. 1996. "La equidad de género en una nueva generación de políticas", en *Encrucijadas del saber. Los estudios de género en las ciencias sociales*, pp. 213-230. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- HERRERA**, Florencia y Berta Teiteboim. 2009. "Opiniones de los chilenos sobre el aborto", en informe de quinta Encuesta Nacional UDP Chile 2009. *Percepciones y actitudes sociales*. Santiago: Universidad Diego Portales.
- LAKOFF**, George. 2004. *Don't Think of an Elephant! Know Your Values, Frame the Debate*. Vermont: Chelsea Green Publishing.
- MOLINA**, María Elisa. 2006. "Transformaciones histórico culturales del concepto de maternidad y sus repercusiones en la identidad de la mujer", *Psyke* 15, 2, pp. 93-103. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- POZZOLI**, María Teresa. 2008. "Mujer y medio ambiente: los caminos de la visibilidad. Utopías, educación y nuevo paradigma", *Polis* 7, 20, pp. 341-344. Santiago: Universidad Bolivariana.
- SHIVA**, Vandana. 1995. *Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo*, primera edición. Madrid: Horas y Horas.

Consumo de medios de comunicación e interés en política

ANDRÉS SCHERMAN

Existe una importante discusión en la literatura respecto a la relación entre el consumo de medios de comunicación que tienen los ciudadanos que viven en democracias liberales, y su interés y participación en política (Livingstone y Markham, 2008; Norris, 2000; Putnam, 2000; Capella y Jamieson, 1996, entre otros).

Se han desplegado dos posturas para explicar este vínculo. Por una parte, hay una corriente que observa con desconfianza esta relación. Plantea que altos niveles de consumo de medios tienen como consecuencia una disminución en el compromiso con temas de interés público y con el capital social de los ciudadanos. Ello se traduciría en una merma de la participación política y electoral (Putnam, 2000; Capella y Jamieson, 1996). Se indica que los medios privatizan las actividades políticas (Putnam, 2000) y que cumplen una acción distractora, entregando entretenimiento fácil y borrando las diferencias entre periodismo informativo y entretenimiento (Capella y Jamieson, 1996; Delli Carpini y Williams, 2001).

Una segunda corriente defiende el rol de los medios como promotores de la participación y del interés por lo público. El principal argumento es que en los sistemas democráticos, uno de los mayores desafíos que existe para lograr la participación política es concitar la atención de la población para que se informe sobre asuntos públicos. Esa tarea es llevada adelante, principalmente, por los medios de comunicación (Norris, 2000; Graber, 2004). En especial, se destaca la labor que juega la televisión, que es valorada por los ciudadanos como la principal fuente de noticias y de entrega de información y, asimismo, como un medio que genera niveles de confianza superiores a los producidos por los diarios e Internet (Bromley, Curtice y Seyd, 2004). De esta forma, en esta segunda corriente se considera que los medios son capaces de incrementar el interés de los ciudadanos por las materias políticas.

Este análisis del papel de los medios tradicionales se ha extendido en los últimos años a las tecnologías digitales (primero a Internet y posteriormente a las redes sociales). Autores como Couldry y Coleman han planteado que estas nuevas plataformas han reconfigurado las formas de participación y conexión con los temas públicos (Couldry et al., 2010; Coleman, 2008).

Internet habría emergido como un nuevo espacio común, multiplicando las posibilidades de conductas sociales y políticas. Específicamente facilitaría la emisión de opiniones sobre temas contingentes y las posibilidades de articular campañas de apoyo para ciertos temas de interés común (Calenda et al., 2009). En este sentido, un estudio desarrollado entre jóvenes norteamericanos reveló que entre aquellos que utilizaban sitios de redes sociales -como Facebook- existía un mayor compromiso cívico (Valenzuela et al., 2009). Pero estos hallazgos iniciales están lejos de ser aún concluyentes.

Otros autores han puesto énfasis en la relación entre la participación política *online* y *offline*, sugiriendo que el uso de las nuevas tecnologías puede ser una suerte de extensión del compromiso cívico que las personas desarrollan por vías tradicionales (Calenda et al., 2009), cuestionando que la sola presencia de esta tecnología modifique la relación entre los ciudadanos y el espacio público.

Variables políticas

Junto con la eventual influencia del consumo de medios de comunicación en el interés y la participación política, la investigación ha determinado la relevancia de incluir en el análisis una serie de variables relativas a: 1) las características individuales; 2) las actitudes y creencias políticas; 3) el capital social de los individuos (Scherman y Arriagada, 2010).

Entre las características individuales destacan la clase social y la edad, considerándose que las personas de mayores ingresos cuentan con más tiempo y posibilidades de participar en política. Asimismo, que aquellas con más años se involucran con mayor frecuencia en los asuntos públicos (Verba et al., 1978). Respecto a los aspectos políticos, se ha establecido que características como poseer una definición ideológica (Verba et al., 1978), tener una buena evaluación del funcionamiento del sistema político (Dalton, 1996) y manifestar un alto nivel de confianza en las autoridades (Bromley, Curtice y Seyd, 2004) incrementan las posibilidades de participar e interesarse en política.

Preguntas de investigación y método

La Encuesta Nacional UDP 2010 incluyó en su cuestionario una serie de variables respecto al interés en política, el consumo de medios, el uso de redes sociales, la confianza en las autoridades políticas, etc. Con estos datos, esta investigación busca responder dos interrogantes: ¿El consumo de medios tradicionales (televisión abierta, televisión pagada, radio y diarios) es un factor determinante que incrementa el interés en la política de los ciudadanos? ¿El uso de Internet y redes sociales (Facebook) es un factor determinante que aumenta el interés en la política de los ciudadanos?

La información proveniente de la Encuesta Nacional UDP fue utilizada individualmente o agrupada en índices, con el objetivo de efectuar distintos análisis de regresión que permitieran responder las preguntas de investigación planteadas. La incorporación de estas variables en los análisis de regresión se realizó considerando las principales aproximaciones teóricas para explicar el interés en política -como variable dependiente- y el consumo de medios -como variable independiente- (Livingstone y Markham, 2008; Valenzuela et al., 2009). Junto al uso de variables extraídas directamente del cuestionario, también fue necesi-

1 Este índice se elaboró siguiendo el método propuesto por Baranger (2009), quien plantea que una vez elegidos los ítems que formarán un índice, se deben sumar los puntajes obtenidos por cada encuestado (en la totalidad de los ítems elegidos). Luego, se tiene que ordenar a los encuestados de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido. Posteriormente, se descarta el 50% central de la distribución y se extraen los cuartiles 1 y 4 (25% con puntaje superior y 25% con puntaje inferior). Una vez hecho esto, se calcula el puntaje promedio de los cuartiles 1 y 4 de cada ítem y se analiza la diferencia entre las medias de los cuartiles 1 y 4. Si éstas tienen una diferencia estadísticamente significativa, se considera que ese ítem puede formar parte del índice, ya que posee poder discriminatorio (Baranger, 2009, pp.89-90). Adicionalmente, una vez seleccionados los ítems, se chequeó la confiabilidad del índice calculando el Alpha de Cronbach, método que mide la correlación existente entre los ítems que forman el índice.

2 En Chile, la inscripción en los registros electorales es voluntaria después de que las personas cumplen 18 años. Posteriormente, acudir a votar a cada elección es obligatorio. Debido a estas características de la incorporación de los ciudadanos chilenos al padrón electoral, la población habilitada para sufragar ha sufrido un fuerte envejecimiento en los últimos años. En 1988 -año en que volvieron a abrirse los registros electorales tras su cierre en 1973- la población inscrita entre 18 y 29 años representaba el 35% del electorado. Hoy, esa cifra llega a 9,2%. De las 3.322.551 personas que componen la población entre 18 y 29 años, sólo el 22,9% está inscrito en los registros electorales (INE, 2009; Servel, 2009).

rio construir un índice de confianza en las autoridades políticas¹.

Habitualmente en esta clase de investigación se utiliza como variable dependiente la "participación política", medida a través de la participación electoral efectiva en la última elección realizada. En el caso de este trabajo, sin embargo, se optó por trabajar con el "interés en la política" como variable dependiente, debido a que las características etarias del padrón electoral chileno podrían conducir a una sobrestimación de la importancia de la variable "edad", como determinante de la participación política².

Se buscó contestar las dos preguntas de investigación a través de un análisis de regresión ordinal múltiple. Se optó por esta técnica dado que la variable dependiente (interés en la política) es cualitativa ordinal y no tiene una distribución normal, lo que impide un análisis de regresión lineal.

Para identificar el impacto de los distintos tipos de variables consideradas se prefirió introducir sucesivamente distintos bloques en que se agruparon los factores explicativos. En primer lugar, se incluyeron sólo variables demográficas (sexo, edad, GSE y zona). A continuación se agregaron las variables sociales y políticas que la investigación asocia con el interés en política (capital social, confianza en actores políticos, satisfacción con la democracia y posición ideológica). Finalmente se incorporó un tercer bloque con el uso de los medios de comunicación tradicionales (televisión abierta, televisión por cable, radio, diarios), Internet y redes sociales (Facebook).

Resultados

► ANÁLISIS DESCRIPTIVO

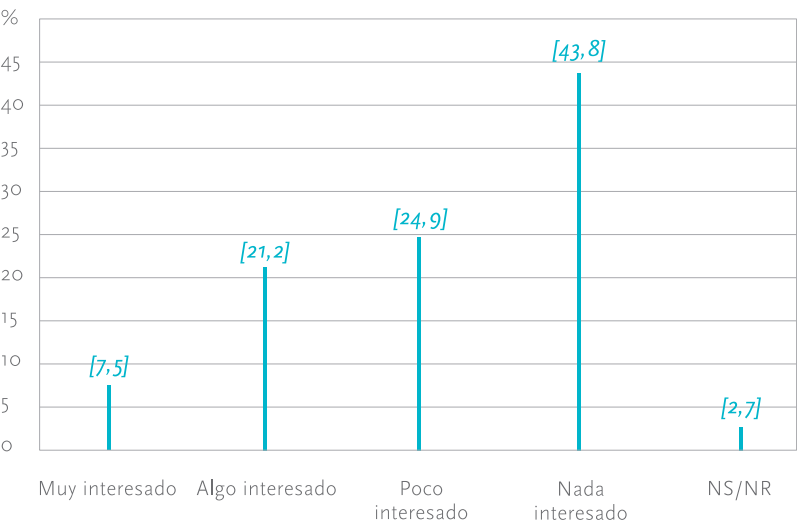
Los resultados de la Encuesta Nacional UDP (2010) muestran un bajo interés de la población mayor de 18 años en la política. Sólo 7,5% de los encuestados se manifiesta "muy interesado" en esta actividad, mientras el 43,8% asegura no tener ningún interés en ella (gráfico 1).

El mayor nivel de interés se observa entre los grupos de altos ingresos, los hombres y los habitantes de Santiago. Por el contrario, el mayor alejamiento aparece entre los segmentos más pobres, las mujeres y los habitantes de regiones.

Respecto al consumo de medios de comunicación, la encuesta nos muestra que la televisión predomina sin contrapeso: 82,6% de los entrevistados asegura ver televisión abierta al menos cinco veces a la semana y 44,2% responde lo mismo sobre la televisión de pago. Un poco más atrás, entre los medios tradicionales, se ubica la radio (61,3%). Y a una distancia bastante más considerable, los diarios (27%). Asimismo, el uso de Internet (al menos cinco veces a la semana) llegó a 34,4%, cifra superior que la alcanzada por las redes sociales: Facebook (23,3%) y Twitter (5%) (gráfico 2).

Gráfico 1

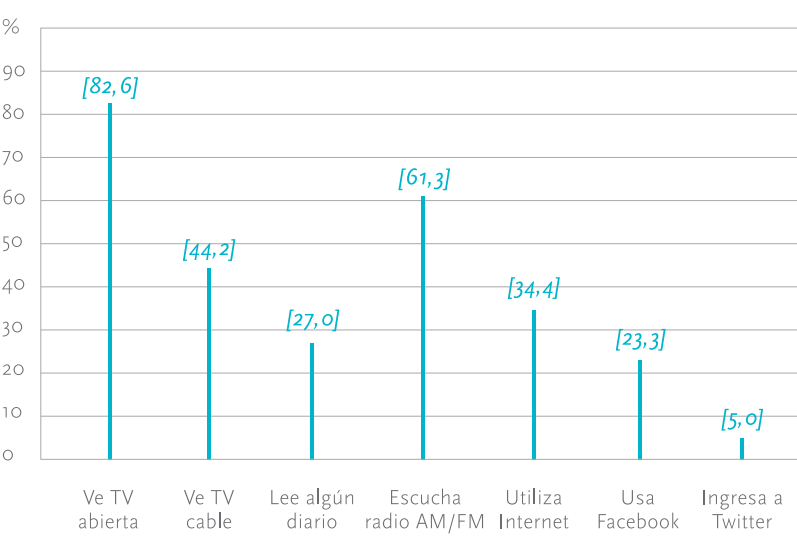
¿Qué tan interesado está Ud. en la política?



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Gráfico 2

¿Con qué frecuencia Ud.?: Sólo cinco veces a la semana o más



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

► ANÁLISIS DE REGRESIÓN

El análisis de regresión (tabla 1) evidencia que un alto consumo de medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y diarios impresos) no tiene ninguna clase de impacto -positivo o negativo- sobre el interés en política de los ciudadanos. Los resultados ubican a los medios de comunicación en una posición intermedia con relación a las dos grandes hipótesis de estudio que han sido abordadas hasta ahora: 1) como promotores del compromiso y el interés en los asuntos públicos; 2) como distractores que privatizan la vida de los individuos y los alejan del interés por los asuntos de la comunidad.

Respecto al uso de Internet y redes sociales -y a diferencia de los resultados obtenidos por los medios tradicionales-, el análisis de regresión se trata de un determinante estadísticamente significativo en el incremento del interés en política. Estos resultados podrían dar cuenta de que las nuevas tecnologías están transformándose en un espacio de reforzamiento de los vínculos políticos y sociales, siendo capaces de influir la forma en que los ciudadanos se involucran en la discusión pública y deciden participar en ella. O, al menos, que estarían jugando un papel más gravitante que los medios de comunicación tradicionales.

En todo caso, el análisis del impacto de las nuevas tecnologías debe ser cauteloso, ya que el uso de estas plataformas tiene una capacidad muy reducida para explicar el interés en política en comparación con otras variables como la identificación política, el capital social o el nivel socioeconómico. En esta línea, resulta llamativa la fuerte incidencia que tienen las llamadas variables políticas y sociales. Por ejemplo, tener una posición ideológica específica (autodefinirse como de derecha, centro o izquierda) resulta ser la variable más influyente para determinar el interés en política de una persona. Igualmente, poseer una elevada confianza en las instituciones políticas (gobierno, parlamentarios y partidos políticos) incide de forma relevante. Un elevado nivel de capital social (medido a través de la capacidad asociativa de las personas en distintas instancias de su vida social) también incrementa la posibilidad de tener un alto interés en política.

Respecto a las variables sociodemográficas, la más esencial es el nivel socioeconómico: a mayor nivel de ingresos aumentan las posibilidades de que las personas se interesen en política y participen. Este resultado es coincidente con estudios empíricos recientes efectuados en Chile (Periodismo UDP-Feedback, 2010). La edad no aparece como determinante, lo que da cuenta de la conveniencia de trabajar con el interés en política, y no con la votación en la última elección realizada, como variable dependiente. Esto permite plantear que las personas de mayor edad que votan en Chile no lo hacen porque tengan un interés mayor en la política que los jóvenes, sino que probablemente muchos de ellos acudan a sufragar porque forman parte del padrón electoral desde que masivamente la población fuera a inscribirse a los registros electorales en 1988.

Tabla 1

Análisis de regresión ordinal para predecir interés en política³

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Bloque 1			
Sexo (Mujer) Hombre	0,309 ***	0,305 **	0,263 **
Edad	-0,003	-0,005	-0,002
Región (Regiones) Santiago	0,405 ***	0,375 ***	0,289 **
GSE (E)			
C1	2,001 ***	1,238 ***	0,883 ***
C2	1,144 ***	0,687 ***	0,508*
C3	0,922 ***	0,471 *	0,296
D	0,575 ***	0,230	0,172
Bloque 2			
Capital social		0,235 ***	0,220 ***
Confianza en instituciones políticas		0,578 ***	0,582 ***
Satisfacción con la democracia		0,116	0,091
Posición ideológica (No tiene) Tiene		0,824 ***	0,863 ***
Bloque 3			
Alto consumo de TV abierta			0,029
Alto consumo de TV por cable			-0,155
Alto consumo de diarios			0,220
Alto consumo de radios			0,209
Alto consumo de Internet			0,456 **
Alto uso de Facebook			0,065
N	1.267	1.014	1.014
Pseudo R² Nagelkerke	0,105	0,190	0,206

3 En este modelo de regresión ordinal, los coeficientes negativos disminuyen la chance de que la persona tenga un alto interés en política. Los coeficientes positivos, en tanto, la incrementan.

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

*** Significativo al p≤0.01 ** Significativo al p≤0.05 * Significativo al p≤0.1

Comentarios

Los resultados de la investigación muestran que, en el caso de los medios tradicionales (televisión, radio y diarios), no se verifica ninguna de las dos grandes hipótesis que han acompañado la indagación respecto al efecto de los medios en el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos. El consumo elevado de cada uno de ellos no incrementa ni disminuye el interés de las personas en la política.

Esta constatación no significa plantear que los medios de comunicación tradicionales carezcan de importancia en materias como la construcción de la agenda pública o la opinión que se forman los ciudadanos respecto a sus autoridades. Simplemente implica que no son un factor determinante de que las personas tengan o no interés en la actividad política, y que ese fenómeno está influido por otras variables.

A diferencia de lo sucedido con los medios de comunicación tradicionales, el análisis realizado da cuenta de que el uso de nuevos medios sí contribuye a aumentar el interés en la política. Estos resultados, que por cierto son sólo una aproximación preliminar, apoyan las hipótesis que durante los últimos años han propuesto que las nuevas tecnologías tienen un importante potencial para desarrollar nuevas formas de compromiso cívico y fomentar interés en la política.

Finalmente, es necesario destacar la fuerte incidencia de variables como la posición ideológica, la confianza en las autoridades y el capital social. En gran medida es en la dimensión de las posiciones individuales y las prácticas sociales donde se juega el interés en la política, superando ampliamente los efectos de los medios de comunicación.

Anexos

Variable dependiente

► INTERÉS EN POLÍTICA

¿Qué tan interesado está Ud. en la política?: 1) nada interesado; 2) poco interesado; 3) algo interesado; 4) muy interesado. (Media: 1,92; D.S: 0,98).

Variables independientes

► SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo, edad, GSE, región.

► POLÍTICAS Y SOCIALES

- **Capital social:** Se construyó un indicador en que se sumó la participación de los encuestados en cuatro tipo de actividades que implican cierto grado de asociatividad con otras personas: de protección del medio ambiente, vecinales, de defensa de espacios públicos y religiosos. Este contador tuvo un valor mínimo de 0 y un máximo de 4. (Media: 0,35; D.S: 0,72).
- **Confianza en autoridades políticas:** Se construyó un índice considerando tres variables: 1) confianza en el gobierno; 2) confianza en los parlamentarios; 3) confianza en los partidos políticos. Este índice tuvo un valor mínimo de 1 y un máximo de 4. (Media: 1,95; D.S: 0,6; Alpha de Cronbach: 0,75).
- **Satisfacción con la democracia:** ¿Cuán satisfecho está Ud. con el funcionamiento de la democracia en Chile?: 1) nada satisfecho; 2) poco satisfecho; 3) algo satisfecho; 4) muy satisfecho. (Media: 2,88; D.S: 0,75).
- **Posición ideológica:** ¿Con cuál posición política se identifica o simpatiza más Ud.?: 1) derecha; 2) centro; 3) izquierda; 4) ninguna. Esta pregunta se recodificó agrupando las respuestas en dos alternativas: tiene posición política (derecha, centro o izquierda) y no tiene posición política (ninguna). (Tiene: 54,9%; No tiene: 45,1%).

► CONSUMO DE MEDIOS

Alto consumo de TV abierta: 82,6%

Alto consumo de TV por cable: 44,2%

Alta lectura de diarios (pagados o gratuitos): 27%

Alta audición de radio (AM/FM): 61,3%

Alto uso de Internet: 34,4%

Alto uso de Facebook: 23,3%

Estas variables fueron construidas utilizando como base la pregunta: ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza los siguientes medios de comunicación...?: 1) nunca o casi nunca; 2) menos de una vez a la semana; 3) 1-2 días a la semana; 4) 3-4 días a la semana; 5) 5-6 días a la semana; 6) todos los días.

Estas posibilidades de respuesta se agruparon en dos categorías: 1) alto consumo: cinco veces a la semana o más; 2) otros tipos de consumo: cuatro veces a la semana o menos.

Referencias

- BARANGER**, Denis. 2009. *Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la investigación social*. España: Posadas.
- BROMLEY**, Catherine, John Curtice y Ben Seyd. 2004. *Is Britain Facing a Crisis of Democracy?* Londres: UCL Constitution Unit.
- CALENDA**, Davide y Albert Meijer. 2009. "Young People, the Internet and Political Participation", *Information, Communication and Society* 12, 6, septiembre, pp.879-888.
- CAPELLA**, Joseph N. y Kathleen Hall Jamieson. 1996. "News Frames. Political Cynicism and Media Cynicism", *Annals of Political and Social Science* 546: 71-85.
- COLEMAN**, Stephan. 2008. "How Democracies Have Disengaged From Young People", en Loader, B. Ed. *Young Citizens in the Digital Age*. Londres: Routledge.
- COULDRY**, Nick; Sonia Livingstone y Tim Markham. 2010. *Media Consumption and Public Engagement*. Londres: Palgrave.
- DALTON**, Russell. 1996. *Citizen Politics*. Nueva Jersey: Chatham House Publishers.
- DELLI CARPINI**, Michael y Bruce Williams. 2001. "Let us Infotain You", en Lance Bennet y Robert Entman (editores) *Mediated Politics*, Cambridge University Press.
- GRABER**, Doris. 2004. "Mediated Politics and Citizenship in the Twenty-First Century", *Annual Review of Psychology* 55: 545-71.
- LIVINGSTONE**, Sonia y Tim Markham. 2008. "The Contribution of Media Consumption to Civic Participation", *The British Journal of Sociology* 59: 351-71.
- NORRIS**, Pippa. 2000. *A Virtuous Circle*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Periodismo UDP-Feedback. 2010. Encuesta de Jóvenes y Participación 2010. Santiago de Chile.
- PUTNAM**, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Nueva York: Simon & Schuster.
- SCHERMAN**, Andrés y Arturo Arriagada. 2010. *Jóvenes, participación política y consumo de medios en Chile*. Manuscrito.
- VALENZUELA**, Sebastián, Namsu Park y Kerk Kee. 2009. "Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students' Life Satisfaction, Trust, and Participation", *Journal of Computer-Mediated Communication* 14 (4): 875-901.
- VERBA**, Sidney, Norman Nie y Jae-On Kim. 1978. *Participation and Political Equality*. Nueva York: Cambridge University Press.

La mirada de los chilenos a la familia

FLORENCIA HERRERA / BERTA TEITELBOIM ¹

¹ Las autoras agradecen los valiosos e interesantes comentarios de Marjorie Murray, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las formas de entender y construir las relaciones familiares han sufrido profundas revoluciones en las últimas décadas (Giddens, 1992 y 1999; Segalen, 2000; Beck-Gernsheim, 2002; Weeks, Heaphy y Donovan, 2001; Cadoret, 2003). Giddens afirma que “de todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada -en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la familia-. Hay en marcha una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo formamos lazos y relaciones con los demás” (1999: 65). En América Latina, Elizabeth Jelin sostiene: “El hecho central es que vivimos en un mundo en el que las tres dimensiones que conforman la definición clásica de familia (sexualidad, procreación, convivencia) han sufrido enormes transformaciones y han evolucionado en direcciones divergentes” (1998: 17).

En Chile hemos sido testigos y protagonistas de estos cambios. La mujer que a mediados del siglo pasado se dedicaba a cuidar sus hijos y al hogar, vuelve a insertarse en el mercado laboral. La disminución de la mortalidad y la morbilidad femenina, la contracepción que evita los embarazos excesivos, el descenso de la mortalidad infantil, el aumento del nivel educacional femenino y el aligeramiento y desvalorización de las tareas del hogar hacen que la mujer quiera trabajar fuera de éste para desarrollarse.

² En Chile, la tasa de nupcialidad (cada mil habitantes) ha disminuido. Pasó de ser 6,6 en 1992, a 3,3 en 2008. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 1960 se registró en Chile el mayor promedio de hijos por mujer: 5,39. Sin embargo, el país mostró una disminución en el promedio de hijos hasta 1,92 el año 2008. La convivencia también aumenta; cada vez son más las parejas que posponen o evitan el matrimonio. Entre 1990 y 2009, se incrementa la cantidad de hogares cuyo jefe de hogar es soltero, separado o conviviente. Asimismo, disminuyen

El trabajo femenino cuestiona el modelo de pareja basado en la dependencia económica del hombre. El salario le da autonomía a la mujer y le permite renunciar al matrimonio en caso que no le satisfaga. Por otro lado, ahora la continuidad de la pareja se basa en el ‘amor’ (comunicación emocional e intimidad) y no en los vínculos patrimoniales (Giddens, 1992). Las tasas de nupcialidad descienden y los divorcios y la convivencia se incrementan; la unión a lo largo del tiempo se hace más frágil². No es que el hecho de formar pareja en sí mismo sea rechazado, es sólo que el matrimonio es más débil. De acuerdo con Ximena Valdés et al. (2005), en Chile, a partir de los años ochenta, se está produciendo un fenómeno de desinstitucionalización de la familia.

En el campo de la reproducción también se han vivido grandes cambios. La masificación de la píldora anticonceptiva y las nuevas tecnologías reproductivas han logrado separar la sexualidad de la concepción. Paralelo a estos avances, ha disminuido sostenidamente la fecundidad

y han aumentado los hijos fuera del matrimonio³. Gracias a los anti-conceptivos, los hijos pueden programarse y hoy suelen planificarse de acuerdo con los tiempos de la pareja y, especialmente, de la mujer. La maternidad se posterga y crece el interés en tener hijos en períodos de la vida en que disminuye la fertilidad. Esto lleva al aumento de la demanda por tratamientos de reproducción asistida y, con ello, el desarrollo de estas tecnologías cuestiona las formas tradicionales de entender la parentalidad⁴.

Las tareas de la mujer se multiplican: por un lado entra al mercado de trabajo, pero por el otro sigue siendo ella la principal responsable de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos (Beck-Gernsheim, 2002). Las investigaciones de Valdés (2005) y Olavarría (2005) apuntan a que en Chile sigue existiendo una marcada división sexual del trabajo al interior de los hogares: a pesar de la existencia de un discurso más democrático e igualitario en la pareja, en Chile siguen siendo las mujeres las que se hacen cargo de las tareas domésticas y de los hijos.

Aunque la pareja sea más inestable o frágil, la familia como institución que une generaciones sigue sólida. La inestabilidad del núcleo conyugal y las nuevas formas de hacer familia no implican que exista un debilitamiento de los lazos familiares (Tironi, 2005). Las familias monoparentales, las reconstituidas o las desinstitucionalizadas, conviven con las redes de parentesco. Frente a la fragilidad del vínculo conyugal estos lazos se refuerzan y se recombinan. Se crean nuevas familias que se caracterizan por su fluidez y diversidad.

La encuesta Casen 2009⁵, permite analizar los principales cambios que han tenido las familias en las últimas dos décadas. Los datos evidencian que las familias biparentales⁶ han disminuido: en 1990 correspondían al 67,3% y el año 2009 alcanzaron el 58,6%. Por otra parte, las familias unipersonales y monoparentales han aumentado, especialmente con jefatura masculina (4,5% a 7,2%). Esta encuesta muestra un importante descenso del número de jefes de núcleo casados y un incremento de las convivencias y de personas sin pareja a cargo del núcleo familiar. También se observa una relevante reducción del número de personas por familia (3,4 personas en 1990 a 2,9 en el año 2009).

Esta breve revisión de las transformaciones que han vivido las familias chilenas en las últimas décadas nos permite enmarcar las preguntas que guían este artículo: ¿Qué opinan los chilenos de estos cambios? ¿Qué legitimidad le dan a las distintas realidades que viven en sus relaciones familiares? ¿Se pueden identificar distintos grupos de acuerdo a su posición respecto a estos temas? ¿Qué concordancia hay entre las prácticas familiares y la ideología sobre la familia?

Para abordar estas preguntas, en primer lugar se usan los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2010 con el objetivo de ver el grado de aceptación que tienen distintas realidades familiares en los ámbitos de la pareja, la reproducción, la parentalidad y las relaciones entre personas del mismo sexo. En segundo lugar, se analizan las tipologías de opinión que surgen a partir de las respuestas de los encuestados, identificando cinco grupos en el continuo liberal-conservador.

de 64% a 45,6% las familias cuyos jefes de hogar son casados/as (Casen 2009).

3 En 1996, la proporción de las mujeres que fueron madres por primera vez y que no estaban casadas fue de 55,3%. En el año 2004, en cambio, dicha proporción aumentó al 72,7%. Fuente: bases de datos INE contenidas en www.ine.cl.

4 Por ejemplo, separación de la paternidad biológica y la paternidad social en casos de donación de gametos.

5 Familia. Encuesta Casen 2009 - Mideplan (2010).

6 **Familia unipersonal:** corresponde a aquellos núcleos en los que vive una sola persona.

Familia biparental: núcleos en los que se encuentra el/la jefe/a y su pareja, independiente de su situación legal.

Familia monoparental: núcleos en los que el/la jefe/a de hogar no presenta pareja.

Familia nuclear: corresponde a las personas que forman parte de un mismo núcleo.

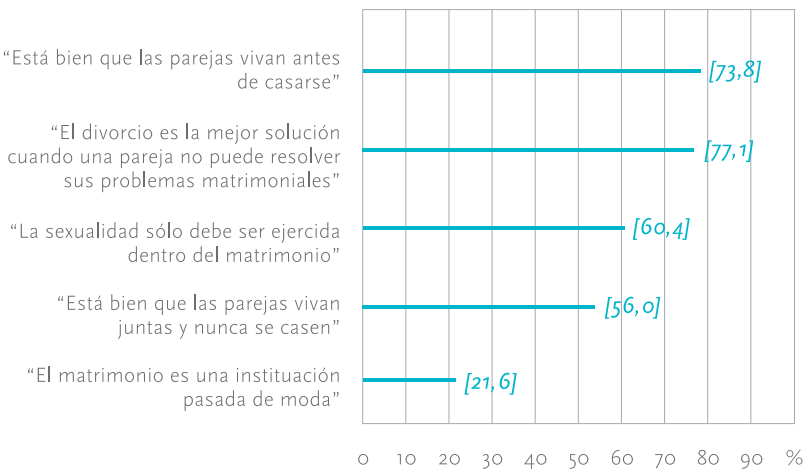
¿Qué opinan los chilenos?

► PAREJA

En el gráfico siguiente, se puede observar que la convivencia de las parejas tiene una mayoritaria aceptación como paso previo antes del matrimonio (73,8%). Estos niveles de aceptación bajan notablemente cuando se plantea como una situación definitiva (56%). El divorcio se ve como una alternativa aceptable y legítima (77%) y el matrimonio no es considerado una institución pasada de moda (21,6%).

Gráfico 1

Nivel de acuerdo con convivencia, divorcio y matrimonio (% de encuestados que responden “muy de acuerdo” y “de acuerdo”).



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Estas opiniones muestran diferencia según edad y grupo socioeconómico (GSE). El acuerdo con la convivencia disminuye significativamente con la edad: sólo el 61% de los mayores de 61 años está de acuerdo con que las parejas vivan juntas antes de casarse y el 35% con que vivan juntas y nunca se casen. Las personas de más altos ingresos, por otra parte, tienen mayores niveles de aceptación frente a la convivencia y al divorcio.

Junto al matrimonio tradicional, se validan uniones más flexibles y frágiles. Se legitima la convivencia pero todavía se la percibe como un paso previo al matrimonio. Hasta hace unas cuatro décadas la unión libre, el divorcio y la familia monoparental eran considerados figuras de desviación con relación a la norma. Actualmente se asiste al fin de la regla única del matrimonio monógamo y todas estas figuras forman parte de un mismo modelo considerablemente aceptado.

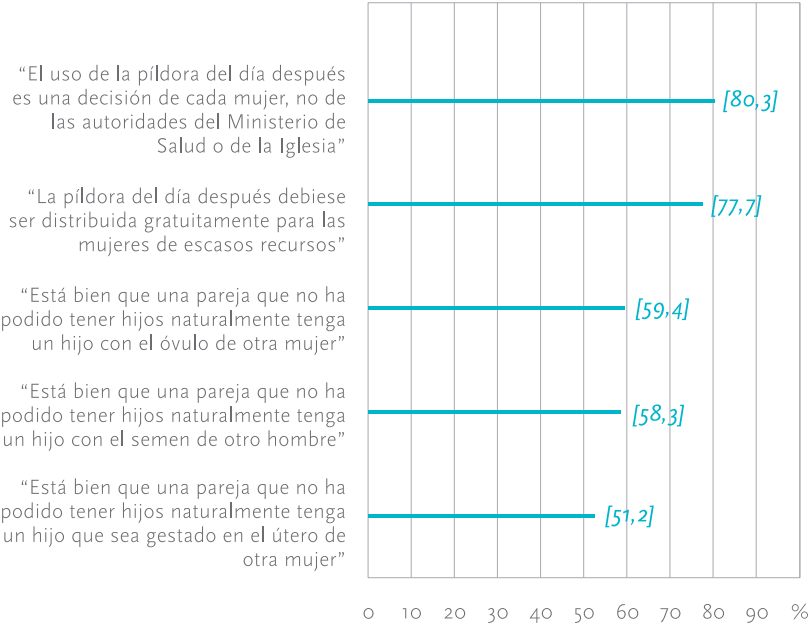
► CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

Las respuestas de los encuestados reflejan que existe un acuerdo frente a la autonomía de la mujer, en relación a decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos de emergencia y que éstos sean distribuidos gratuitamente. No existen diferencias de opinión según género. En relación a la edad, solamente los mayores de 60 años muestran un menor acuerdo. Las personas de grupos socioeconómicos bajos, asimismo, exhiben menores niveles de acuerdo.

El uso de técnicas de reproducción asistida logra una aceptación mayoritaria de la población (aunque menor al de la anticoncepción de emergencia). La adhesión más baja la tiene la opción de que el hijo sea gestado en el útero de otra mujer cuando la pareja no puede tener hijos en forma natural. En este caso existe diferencia según género, pues los hombres presentan mayores grados de acuerdo que las mujeres.

Gráfico 2

Nivel de acuerdo con píldora del día después y con reproducción asistida (% de encuestados que responden “muy de acuerdo” y “de acuerdo”).



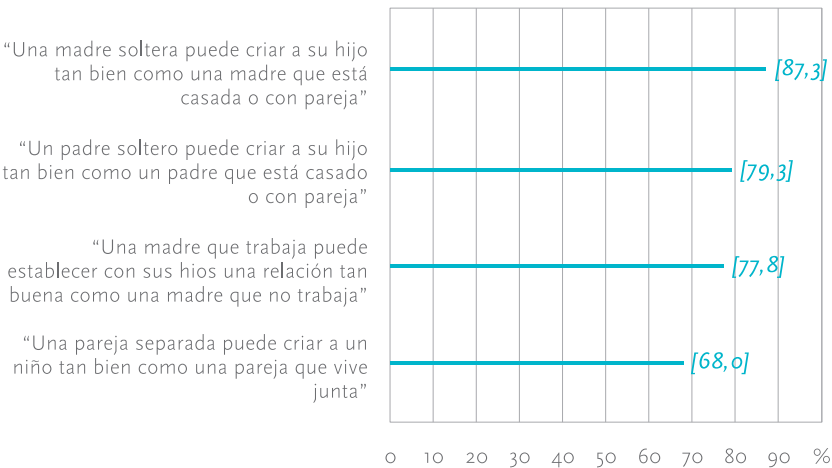
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

► PARENTALIDAD

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con que un hombre soltero o una mujer soltera puede criar a un hijo tan bien como una pareja casada. En esta percepción no se registran diferencias según edad. Sí se identifica que el grupo socioeconómico alto muestra un menor acuerdo. Llama la atención, asimismo, que las madres solteras se vean más capaces de criar un hijo que las parejas separadas. Por otra parte, el 81,2% de las mujeres piensa que una mamá que trabaja puede tener una relación con los hijos tan buena como la que tiene una madre que no trabaja. Esta proporción es más alta que la de los hombres, respecto a la misma afirmación.

Gráfico 3

Nivel de acuerdo con situaciones no tradicionales de parentalidad (% de encuestados que responden “muy de acuerdo” y “de acuerdo”)



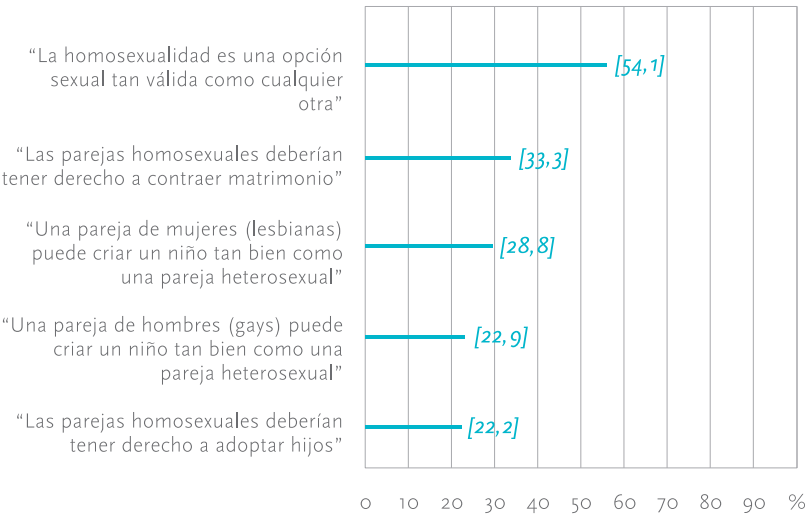
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

► HOMOSEXUALIDAD

El tema de la homosexualidad es, sin duda, el que recibe menos aceptación por parte de los encuestados. Sólo un 54,1% está de acuerdo con que la homosexualidad es una opción sexual tan válida como cualquier otra. Cuando las preguntas apuntan a relaciones de parejas homosexuales o a la posibilidad de que hombres o mujeres gays críen hijos, la aceptación baja drásticamente. Sólo un 22,2% de los encuestados opina que los homosexuales deberían tener derecho a adoptar hijos. El rechazo al matrimonio homosexual y a la parentalidad gay aumenta significativamente con la edad. Por otra parte, las personas entre 18 y 45 años, las mujeres y los que pertenecen a los grupos socioeconómicos más altos son los que tienen una actitud más tolerante frente a la homosexualidad.

Gráfico 4

Nivel de acuerdo con matrimonio y parentalidad homosexual (% de encuestados que responden “muy de acuerdo” y “de acuerdo”)



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Las respuestas de los encuestados muestran que la familia nuclear constituida por un padre proveedor y una madre ama de casa que crían juntos a sus hijos, ha perdido su monopolio. El matrimonio sigue ocupando un lugar central como forma de organizar las relaciones familiares, pero fenómenos como la convivencia, el divorcio, las madres y padres que crían solos a sus hijos y las madres que trabajan, son considerados alternativas legítimas a las relaciones familiares tradicionales.

Los resultados de la encuesta indican que la combinación de familia y homosexualidad es conflictiva para los chilenos. La homoparentalidad despierta recelo incluso entre los más abiertos: los jóvenes. En efecto, el 63% de las personas entre 18 y 29 años está en desacuerdo con que los homosexuales puedan adoptar hijos. La diferencia de sexo en la pareja es considerada un requisito para constituir una familia.

Con relación al género, si bien no hay diferencias de opinión significativas en los distintos temas, sí se perciben algunas diferencias en los resultados de la encuesta. Por ejemplo, se identifica una mayor aceptación a las madres solteras que a los padres solteros, así como más validación a las madres lesbianas que a los padres homosexuales. Esto refleja que la crianza de hijos sigue estando más ligada a lo femenino.

¿Quiénes son los conservadores y los liberales?

Para identificar quiénes son los grupos conservadores y quiénes son los liberales, se efectuaron tipologías de opinión en base al grado de aceptación o rechazo de los entrevistados frente a un largo set de preguntas. La interrogante utilizada fue la número 86 del cuestionario (ver anexo: tabla 1), que está formulada de la siguiente manera: “A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. Me gustaría saber si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en desacuerdo con cada una de ellas”.

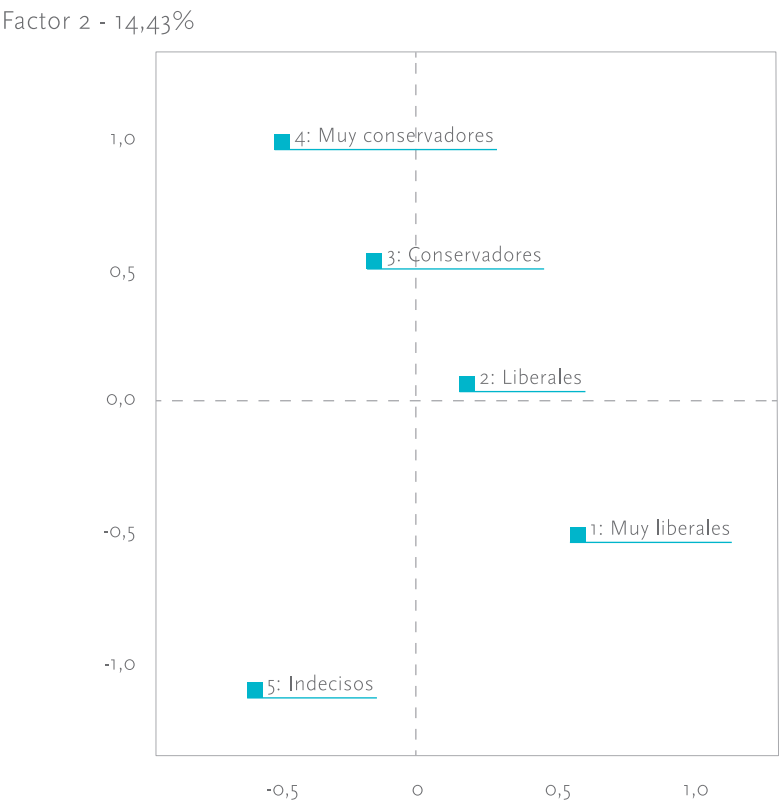
Primero, se construyó un gráfico utilizando la técnica de análisis de correspondencias múltiples. Éste permite analizar las distancias o cercanías que tienen entre ellas cada una de las categorías analizadas para las 21 variables. Esta metodología permite, precisamente, detectar las interrelaciones entre una gran cantidad de categorías y/o de las variables, poniéndolas de manifiesto en gráficos bidimensionales que pueden ser interpretados con relativa facilidad (Levi y Varela, 2003).

Esta técnica de análisis no requiere hipótesis ni supuestos de ninguna naturaleza, debido al carácter descriptivo y exploratorio de la misma. Lo que se busca es resumir el gran volumen de datos en un gráfico de fácil interpretación. Cada categoría corresponde a “de acuerdo” o “en desacuerdo”, por lo tanto se obtiene un gráfico en el cual están representadas 42 categorías (ver anexo gráfico 1: análisis de correspondencias múltiples – categorías: acuerdo/desacuerdo).

Luego se levantaron tipologías de opinión, para lo cual se utilizó la técnica de conglomerados o *cluster* con las respuestas de los chilenos acerca de los temas analizados. Se encontraron cinco tipos de opiniones. Las posiciones que reflejan fueron clasificadas como ‘muy liberales’, ‘liberales’, ‘conservadores’, ‘muy conservadores’ e ‘indecisos’.

Gráfico 5

Tipologías de opinión: conservadores-liberales



Fuente: elaboración a partir de datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

A continuación se realiza una breve descripción de las características más frecuentes de las personas pertenecientes a estos cinco grupos:

- **Grupo 1 “Muy liberales”:** Representan el 21,5% de los encuestados. Se caracterizan por tener una posición política de izquierda, son jóvenes y viven en su mayoría en la Región Metropolitana.
- **Grupo 2 “Liberales”:** Se diferencian con el grupo anterior en que no están de acuerdo con la adopción de hijos por parejas gay. Representan el 34,2% de los encuestados. Tienden a ser de estrato social medio y vivir en regiones.
- **Grupo 3 “Conservadores”:** Representan el 18,4% de los encuestados. Consideran que una madre soltera o un padre soltero puede educar igual de bien a sus hijos que aquellos que están en pareja. Están de acuerdo con que el divorcio es una solución cuando la pareja no puede resolver sus problemas, pero manifiestan desacuerdo con el resto de los temas analizados. Este grupo es transversal; no muestra un perfil sociodemográfico determinado.
- **Grupo 4 “Muy conservadores”:** Representan el 16,4% de los encuestados. Están en desacuerdo con todos los temas planteados. En general son personas mayores de 60 años y de grupo socioeconómico medio-bajo.
- **Grupo 5 “Indecisos”:** Representan el 9,4% de los encuestados. Tienen a ser personas mayores y en situación de extrema pobreza.

Para encontrar las relaciones entre cada una de las tipologías y las variables sociodemográficas en forma conjunta, se realizó un análisis de regresión logística múltiple⁷. De acuerdo con éste, en la formación de opinión la variable relevante es la edad, luego la religión, en tercer lugar la posición política y, finalmente, el grupo socioeconómico. El género del entrevistado no incide en la conformación de opinión, así como tampoco si vive o no en la Región Metropolitana.

7 Se utilizó la técnica de análisis logístico múltiple, que permite que la variable dependiente sea categórica y con más de dos categorías.

En relación con las variables que mostraron niveles de significación en el análisis, se puede afirmar:

- Las personas con mayor edad tienen opiniones conservadoras o no tienen opinión. De manera inversa, a menor edad son más liberales.
- Las personas que profesan la religión evangélica son más conservadoras.
- Las personas de izquierda son más liberales.
- El grupo socioeconómico también incide en la posición que toman las personas: los más pobres tienden a ser más conservadores y los de estratos más altos a ser más liberales.

Por último, se realizó un diagrama de árbol⁸ para tener mayor precisión en el análisis de las variables explicativas. Se concluye, nuevamente, que la edad es el factor determinante en la posición que toman las personas. En el tramo de edad de 25 a 52 años, la religión tiene un peso importante. Las personas que son evangélicas o de otra religión no católica tienden a ser más conservadoras (ver anexo).

8 Técnica estadística multivariada que permite analizar una variable de respuesta categórica.

Conclusiones

Para comprender los cambios y las evoluciones de la familia es necesario distinguir entre la ideología imperante sobre la familia (lo que es considerado adecuado y correcto) y las prácticas (lo que efectivamente las personas hacen). Yanagisako (1979) propone que el cambio y la continuidad en las instituciones familiares no son fenómenos excluyentes. La clave está en examinar la relación entre los cambios en la ideología de la familia y las transformaciones en los arreglos prácticos propiamente dichos. La ideología que ha producido un tipo de estructura familiar puede persistir, a pesar de las alteraciones en las formas de organización que se observan. El cambio en las conductas no necesariamente implica que las ideologías culturales hayan cambiado (1979: 183-184).

Ximena Valdés (2007) sostiene que en Chile hubo congruencia entre la norma, la ideología y la práctica en un breve lapso de 50 años (1930-1970). En este período existe una homogeneización de las formas familiares, donde la familia se organiza en torno a la institución del matrimonio, disminuyen los hijos fuera de él y hay tasas bajas de separación y convivencia. Sin embargo, desde hace 40 años, nuestro país es testigo de una diversificación de las formas familiares. El modelo de familia nuclear -donde es el hombre el que trabaja y sustenta la familia, y la mujer la que se queda en casa y cuida a los niños- ha ido perdiendo lugar en las últimas cuatro décadas (Ximena Valdés et al., 2005).

De acuerdo con el informe *Desarrollo humano en Chile* del Programa de Naciones Unidas (PNUD, 2002), la multiplicación de morfologías familiares ha ido a la par con un proceso de legitimación de las formas alternativas de hacer familia. “La diversidad e informalidad en las formas de organizar los vínculos familiares es vista, cada vez más, como un hecho normal. Esta creciente legitimidad se debe, por una parte, a que la cultura de la individualización deja a las propias personas decidir sobre la forma de organizar sus vínculos sociales y el derecho a modificarlos. Por otra, se apoya en la extendida percepción que las formas institucionales predominantes de organización de los vínculos familiares están en crisis y requieren cambios” (PNUD 2002: 206).

En términos gruesos, esta mayor legitimidad de las diversas formas de hacer familia se ve ratificada por los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2010. La ideología sobre la familia ha comenzado a transformarse y a abrirse. Se han multiplicado las formas aceptadas de vivir y organizar las relaciones familiares. Esta apertura, sin embargo, encuentra su piedra de tope en las relaciones de personas del mismo sexo. Como se ha señalado, la mayoría de las personas rechazan la posibilidad del matrimonio homosexual y que parejas del mismo sexo tengan hijos. Otras señales de vigencia de valores más tradicionales son la asociación de la crianza de hijos con la mujer y la menor aceptación de las nuevas tecnologías reproductivas (específicamente las que implican donación de gametos). Detrás de estas resistencias se puede apreciar la persistencia de la imagen de la familia ‘natural’ o ‘moral’ vinculada con valores religiosos.

Por otro lado, la percepción de los chilenos sobre los temas relacionados con la familia no es monolítica. Existen posiciones definidas que permiten identificar claramente la existencia de grupos conservadores y liberales. Es interesante constatar que la ubicación en el continuo entre estos dos polos, así como la pertenencia a uno de estos grupos, no

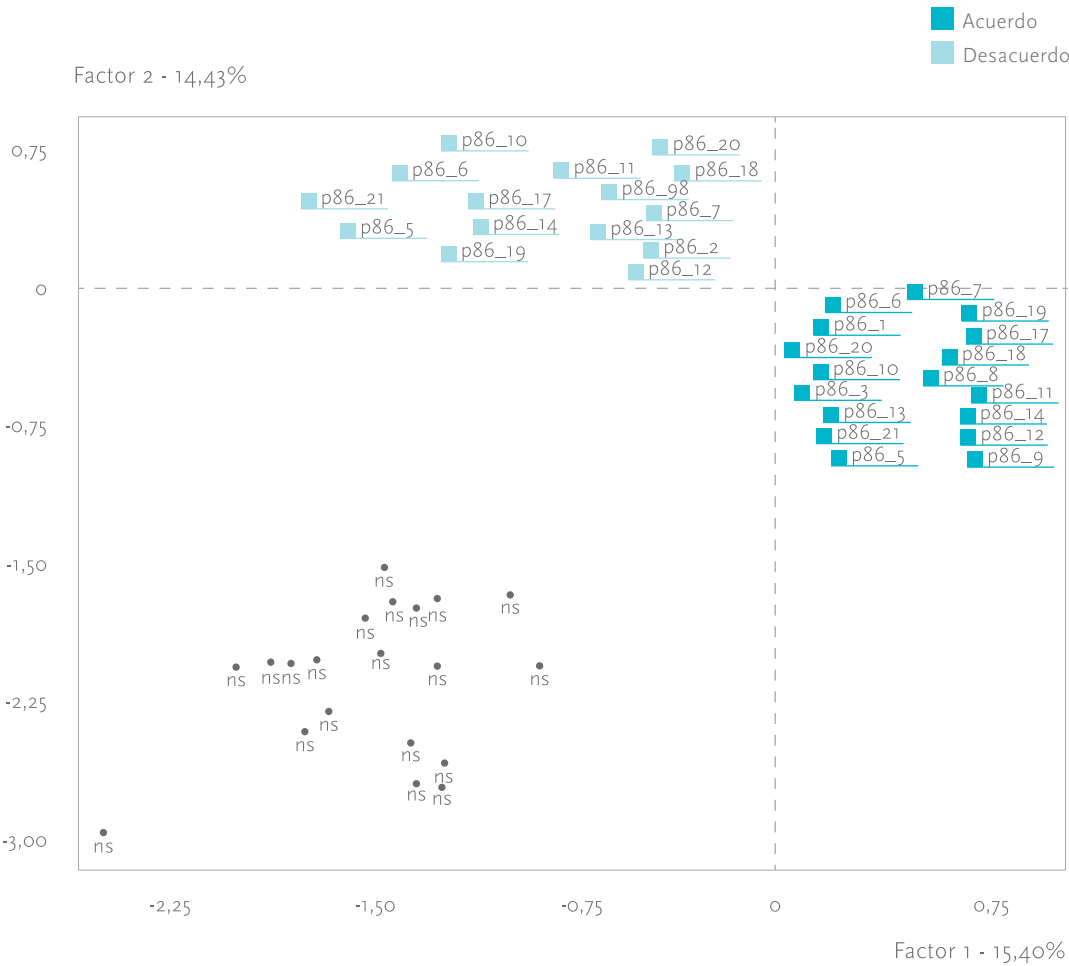
está determinada por el sexo, la región, el nivel socioeconómico o la simpatía política. Tampoco la filiación religiosa es un factor determinante. El conservadurismo o liberalidad parecen ser rasgos transversales.

Beck-Gernsheim (2002) se pregunta ¿qué pasa cuando las antiguas certezas -basadas en la religión, la tradición y la biología- pierden fuerza, sin desaparecer, y nuevas opciones rediseñan las áreas de elección personal? Y responde: algunos grupos mantienen una imagen tradicional de la familia, otros se oponen a esta idea conservadora, pero, en la mayoría de los casos coexiste una mezcla de ideas tradicionales con nuevas expectativas. Los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2010 apoyan este argumento. Hoy, en Chile conviven grupos que conservan los valores tradicionales de la familia junto con grupos que validan las nuevas formas de organizar las relaciones familiares. Las opiniones de los chilenos reflejan cambios y continuidades en la nueva ideología de la familia.

Anexos

Gráfico 1

Análisis de correspondencias múltiples. Categorías acuerdo/desacuerdo.



En el cuadrante superior izquierdo se ubican las categorías de las personas que están en desacuerdo con cada uno de los temas planteados. En el cuadrante inferior derecho están las personas más abiertas en los temas abordados y, finalmente, están agrupadas las personas que no tienen opinión frente a estos temas (eje inferior izquierdo).

Fuente: Elaboración a partir de datos de Encuesta Nacional UDP 2010.

Tabla 1

Análisis factorial					
Matriz de componentes rodados					
Nº de pregunta	1	2	3	4	5
13 "Una pareja de hombres (gays) puede criar un niño tan bien como una pareja heterosexual"	0,91	0,12	0,09	0,04	0,11
14 "Las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar hijos"	0,89	0,08	0,14	0,01	0,11
12 "Una pareja de mujeres (lesbianas) puede criar un niño tan bien como una pareja heterosexual"	0,88	0,16	0,09	0,12	0,11
11 "Las parejas homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio"	0,79	0,13	0,20	0,14	0,16
10 "La homosexualidad es una opción sexual tan válida como cualquier otra"	0,63	0,19	0,22	0,23	0,21
19 "Se debería despenalizar el consumo de marihuana"	0,37	-0,11	0,05	0,29	0,34
4 "Un padre soltero puede criar a su hijo tan bien como un padre que está casado o con pareja"	0,16	0,83	0,04	0,10	0,04
3 "Una madre soltera puede criar a su hijo tan bien como una madre que está casada o con pareja"	0,09	0,79	0,05	0,19	0,05
5 "Una madre que trabaja puede establecer con sus hijos una relación tan buena como una madre que no trabaja"	0,05	0,73	0,06	0,03	0,07
8 "Una pareja separada puede criar a un niño tan bien como una pareja que vive junta"	0,18	0,58	0,04	0,13	0,33
17 "Está bien que una pareja que no ha podido tener hijos naturalmente tenga un hijo con el óvulo de otra mujer"	0,17	0,09	0,89	0,21	0,16
16 "Está bien que una pareja que no ha podido tener hijos naturalmente tenga un hijo con el semen de otro hombre"	0,21	0,07	0,88	0,19	0,15
18 "Está bien que una pareja que no ha podido tener hijos naturalmente tenga un hijo que sea gestado en el útero de otra mujer"	0,20	0,06	0,82	0,18	0,16
20 "La píldora del día después debiese ser distribuida gratuitamente para las mujeres de escasos recursos"	0,10	0,13	0,16	0,85	0,09
21 "El uso de la píldora del día después es una decisión de cada mujer, no de las autoridades del Ministerio de Salud o de la Iglesia"	0,14	0,17	0,18	0,84	0,05
22 "Un enfermo terminal tiene derecho a solicitar su muerte asistida"	0,12	0,11	0,18	0,66	0,18
7 "Está bien que las parejas vivan juntas y nunca se casen"	0,21	0,19	0,20	0,03	0,72
6 "Está bien que las parejas vivan juntas antes de casarse"	0,13	0,42	0,15	0,13	0,64
1 "La sexualidad sólo debe ser ejercida dentro del matrimonio"	-0,05	-0,06	-0,12	-0,01	-0,63

Matriz de componentes rodados					
Nº de pregunta	1	2	3	4	5
2 "El matrimonio es una institución pasada de moda"	0,21	-0,07	0,01	0,22	0,57
9 "El divorcio es la mejor solución cuando una pareja no puede resolver sus problemas matrimoniales"	0,05	0,25	0,11	0,34	0,38

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Tabla 2

Análisis de regresión logística multivariado. Contrastes de la razón de verosimilitud

Efecto	Criterio de ajuste del modelo	Contrastes de la razón de verosimilitud		
		chi-cuadrado	GL.	Sig.
Intersección	3523,628 (a)	,000	0	.
Edad	3611,344	87,716	4	,000
Posición política	3570,558	46,930	12	,000
Religión	3583,153	59,525	16	,000
RM	3529,640	6,012	4	,198
GSE	3543,973	20,345	8	,009
Sexo	3528,781	5,153	4	,272

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Nota: El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes, entre el modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto son “0”. Este modelo reducido es equivalente al modelo final, ya que la omisión del efecto no incrementa los grados de libertad.

Diagrama de árbol

Análisis factorial

TIPOLOGÍA

Nodo 0		
Muy liberales	20,7%	279
Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por		
parejas gay	34,2%	461
Conservadores excepto tema padres sólo		
con hijos	18,5%	250
Conservadores	16,8%	227
Indecisos y no frente a temas		
homosexuales	6,7%	91
Sin opinión	3,0%	41
TOTAL	100%	1349

P95: ¿Qué edad cumplió Ud. en su último cumpleaños?

Valor P corregido=0,000 / chi-cuadrado=127,684 / gl=15

<=25 años		25 a 53 años		53 a 72 años		>72 años	
Nodo 1		Nodo 2		Nodo 3		Nodo 3	
Muy liberales	37,7% 79	Muy liberales	22,7% 154	Muy liberales	12,3% 40	Muy liberales	4,8% 6
Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por		Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por		Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por		Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por	
parejas gay	31,7% 70	parejas gay	37,8% 256	parejas gay	32,9% 107	parejas gay	22,4% 28
Conservadores excepto tema padres sólo		Conservadores excepto tema padres sólo		Conservadores excepto tema padres sólo		Conservadores excepto tema padres sólo	
con hijos	14,5% 32	con hijos	18,7% 127	con hijos	19,4% 63	con hijos	22,4% 28
Conservadores	13,1% 29	Conservadores	12,2% 83	Conservadores	24,6% 80	Conservadores	28,0% 35
Indecisos y no frente a temas		Indecisos y no frente a temas		Indecisos y no frente a temas		Indecisos y no frente a temas	
homosexuales	1,8% 4	homosexuales	5,6% 38	homosexuales	8,6% 28	homosexuales	16,8% 21
Sin opinión	3,2% 7	Sin opinión	2,9% 20	Sin opinión	2,2% 7	Sin opinión	5,6% 7
TOTAL	16,4% 221	TOTAL	50,3% 678	TOTAL	24,1% 325	TOTAL	9,3% 125

Religión

Valor P corregido=0,000 / chi-cuadrado=42,767 / gl=5

Católica practicante; católica no practicante; ninguna. Evangélica; otra religión.

Nodo 5		Nodo 6	
Muy liberales	25,4% 138	Muy liberales	11,9% 16
Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por		Liberales que no están de acuerdo con adopciones de hijos por	
parejas gay	39,0% 212	parejas gay	32,8% 44
Conservadores excepto tema padres sólo		Conservadores excepto tema padres sólo	
con hijos	19,1% 104	con hijos	17,2% 23
Conservadores	8,5% 46	Conservadores	27,6% 37
Indecisos y no frente a temas		Indecisos y no frente a temas	
homosexuales	5,3% 29	homosexuales	6,7% 9
Sin opinión	2,8% 15	Sin opinión	3,7% 5
TOTAL	40,3% 544	TOTAL	9,9% 134

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Referencias

- BECK-GERNSHEIM**, Elisabeth. 2002. *La reinención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia*. Barcelona: Paidós-Contextos.
- CADORET**, Anne. 2003. *Padres como los demás. Homosexualidad y parentesco*. Barcelona: Gedisa.
- GIDDENS**, Anthony. 1992. *La transformación de la intimidad. Amor, sexualidad y erotismo en las sociedades modernas*. Madrid: Teorema-Cátedra.
- GIDDENS**, Anthony. 1999. *Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas*. Madrid: Taurus.
- GUBBINS**, Verónica et al. 2003. "Familia: innovaciones y desafíos", en *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década, censos 1992-2002*. Santiago: INE-Cuadernos Bicentenario.
- JELIN**, Elizabeth. 1998. *Pan y afectos. La transformación de las familias*. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.
- LEVI**, Jean-Pierre y Jesús Varela. 2003. *Análisis multivariante para las ciencias sociales*. Madrid: Prentice Hall. 1a edición.
- MIDEPLAN**. 2010. *Familia. Encuesta Casen 2009*. www.mideplan.gob.cl.
- OLAVARRÍA**, José. 2005. "¿Dónde está el nuevo padre? Trabajo doméstico: de la retórica a la práctica", en *Familia y vida privada ¿Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?*, Valdés, X. y Valdés, T. eds. Flacso-Chile, Santiago.
- PROGRAMA** de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2002. *Desarrollo humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural*. Santiago: PNUD.
- VALDÉS**, Ximena, Pamela Caro, Rosa Saavedra, Carmen Gloria Godoy, Tania Rioja y Emile Raymond. 2005. "Entre la reinención y la tradición selectiva: Familia, conyugalidad, parentalidad y sujeto en Santiago de Chile", en *Familia y vida privada ¿Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?*, Valdés, X. y Valdés, T. eds. Flacso-Chile, Santiago.
- VALDÉS**, Ximena. 2007. *Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas*. Santiago: CEPAL.
- SEGALEN**, Martine. 2000. *Antropología histórica de la familia*. Madrid: Taurus Universitaria.
- TIRONI**, Eugenio, Samuel Valenzuela y Timothy Scully. 2006. "Familia en Chile. Los impactos de la modernización", en *El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile*. Santiago: Taurus.
- YANAGISAKO**, Sylvia Junko. 1979. "Family and Household: The Analysis of the Domestic Groups", *Annual Review of Anthropology* 8, 161 – 205.
- WEEKS**, Jeffrey, Brian Heaphy y Catherine Donovan. 2001. *Same Sex Intimacies. Families of Choice and Other Life Experiments*. London: Routledge.

Negociando identidad. Las posibilidades del barrio como espacio vinculante con la gran ciudad

FELIPE LINK / MARÍA LUISA MÉNDEZ

El sentimiento de comunidad tiene que ver, según Kim y Kaplan (2004), con tres dimensiones esenciales: el apego o cercanía hacia el lugar, la identidad comunal o comunitaria y la interacción social. El apego se refiere a la trayectoria de los individuos en el lugar y su historia en él. La identidad comunitaria, por su parte, es definida como identificación personal y pública con la comunidad. Finalmente, la interacción social sugiere indagar tanto en ámbitos como la participación y ayuda social, así como en el establecimiento de vínculos de amistad con los otros vecinos, sentimiento de respeto mutuo, estar enterado de los problemas locales y estar vinculados a los vecinos de una u otra manera, etc.

En este trabajo nos interesa continuar la reflexión, iniciada en el contexto del análisis de datos de la Encuesta Nacional UDP desde 2009, en torno a la forma como se entiende el vínculo comunitario, la pertenencia e identificación con el lugar de residencia, y las expectativas que depositamos en la idea de barrio. Así, la Encuesta Nacional UDP 2010 preguntó algunos aspectos relativos a la identidad barrial de los habitantes de la Región Metropolitana y del país. Específicamente, se consultó sobre permanencia en el barrio, intención de cambiar de barrio, percepción de seguridad y manifestación del acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones respecto a la convivencia vecinal e identificación con el entorno.

Como es de esperar, la distribución de las respuestas a estas preguntas es bastante normal, en el sentido de agrupar a la mayoría de los casos en respuestas no polarizadas, dejando aproximadamente un 15% en cada extremo. Ante este panorama, entendemos que no se trata de opiniones radicalizadas en torno a las cuestiones urbanas. Por el contrario, una gran mayoría está relativamente conforme y satisfecha con su entorno y vida barrial y no pretende cambiarla. De hecho, un 67% de los encuestados no quisiera cambiarse de barrio y un 78% se siente seguro o muy seguro en éste, sensación que aumenta a un 87% en la propia casa.

Así, prácticamente todas las transformaciones involucradas en los procesos de desarrollo urbano actual parecen afectar la cotidianeidad en esferas distintas a la vida en el entorno inmediato. Es decir, los cambios en el sistema de transporte y conectividad, en la localización y tipo de

trabajo, acceso a servicios, infraestructura y espacios de recreación, disponibilidad de áreas verdes, seguridad, etc., podrían ser problemas y demandas vinculadas con la urbe, sus centros y vida comunal y metropolitana, pero no parecen afectar, en general, al escenario más íntimo del entorno barrial.

El barrio, en este sentido, emerge como un espacio intermedio entre el mundo privado y la gran ciudad. Actúa como catalizador, asegurando continuidad entre “lo más íntimo del espacio privado de la vivienda y lo más desconocido del conjunto urbano” (Gravano, 2005:158). Específicamente, este autor señala: “La configuración pública del espacio barrial impulsa el proceso de colectivización donde cierto tipo de relaciones tejen encuentros y coexistencias, cuyo soporte es el cuerpo y se manifiesta en la adhesión a un sistema de valores y a la contención dentro de la máscara simbólica, con la cual cada uno representa un papel en esa escenificación con contrato implícito que es el barrio” (Gravano, 2005:159).

El valor de la heterogeneidad social, la diversidad y la posibilidad de encuentro y contacto con el otro que han sido, por definición, unas de las características fundamentales de lo urbano, perderían fuerza en el contexto barrial. Según Gravano (2005), el valor del barrio estaría precisamente en el contrapeso necesario del modo de ser metropolitano, asociado a un estilo de vida cosmopolita, anómico, complejo, de relaciones secundarias e institucionales. Esto es lo que finalmente fundaría la opinión pública en torno al espacio barrial, como un espacio de articulación de escalas, pero que no significa necesariamente que sea el último reducto de las relaciones personales o de los aspectos centrales en la definición de identidad personal y social.

Así, argumentamos a favor de una mirada menos nostálgica en torno al barrio y a la identificación barrial. Observamos que éste se configura como un importante articulador de escalas entre la gran ciudad y el espacio íntimo. Y que entre sus aspectos más destacados y funcionales a este objetivo, aparecen la conectividad y disponibilidad de servicios, y no tan distintivamente la historia personal de los sujetos en el lugar. Adicionalmente, vemos cómo la identificación con el barrio no escapa a la cuestión más “estructural”. Esto es: cómo -en algunos casos- hay mayor movilidad residencial e identificación entre posiciones más privilegiadas y de mayores recursos, y que aquellos que están “fijos” en su lugar pueden aparecer menos satisfechos e identificados.

En este contexto, los datos de la Encuesta Nacional UDP 2010 muestran algunas diferencias significativas que orientan hacia una interpretación contemporánea del barrio, inserto en una realidad metropolitana mayor que responde a una condición urbana en transformación (Mongin, 2006).

Características funcionales versus identidad barrial

Frente a la pregunta por las características más importantes con relación al barrio, las respuestas privilegiaron las características funcionales por sobre las características de la comunidad y la vivienda, lo que aumenta considerablemente las diferencias según tramos de edad o GSE, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 1

Características más importantes del lugar donde vive

P92: ¿Qué es más importante para Ud. en relación al lugar y el entorno donde vive...?

			EDAD				GSE			ZONA	
TOTAL			18 a 29	30 a 45	46 a 60	61 y más	Alto	Medio	Bajo	Gran Santiago	Regiones
TOTAL	n. sin pond	1.302	282	355	363	302	143	613	546	510	792
	n. pond	1.302	359	409	318	216	155	619	528	636	666
Las características y servicios del barrio		44,9%	50,0%	45,8%	38,8%	43,6%	52,2%	45,0%	42,6%	46,0%	43,7%
Los vecinos y la comunidad		31,8%	28,6%	30,9%	34,8%	34,4%	28,2%	29,6%	35,4%	34,8%	28,9%
Las características y calidad de su vivienda		8,9%	8,5%	10,4%	7,3%	9,3%	8,0%	9,9%	8,1%	7,5%	10,3%
Su propia historia e identidad con el barrio y sus lugares		11,2%	9,6%	9,0%	15,6%	11,7%	10,9%	12,3%	10,1%	7,1%	15,2%
NS/NC		3,2%	3,3%	3,9%	3,5%	1,0%	0,7%	3,2%	3,9%	4,6%	1,9%

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Cuestiones como servicios, espacios públicos, conectividad, entre otros, aparecen como aquellos aspectos más relevantes a la hora de evaluar los elementos más importantes del lugar donde se vive. Estas prioridades son compartidas transversalmente, aunque son más marcadas en los segmentos jóvenes y en aquellos de mayor nivel socioeconómico. La segunda prioridad se refiere a las características de los vecinos y la comunidad, lo que parece ser relativamente más valorado por los grupos de mayor edad y de menor nivel socioeconómico, al igual que para Santiago versus regiones. En tercer lugar, pero con un importante 11%, aparece la importancia de la identificación con el entorno, historia e identidad con sus lugares. Aquí llama la atención la diferencia entre Santiago y regiones, donde es dos veces más relevante este último aspecto más intangible que en la capital.

Esta descripción inicial muestra cómo la idea nostálgica y algo romántica acerca del barrio, presente en la literatura sobre comunidad, capital social y relaciones barriales, puede subestimar motivaciones de orden instrumental o funcional que parecen ser relevantes a la hora de evaluar los aspectos más importantes del lugar de residencia. En efecto, vemos que la identidad del lugar es importante, pero no lo más valorado respecto del lugar de residencia.

Esta tabla también representa las diferentes escalas y dimensiones presentes en las respuestas de los encuestados. Es decir, que probablemente el orden de prioridades cambiará en la medida en que las dimen-

siones más íntimas del entorno, como historia personal, vivienda y comunidad, sufran algún tipo de distorsión mayor. Es el caso, por ejemplo, de los barrios afectados por desastres naturales en el pasado terremoto y tsunami de febrero de 2010. En este sentido, otro elemento a considerar en relación a los grados de identificación con el lugar de residencia, tiene que ver precisamente con la percepción más profunda respecto a la valoración del entorno. Para ello, dentro de las posibilidades de un estudio cuantitativo como la Encuesta Nacional UDP, hemos elaborado un indicador a partir de la combinación de las siguientes afirmaciones y sus grados de acuerdo:

- En términos generales, me gusta este barrio.
- Siento que pertenezco a este barrio y me identifico con él.
- En caso de necesidad, siento que puedo contar con mis vecinos.
- Creo que, en general, mis vecinos y yo compartimos los mismos valores y formas de pensar.
- Creo que mis vecinos me ayudarían en caso de una emergencia.
- Vivir en este barrio me da la sensación de vivir en una comunidad.

Una primera revisión de este indicador muestra que todos los grupos socioeconómicos revelan, mayoritariamente, una identificación media o alta con el lugar de residencia. Sin embargo, quienes muestran un mayor porcentaje en este indicador son los de mayores ingresos, con un 39,8%, a diferencia de los grupos medios, con porcentajes cercanos al 20% y 25% y de los grupos bajos de la población, quienes aparecen con una distribución dualizada hacia los extremos del indicador, 15,3%-36,1% (Tabla 2).

Tabla 2

Contingencia GSE_AIM *Indicador

		INDICADOR IDENTIDAD			TOTAL
		Baja identificación con el barrio	Media identificación con el barrio	Alta identificación con el barrio	
GSE_AI	C1				
	Recuento	6	50	37	93
	% de GSE_AIM	6,5%	53,8%	39,8%	100%
	C2				
	Recuento	12	72	22	106
	% de GSE_AIM	11,3%	67,9%	20,8%	100%
	C3				
	Recuento	17	112	39	168
	% de GSE_AIM	10,1%	66,7%	23,2%	100%
	D				
	Recuento	24	122	52	198
	% de GSE_AIM	12,1%	61,6%	26,3%	100%
	E				
	Recuento	11	35	26	72
	% de GSE_AIM	15,3%	48,6%	36,1%	100%
TOTAL	Recuento	70	391	176	637
	% de GSE_AIM	11,0%	61,4%	27,6%	100%

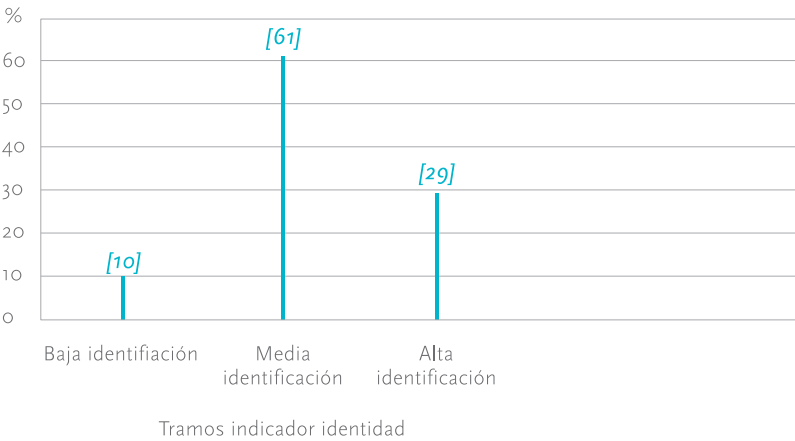
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

En este escenario, la radicalización de las respuestas por parte de la población de bajos recursos se puede interpretar como una dualidad entre el miedo y el arraigo: por un lado, efectivamente son los estratos con mayor participación e interacción social (Link y Méndez, 2010), pero, al mismo tiempo, habitan los sectores más vulnerables y conflictivos de la ciudad.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el Gran Santiago, en general, el 90% de los encuestados presenta puntajes asociados a una identificación con el barrio media o alta, mientras que sólo un 10% presenta baja identificación.

Gráfico 1

Identificación con el barrio



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

A pesar de lo anterior, la distribución de cada una de estas afirmaciones (analizadas individualmente y desagregadas por variables como edad o grupo socioeconómico) aumenta sustancialmente el porcentaje de personas insatisfechas, como se ve en la siguiente tabla. Así, el porcentaje de personas que no cree compartir los mismos valores y formas de pensar con sus vecinos, se incrementa a 34,8% en el grupo entre 18 y 29 años, disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 15,1% en el grupo entre 61 años y más. Por otro lado, en los sectores medios, el rechazo a esta afirmación alcanza el 29,8%. Algo similar sucede con la sensación de vivir en una comunidad.

Tabla 3

Valoraciones desagregadas por edad, GSE y zona

Creo que, en general, mis vecinos y yo compartimos los mismos valores y formas de pensar.											
		EDAD					GSE			ZONA	
TOTAL		18 a 29	30 a 45	46 a 60	61 y más		Alto	Medio	Bajo	Gran Santiago	Regiones
TOTAL	n. sin pond	1.302	282	355	363	302	143	613	546	510	792
	n. pond	1.302	359	409	318	216	155	619	528	636	666
Muy de acuerdo		10,7%	5,1%	10,7%	11,0%	19,2%	11,9%	10,1%	10,9%	11,1%	10,2%
De acuerdo		55,3%	52,3%	52,3%	59,0%	59,4%	56,0%	52,1%	58,8%	58,6%	52,1%
En desacuerdo		23,6%	28,6%	25,9%	21,2%	14,3%	18,9%	26,1%	21,9%	20,7%	26,3%
Muy en desacuerdo		3,2%	6,2%	2,3%	2,4%	0,8%	3,0%	3,7%	2,6%	3,1%	3,2%
NS/NC		7,3%	7,8%	8,2%	6,4%	6,3%	10,3%	8,0%	5,7%	6,5%	8,2%
Vivir en este barrio me da la sensación de vivir en una comunidad.											
		EDAD					GSE			ZONA	
TOTAL		18 a 29	30 a 45	46 a 60	61 y más		Alto	Medio	Bajo	Gran Santiago	Regiones
TOTAL	n. sin pond	1.302	282	355	363	302	143	613	546	510	792
	n. pond	1.302	359	409	318	216	155	619	528	636	666
Muy de acuerdo		12,1%	8,9%	9,6%	13,6%	20,3%	14,2%	10,9%	13,0%	12,2%	12,1%
De acuerdo		58,8%	55,5%	59,5%	59,5%	62,0%	53,9%	58,7%	60,5%	61,3%	56,5%
En desacuerdo		22,6%	27,8%	23,2%	20,9%	15,3%	27,5%	23,7%	20,0%	18,8%	26,2%
Muy en desacuerdo		2,2%	4,1%	2,0%	1,6%	0,3%	1,5%	1,9%	2,7%	2,5%	1,9%
NS/NC		4,2%	3,6%	5,7%	4,4%	2,1%	2,9%	4,9%	3,8%	5,2%	3,3%

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Es interesante observar que en regiones el rechazo a estas afirmaciones aumenta y se aproxima al 30% y 26%, respectivamente, versus un 24% y 19% en el Gran Santiago.

Entonces, si bien existen diferencias en cada una de las afirmaciones -e incluso de entre un 10% y 15% de la población general que rechaza una identificación con el barrio-, no hay aún claridad acerca de las características comunes de este tipo de habitante. Es difícil caracterizar fielmente a este grupo, a partir de variables como edad, zona o GSE. Lo que se puede afirmar es que hay una distribución general que deja un porcentaje de insatisfacción considerable y que, de hecho, vale la pena analizar: se trata de elementos de insatisfacción latentes que pueden resultar en diferentes manifestaciones de conflicto.

De esta manera, si bien la gran mayoría puede asociar positivamente estos valores con su propio entorno y manifestar su confianza, pertenencia y seguridad con el barrio, existe aproximadamente un 10% de los habitantes del Gran Santiago y un 15% en el total del país que, en contraste, tienen una opinión negativa al respecto. Para estos habitantes, el barrio parece ser contraproducente en su función de espacio articulador con la gran ciudad. Por el contrario, en estos sectores, el barrio contribuye al aislamiento social, con las consecuencias negativas que esto supone en diferentes ámbitos de la vida urbana (Kaztman, 2001; Saraví, 2004).

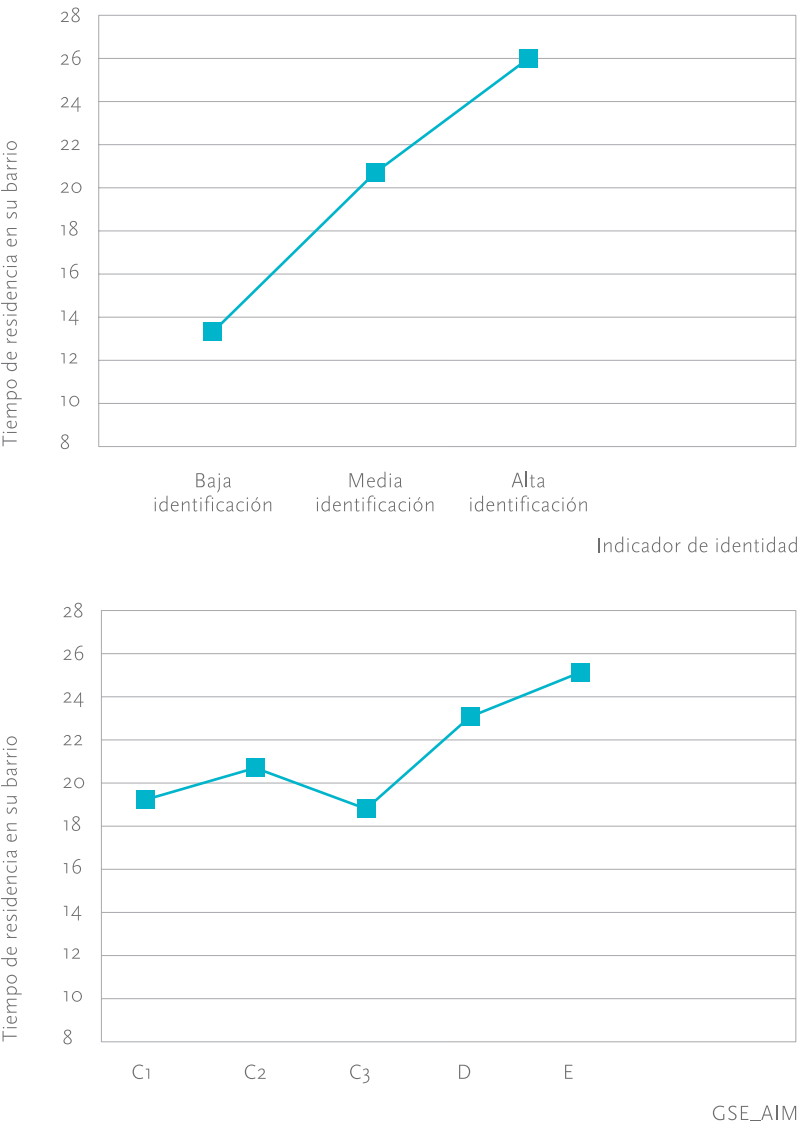
Trayectorias, tiempo de residencia e identidad. ¿Quiénes quieren y pueden cambiar de lugar?

La identificación con el lugar de residencia está íntimamente relacionada con la historia de los sujetos particulares que habitan en él. Por lo tanto, es necesario discutir estos resultados con una lectura a partir de la trayectoria de los encuestados en el barrio .

En general, la identidad con el barrio está mediada, evidentemente, por el tiempo de residencia en el lugar. Esta lectura es bastante esperable y quiere decir que a mayor tiempo de residencia en el barrio, habrá una mayor identificación con él, como se puede ver en el siguiente gráfico. Asimismo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo de residencia en el lugar, o lo que es casi lo mismo, mayor capacidad de moverse o desplegar una cierta movilidad residencial.

Gráfico 2

Identificación según el tiempo de residencia en el barrio

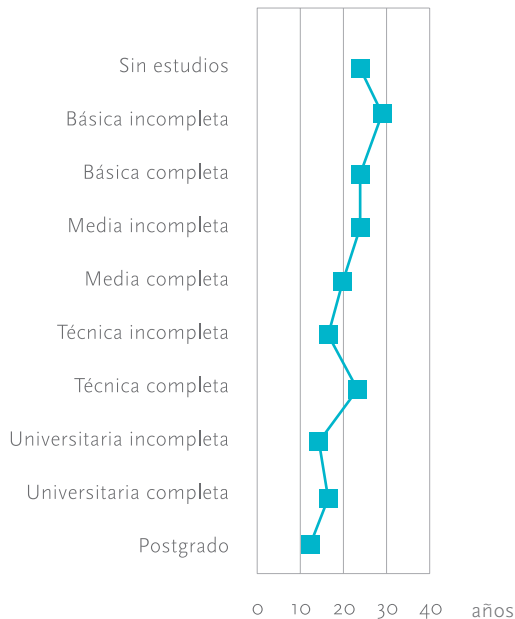


Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Lo mismo ocurre si consideramos el nivel educativo del encuestado, donde a mayor nivel de educación, menor es el tiempo de residencia en el lugar. En cualquier caso, cabe señalar que estos resultados están mediados por la variable edad, en el sentido que, evidentemente, la edad como variable independiente tiene una influencia importante tanto en el nivel educativo (por ejemplo en postgrado), así como en un mayor indicador de identidad.

Gráfico 3

Tiempo de residencia y nivel educativo



Fuente: Encuesta Nacional UDP 2010.

Lo anterior nos plantea una situación interesante de comentar, pues parece ser que quienes ocupan posiciones de mayor privilegio pueden moverse o tener trayectorias residenciales algo más activas que quienes se encuentran en posiciones menos aventajadas. Esto tiene relación con lo que autores como Bauman (2005), Sassen (2007) o Waqquant (2001) han puesto como contrapunto entre quienes tienen la libertad de moverse libremente y quienes permanecen fijos y “condenados” al lugar.

Quienes pueden escoger su lugar de residencia manejan determinados códigos de complicidad que les permiten, por distintos motivos, evaluar positivamente el entorno, y monitorear constantemente cada una de las variables que configuran material y simbólicamente este escenario. Por ejemplo, ante la preferencia consultada entre una casa regular en un buen barrio o una buena casa en un barrio regular, el 74% de los encuestados se inclina por la primera opción, privilegiando el entorno inmediato, entendiendo que responde a variables en las que se tiene menor poder de transformación, pero de lo que se pretende conscientemente formar parte.

Recientes debates acerca de lo que definiría la pertenencia al lugar de residencia, advierten acerca de la necesidad de ampliar la discusión hacia lo que algunos autores han descrito como la política en torno a la pertenencia (*politics of belonging*). Es decir, el conjunto de recursos que -cotidianamente- despliegan los individuos para asegurar su lugar de residencia, el reconocimiento de su pertenencia al mismo y la construcción de barreras respecto de otros. Como lo indica Savage et al. (2005) fenómenos tales como la gentrificación o el desarrollo de comunidades/barrios cerrados, podrían calificar para describir este tipo de tensiones.

Dichos debates han resultado interesantes. Muestran que la dimensión espacial es clave en la forma en que individuos, familias, grupos y clases sociales se ven a sí mismos y quieren ser vistos. En otras palabras, se juegan recursos no sólo económicos, sino también culturales, simbólicos e incluso demandas de orden moral acerca de quién merece pertenecer, o cómo se debe ser para corresponder a ese lugar.

En este contexto, nos llama la atención cómo parte de los datos entregados por la Encuesta Nacional UDP retratan que la movilidad está mediada por cuestiones de orden estructural. La gran identificación con el lugar de residencia, que se manifiesta con mayor fuerza en la medida que hay mayor historia en el lugar, nos hace preguntarnos sobre las bases en las cuales se asienta este tipo de identificación residencial.

2 Se trata de "elective belonging" o lo que podría ser traducido como la pertenencia por elección o electiva al lugar (Bagnall, Longhurst y Savage, 2005).

Como diría Bourdieu, ¿no se tratará de una situación en la que hacemos de la necesidad una virtud? ¿pertenecemos al lugar porque no tenemos muchas opciones o elegimos activamente pertenecer? Como se mencionó, recientes discusiones se refieren a un tipo de residente, de alto capital cultural, que elige pertenecer². Este debate ha sido desarrollado, principalmente, en el contexto europeo. Y ha intentado mirar la forma en que las clases medias reclamarían su derecho a pertenecer al lugar por medio del despliegue de diversas estrategias, muchas de ellas justificadas ética y moralmente, como, por ejemplo, su decisión de renovación del patrimonio arquitectónico o la renovación de alguna comunidad alicaída. De ahí probablemente se explique el mayor porcentaje relativo de los sectores medios, respecto a la aprobación del entorno.

A pesar de lo anterior, quizás este fenómeno estaría menos presente en los niveles socioeconómicos medios y bajos en el caso de Chile y Santiago, en la medida que estos grupos parecen estar más fijos en el lugar. Lo que sí podemos aprender sobre los datos de Chile y Santiago, es que el barrio es importante como un articulador de escalas -entre la gran ciudad y el espacio íntimo-, y que entre sus aspectos más relevantes están, al menos en un primer nivel de respuesta más racional e instrumental, cuestiones bastante prácticas: conectividad, accesibilidad y disponibilidad y calidad de servicios. Por otro lado, en un segundo nivel de respuesta están los elementos intangibles como la historia personal e identidad territorial, que son necesarios de profundizar desde abordajes cualitativos de investigación.

Referencias

- BAUMAN**, Zygmunt. 2005. *Vidas desperdiciadas. La ciudad y sus parias*. Buenos Aires: Paidós.
- GRAVANO**, Ariel. 2005. *El barrio en la teoría social*. Buenos Aires: Espacio.
- KAZTMAN**, Rubén. 2001. "Seducidos y abandonados. El aislamiento social de los pobres urbanos", *Revista de la CEPAL* 75, 171-189.
- KIM**, Joongsub y Rachel Kaplan. 2004. "Physical and Psychological Factors in Sense of Community. New Urbanist Kentlands and Nearby Orchard Village", *Environment and Behavior* 36, 313-340.
- LINK**, Felipe y María Luisa Méndez. 2010. "Ciudad y ciudadanía. ¿El barrio como factor de integración urbana?, en informe de Encuesta Nacional UDP 2009, *Chile 2009: actitudes y percepciones sociales*, 75-83.
- MONGIN**, Oliver. 2006. *La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización*. Buenos Aires: Paidós.
- SARAVÍ**, Gonzalo. 2004. "Segregación urbana y espacio público. Los jóvenes en enclaves de pobreza estructural", *Revista de la CEPAL* 83, 33-48.
- SASSEN**, Saskia. 2007. *Una sociología de la globalización*. Buenos Aires: Katz.
- SAVAGE**, Mike, Gaynor Bagnall y Brian Longhurst. 2005. *Globalization and Belonging*. Londres: Sage.
- WACQUANT**, Loïc. 2001. *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Buenos Aires: Manantial.

Ficha técnica

UNIVERSO. Población de 18 años y más, residentes en 86 comunas de 20.000 habitantes entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Los Lagos. Representa al 85,5 % de la población urbana y al 74% de la población del país.

TAMAÑO MUESTRAL. Se entrevistó cara a cara a 1.302 personas, con un error muestral de +/- 2,72%, considerando un nivel de confianza de 95%.

TIPO DE MUESTRA. La muestra fue probabilística en todas sus etapas:

- Por estratos no proporcional (34 comunas del Gran Santiago y 52 ciudades de las regiones de Arica y Parinacota a la de Los Lagos).
- Por conglomerado (manzanas seleccionadas).
- Selección al azar de viviendas. Dentro de éstas, selección al azar de una persona de 18 años y más.

TRABAJO DE CAMPO. Las entrevistas se realizaron entre los días 11 y 30 de Septiembre de 2010, en 20 días corridos.

REEMPLAZOS. El 76,1% de las entrevistas se realizaron en viviendas y sujetos originales: sus viviendas fueron las sorteadas en primera instancia y ellos fueron los sorteados dentro del hogar. El reemplazo por rechazo, debido a la imposibilidad de contactar a alguna persona en el hogar, alcanzó al 17%.

Sobre los autores

ANDRÉS SCHERMAN. Periodista. Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y director ejecutivo de Tank Comunicaciones. Sus áreas de investigación son consumo de medios, participación juvenil y acceso a la información pública.

BERTA TEITELBOIM. Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Bioestadística de la Universidad de Chile. Coordinadora metodológica de la Encuesta Nacional UDP (2005-2010). Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Sus temas de interés son la pobreza, políticas sociales y análisis de encuestas sociales, además de las metodologías para focalizar problemas sociales y medir sus impactos.

CLAUDIO FUENTES. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos en América Latina, centrándose en temas de calidad de la democracia, seguridad y relaciones internacionales. Actualmente es director de Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

DAVID JOFRÉ. Periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Diplomado en Opinión Pública de la Universidad Diego Portales. Se desempeñó durante tres años como redactor en el *El Mercurio de Valparaíso* y *Terra Chile* y actualmente es asesor de estudios y comunicaciones del Comité de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía.

EMILY JUSTIN-SZOPINSKI. Licenciada en Sociología de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Actualmente ejerce el cargo de product development coordinator de E-Class English y cursa el Magíster en Opinión Pública en la Universidad Diego Portales. Sus áreas de interés son el marketing y la sociología del consumo.

FELIPE LINK. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Sociólogo y magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Actualmente ejerce como

secretario de estudios de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Sus temas de interés residen en la ciudad, su sociología y el urbanismo.

FERNANDO RUBILAR. Cientista político de la Universidad Diego Portales. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). Sus áreas de investigación son el estudio de los sistemas de partidos, opinión pública y democracia.

FLORENCIA HERRERA. Doctora en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona, España. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales áreas de interés son los cambios y las nuevas formas de hacer familia. Fundamentalmente, los análisis relacionados con la adopción, la homosexualidad y la reproducción asistida. Es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

FRANCISCA GATICA. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile con minor en Fundamentos de la Psicología. Diplomada en Administración y Dirección de Proyectos de DICTUC. Actualmente cursa el Magíster en Opinión Pública de la Universidad Diego Portales y es investigadora del Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Sus intereses se centran en la modernización del Estado, educación, tecnologías de la información, género y política.

MARÍA LUISA MÉNDEZ. Doctora en Sociología de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación persiguen los aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social y la construcción de pertenencia en barrios urbanos. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

MAURICIO MORALES. Estudiante de doctorado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Ciencias Sociales, FLACSO-México. Magíster en Ciencia Política y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Periodista de la Universidad Nacional Andrés Bello. Sus áreas de especialización son el análisis electoral y partidos políticos. Académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Director del observatorio Político Electoral.

MODESTO GAYO. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Cientista político de la misma universidad y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Su trabajo se enfoca en el comportamiento político de las clases medias y también en las prácticas culturales. Académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

RODRIGO HERNÁNDEZ. Licenciado en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Se ha desempeñado como investigador en educación y actualmente es investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales.

